

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

POSGRADO EN SOCIOLOGÍA

DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y CULTURA POLÍTICA.

LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA EN MÉXICO

2000-2006

PRESENTA

FERMÍN GUTIÉRREZ SARABIA

PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN SOCIOLOGÍA

ASESOR

DR. ENRIQUE CUNA PÉREZ

LECTORES

DR. ALBERTO ESCAMILLA CADENA

DR. JOSÉ HERNÁNDEZ PRADO

DR. ARTURO GRUNSTEIN DICTER

21 de Septiembre de 2010

Trimestre 10-P

INDICE

	Págs.
Introducción	4
 CAPÍTULO I. LEGITIMIDAD Y DEMOCRACIA, UNA MIRADA SOCIOLÓGICA	 14
1.1 El concepto de legitimidad en Max Weber	14
1.2 Legitimidad democrática	21
1.3 América Latina y la democracia	29
1.4 La teoría política democrática	34
1.4.1 Kelsen y la teoría de la democracia formal procedimental	35
1.4.2 La teoría de las elites, o realista de la democracia (Schumpeter)	44
1.4.3 Norberto Bobbio	47
1.4.4 Robert Dahl	49
 CAPÍTULO II. CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA Y CIUDADANÍA POLÍTICA	 52
2.1 El concepto de cultura política, origen y escuelas	55
2.2 Una cultura política para la democracia real	60
2.3 Cultura política y posmodernidad	62
2.4 Ciudadanía sustantiva y cultura política democrática	66
 CAPÍTULO III. SIGLO XX EN MÉXICO: ESTADO AUTORITARIO, REFORMAS Y CULTURA POLÍTICA	 69
3.1 El régimen revolucionario, el origen legítimo	70
3.2 El sistema político mexicano, breve mirada a su funcionamiento	74
3.3 El estudio de la Cultura Política en México	76
3.4 La larga ruta de la transformación política en México; reformas políticas y movimientos sociales	79
3.4.1 La “apertura democrática” de Luís Echeverría	81
3.4.2 La Reforma Electoral de 1977	82
3.4.3 La Reforma Electoral con Miguel de la Madrid. La crisis económica y los primeros triunfos del Partido Acción Nacional (PAN) en el norte del país	85
3.4.4 El gobierno salinista, la elección del 88 y la creación del Instituto Federal Electoral (IFE)	88
3.4.5 Zedillo y la reforma electoral “definitiva”	92
3.5 Las elecciones del 2006 y el conflicto con la oposición de izquierda. La más reciente reforma electoral	94
3.5.1 La reforma electoral de 2007	95
 CAPÍTULO IV. LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA. CULTURA POLÍTICA EN MEXICO 2000-2006, AVANCES Y CIUDADANÍA	 99
4.1 La cultura política en la larga transición política en México	102

4.2 Legitimidad de la democracia, indicadores desde la cultura política	105
CONCLUSIÓN	123
REFERENCIAS BIBLIOHEMEROGRÁFICAS	128

DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y CULTURA POLÍTICA.

LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA EN MÉXICO

2000-2006

INTRODUCCIÓN

Durante las tres últimas décadas, en diferentes regiones del mundo se instauraron regímenes políticos democráticos ahí donde existían gobiernos autoritarios o abiertamente dictatoriales. Los regímenes, de lo que en su momento se conoció como socialismo real se derrumbaron a principios de los años ochenta, dando paso a una paulatina instauración de la democracia. A ésta, no pocos intelectuales y jefes de Estado, la presentaron como la gran vencedora de la historia frente a los sistemas fascistas y comunista, así como frente a los regímenes dictatoriales de América Latina y otras partes del mundo.

Fueron muchas las expectativas que este proceso histórico creó. Se pensó que con el arribo de la democracia muchas de las problemáticas que el mundo enfrenta tendrían solución. La realidad ha sido que las expectativas fueron superiores a lo alcanzado hasta ahora, y lo que ha sobrevenido es una especie de desencanto democrático. David Altman refiriéndose a este problema señala que los sistemas políticos viven una especie de desafección cívica, caracterizada por una baja en la representación política, la legitimidad del régimen e, inclusive, eventualmente en una amenaza a la calidad de la democracia y su consolidación (Altman, 2006: 13).

Tal desencanto o déficit democrático ha sido producto, entre otros muchos factores, de la carga de expectativas que la democracia generó. Por ejemplo, el desarrollo económico y una más justa distribución de la riqueza, aspiraciones de las diferentes sociedades, especialmente de las más pobres, no ha encontrado en la democracia una opción efectiva. Los índices de pobreza de la región latinoamericana se han incrementado durante los últimos años. Los latinoamericanos piensan en la democracia no sólo como una forma de gobierno sino también, como vía de acceso a mejores niveles de vida. Esperan de la democracia mucho más que la parafernalia que rodea a las campañas políticas (las poses estudiadas, las frases prefabricadas, las descalificaciones mutuas, la

ausencia de propuestas efectivas y factibles, la falta de imaginación política, el despilfarro de recursos, entre otras manifestaciones similares), que han llegado a desencantar a los ciudadanos.

Además, la propia oferta política de los candidatos y los partidos políticos involucra altas expectativas sociales asociadas a la democracia. Se promete bienestar y empleo, más allá de la sola conformación de un gobierno bajo ciertos procedimientos. De ahí que la democracia genere expectativas socio económicas y que, al no tener solución a las problemáticas cotidianas, produzca una decepción en torno de ella.

Las encuestas de opinión en torno al régimen democrático, realizadas en la última década en nuestra región, señalan que la mayoría de la población se encuentra nada o poco satisfecha con el desempeño de las instituciones de la democracia, salvo los casos de Costa Rica y Paraguay (García Canclini, 2005: 23). En el caso de México, los ejercicios e investigaciones al respecto, señalan una preferencia por la democracia como régimen político, pero poca satisfacción con sus resultados (Guerrero, 2004: 144).

Además de las expectativas sociales y económicas asignadas a la democracia, ésta presenta problemas de legitimidad debido a la ausencia de elementos indispensables para su desarrollo, tales como la existencia de un Estado de derecho, el desarrollo de una cultura política democrática y el ejercicio de una auténtica ciudadanía, entre otros.

Los recientes informes del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina, señalan que no hay malestar con la democracia, pero hay malestar en la democracia. Esto es, en nuestra región la democracia política convive con un Estado de derecho limitado y con serios problemas económicos y sociales. Por otra parte, las dimensiones de la ciudadanía política, civil y social no están integradas, y aunque la más avanzada ha sido la primera, las instituciones políticas se han deteriorado. La representación partidaria no encarna los intereses de buena parte de la sociedad (PNUD, 2004).

El último informe considera que la democracia requiere el desarrollo integral de la ciudadanía, lo cual implica tanto el pleno ejercicio de los derechos políticos, como de los civiles y sociales, según ha sido reconocido en diversos documentos de Naciones Unidas. Retomando a O'Donnell, la democracia es más que un conjunto de condiciones para elegir y ser elegido ("democracia electoral"); también es una

manera de organizar la sociedad con el objeto de asegurar y expandir los derechos de las personas (“democracia de ciudadanía”). Esta visión más amplia de la democracia se basa en cuatro ideas principales: a) El ser humano como sujeto portador de derechos; b) La sociedad organizada de modo que garantice el ejercicio y promueva la expansión de la ciudadanía; c) Las elecciones libres y competitivas, junto con la vigencia del estado de derecho, como condición necesaria, aunque no suficiente, de la democracia, y d) La especificidad histórica de los pueblos latinoamericanos en sus procesos de construcción de la nación (PNUD, 2009).

Así pues, creemos que si la ciudadanía es el fundamento de la democracia, la discusión sobre el estado de la democracia y el debate sobre las reformas democráticas debe abarcar las distintas dimensiones de la misma: la ciudadanía política, la ciudadanía civil y la ciudadanía social (la ciudadanía política incluye el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros. Las instituciones correspondientes son el parlamento y las juntas del gobierno local; la ciudadanía civil se compone de los derechos para la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derechos a la justicia; la ciudadanía social abarca todo el espectro, desde el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme los estándares predominantes en la sociedad) (Marshall, 1965).

En resumen, siempre desde una visión más flexible, el PNUD concluye que el logro del desarrollo democrático está íntimamente vinculado con la búsqueda de mayor igualdad social, la lucha eficaz contra la pobreza y la expansión de los derechos de los ciudadanos. La distinción entre *democracia de electores* y *democracia de ciudadanos* propuesta en el informe del PNUD es un punto de partida para nuestro trabajo.

La pregunta que guía esta investigación intenta distinguir, de entre los factores que garantizan la legitimidad democrática, la importancia de la cultura política y la ciudadanía para la consolidación del régimen democrático en el caso de México y más específico: ¿cuál fue el estado de la legitimidad democrática en el caso mexicano entre los años 2000-2006?

El objetivo general de esta investigación es relacionar las categorías democracia y legitimidad desde una óptica sociológica, de acuerdo con las

características de la cultura política predominante en México y las prácticas ciudadanas que de ella se derivan, que en gran medida condicionan tanto la percepción como el funcionamiento de la democracia. Es decir, se busca establecer la relación entre la cultura política en México y la percepción que se tiene sobre la democracia.

Partimos de la hipótesis de que las características, actitudes y valores de la cultura política predominante y la inexistencia de una ciudadanía social y civil activa, están a contracorriente de la necesaria participación informada y confiada de los ciudadanos en los asuntos públicos que atañen a la consolidación de la democracia en nuestro país. Se argumenta cómo esa cultura política tradicional y clientelar, así como esa ciudadanía débil le restan legitimidad a la democracia, al inhibir el involucramiento consciente y activo de los ciudadanos en los asuntos políticos. Solo algunos grupos, sobre todo ubicados en el Distrito Federal, han mostrado gran capacidad de movilización en demanda de muy diversas cuestiones, como servicios públicos, vivienda, igualdad de géneros, derechos de los homosexuales, entre otros. Para operacionalizar tales objetivos se propone un indicador con tres variables básicas (adhesión, confianza y participación) que permitan un acercamiento más preciso al concepto de legitimidad de la democracia.

Suponemos que si la legitimidad de la democracia mexicana es baja, depende en buena medida de la persistencia de una cultura política que fue engendrada a lo largo de muchas décadas en un sistema político autoritario, que no es compatible con las actitudes y comportamientos que presupone el ejercicio del régimen democrático.

Dicha cultura política se objetiva en los actos específicos de individuos que se pueden asumir como ciudadanos de un Estado determinado, más allá de los derechos y obligaciones que la misma ley señala. Esto es, para que una democracia funcione efectivamente, además de los aspectos procedimentales que la misma supone, así como la creación y óptimo funcionamiento de las instituciones, es igualmente importante la existencia de una cultura política que brinde un sustento real al accionar de los presupuestos democráticos. Como plantea Peschard:

“La cultura política es un elemento fundamental del universo político, ya que evoca un problema intrínseco del poder: **el de su legitimidad** (subrayado nuestro), es decir, el de la manera como los gobernados conciben y se representan al sistema político y a sus agentes (gobierno y elites políticas),

reconociéndoles su derecho a adoptar las decisiones políticas, o sea, a ejercer el poder” (Peschard, 1994: 186-187).

La cultura política se asienta en las prácticas, concepciones y valoraciones de individuos, que con su accionar, en uno u otro sentido, refuerzan las estructuras de poder, o las cuestionan. Es decir, en tales prácticas se pueden identificar actitudes pasivas o activas que tienen que ver con la idea de la ciudadanía. El concepto tradicional de ciudadanía concibe a los individuos, ante todo, como sujetos políticos, como ciudadanos, en la medida que éstos reciben de la ley, un conjunto de derechos y obligaciones debido a su pertenencia a un Estado nacional.

Tal concepción de ciudadanía ha sido criticada en función de su estrechez y de su supuesto carácter ideológico, encubridor de fenómenos tales como la desigualdad social, la existencia de clases sociales y las luchas entre éstas. Se dice que, al igualar a todos los individuos bajo una sola categoría, la de ciudadano, se desvirtúa la pluralidad político ideológico de las sociedades, así como la existencia de diferencias económicas sociales profundas entre los individuos y las relaciones de dominación que entre ellos existen.

Desde la sociología, Tamayo plantea que la ciudadanía es un concepto con su propia dinámica, más allá de los controles que sobre ella pueda ejercer el Estado. Los espacios de ciudadanía, en su opinión, son sujeto de lucha permanente y son aún determinados fundamentalmente desde las esferas del poder, sin embargo las luchas sociales generan márgenes de autonomía (Tamayo, 1999: 15). Así, más que de derechos y obligaciones prescritos por ley y garantizados y vigilados por un Estado, se está frente a prácticas ciudadanas que pueden crear espacios de ciudadanía, en la lucha cotidiana por alcanzar o defender diferentes intereses. La ciudadanía se inscribe, entonces, en el contexto de la lucha social -una construcción social-, hacia una ciudadanía sustantiva (Tamayo, 2006; 15).

Sin embargo, en México persiste una cultura política marcada por el clientelismo y el caudillismo, producto de un sistema político que combinó el autoritarismo y el asistencialismo como forma de control de la población y la legitimidad del régimen frente a las demandas sociales.

Los llamados regímenes de la Revolución Mexicana, asumieron que su pretendido origen revolucionario, suponía su compromiso con aquellos sectores sociales menos favorecidos. El cumplimiento de los postulados de los artículos 27 y 123 constitucionales implicó el desarrollo de una política social desplegada a favor

de obreros y campesinos, pero también el control clientelar y corporativo de los mismos. Paulatinamente se conformó una cultura política pasiva y se borró la posibilidad de una ciudadanía que pudiera trascender el simple marco de los derechos y obligaciones, que por demás casi nunca fueron cumplidos.

El resultado fue una cultura política súbdito, en términos de Almond y Verba, así como la premisa de una ciudadanía plasmada en derechos y obligaciones en la Constitución política, pero poco ejercida en la vida real. Es hasta principios de los años ochenta en México, que inician los cambios en las concepciones política, económica y sociales de gobierno, que habrán de incrementarse las prácticas ciudadanas entre ciertos grupos sociales, como señala Tamayo:

“Los fortísimos vientos del neoliberalismo se instauraron en las ideas liberales tradicionales que consideraron al individualismo, al Estado mínimo y a las fuerzas del libre mercado como sus auténticas fundaciones filosóficas. Con tales conceptos se comprometen prácticas políticas que dismantelan los derechos ciudadanos, principalmente los sociales, además de que la búsqueda de una relación de equilibrio entre lo civil, lo político y lo social se cuestiona en esencia” (Tamayo, 1999: 35).

A inicios de los ochentas, luego del agotamiento del llamado “milagro económico mexicano” y su vertiente de finales de la década de los sesenta, el “desarrollo estabilizador”, en México se dio fin a las políticas asistencialistas, que habían permitido el desarrollo de relaciones clientelares entre el Estado y diversos grupos sociales. Las políticas neoliberales impusieron un severo realismo económico a las políticas económicas y sociales desplegadas por el Estado mexicano. La fuente de legitimidad que habían constituido tales políticas desapareció sensiblemente. En adelante, el Estado mexicano debió buscar alternativas a sus propósitos legitimadores, pues la vía de los subsidios y el asistencialismo no alcanzaron para más.

A unos años de implantación del neoliberalismo, las manifestaciones sociales de protesta se magnificaron en el país. El severo desplome salarial y el desempleo, así como el deterioro de los niveles de vida, llevaron a un crecimiento de la inconformidad social que se trasmutó en inconformidad política y se manifestó en los procesos electorales subsiguientes, especialmente en el de 1988, cuando el

partido oficial registró una sensible caída en sus preferencias electorales, además de múltiples cuestionamientos al triunfo de su candidato Carlos Salinas.

La tónica de los años ochenta y noventa fue crisis económica y el avance de la electoral de la oposición. El Partido Acción Nacional (PAN) en una primera instancia, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en un segundo momento fueron vehículo que evidenció los afanes democratizadores de la sociedad mexicana. El Estado mexicano, por su parte, se vio precisado a reconocer espacios de poder a la oposición, como una válvula de escape a la tensión social.

Dada la magnitud de la crisis económica, los efectos de los programas neoliberales para enfrentarla, el desgaste del sistema político, el avance de la oposición electoral, entre otros factores, el Estado mexicano cedió progresivamente a los reclamos democratizadores, hasta que en el 2000 se alcanzó la alternancia en la presidencia de la república. Muchos de esos avances se plasmaron en las diversas reformas electorales que delinearon el rumbo de la democratización del país.

Luego del año 2000, muchas expectativas se levantaron en torno al avance de la democracia en México, sin embargo para muchos mexicanos los resultados no fueron los esperados. El análisis de diversas encuestas así lo demuestran, y creemos que una de las razones que explican estos resultados, más allá de los resultados económicos que se han tenido durante los últimos lustros, es la persistencia de una cultura política tradicional que no permite la manifestación plena de conductas ciudadanas que, de esta manera, den sentido, profundidad y viabilidad a la democracia. Es decir, los avances democráticos tenidos hasta la fecha se han logrado sobre la existencia de conductas, manifestaciones y valores de la mayoría de los mexicanos que fueron engendrados a lo largo de décadas de predominio de los regímenes del nacionalismo revolucionario.

Esto es, los avances no han venido acompañados de un cambio en las conductas y percepciones de la mayoría de mexicanos respecto del poder. La ciudadanía moderna y la cultura política democrática, no aparece en la identidad política de gran parte de los mexicanos. Sin la existencia de estos dos elementos, cultura política democrática y ciudadanía sustantiva, la consolidación democrática en nuestro país es frágil.

Ahora bien, el surgimiento y desarrollo de una cultura política y prácticas ciudadanas participativas, no es un asunto sencillo. Pasa por el tipo de socialización

que los individuos adquieren en diferentes instituciones en las que se desenvuelven a lo largo de su vida. La familia, la empresa, la escuela, el sindicato, la comunidad, son sólo algunas de las instancias en las que el individuo adquiere ciertos hábitos, percepciones y valores respecto del poder y la política, que trasladará al ámbito del sistema político en su conjunto (Peschard, 1994: 203). De la forma en que se conduzca el poder del Estado y el ejercicio de la política a nivel del sistema político, los actores sociales aprenderán pautas de comportamiento, expectativas y valoraciones diversas, en torno al fenómeno del poder que reproducirán en los diferentes ambientes micro en que se desenvuelvan. Son dos ámbitos o niveles que se superponen, se implican y acaban identificándose (Peschard, 1994: 203).

¿Cómo lograr un cambio en los patrones culturales de la política y la ciudadanía? Algunos enfoques dicen que el cambio debe empezar en las instituciones socializadoras básicas, al fomentar prácticas democráticas a efecto de educar progresivamente a individuos más propensos a la aceptación de valores como el pluralismo y la tolerancia. Otro enfoque dice que una cultura política democrática se logra a través de una especie de campaña encabezada por instancias gubernamentales que introyecte en las personas una serie de valores acordes con la democracia. Se trataría de desplegar algo así como una campaña de convencimiento dirigida hacia la población en general (Cruz Revueltas, 2006: 95). Otra visión dice que no se puede predicar en un contexto de contradicciones. Es decir, no se puede pregonar la democracia en contextos donde lo que prevalece son realidades impositivas y corruptas. En tales condiciones las predicas morales resultan inútiles y hasta enfadosas.

Más aún, dice este tercer enfoque, que, en realidad, la existencia de una cultura política ideal, participativa, tolerante, nunca ha existido ni siquiera en las democracias más avanzadas. A lo que se puede aspirar es a la existencia de una cultura política “realista”; factible de ser desarrollada y mantenida en un contexto de múltiples y diversos intereses (Crespo, 2006: 93). Tal cultura política realista no supondría el sacrificio del interés individual en beneficio del interés colectivo, ni ninguna otra actitud de corte idealista. Más bien, se asentaría en el hecho de la negociación y salvaguarda de los intereses individuales, preservando, hasta donde esto sea posible, el interés de la sociedad.

Sin embargo, la asimilación de una cultura política realista por parte de los ciudadanos implica: la constatación empírica de su práctica, especialmente de parte

del gobierno como instancia responsable de atender y procesar el conflicto social; la comprensión del funcionamiento y la lógica interna del sistema democrático, de sus posibilidades y sus límites de parte de los actores sociales; la aceptación por parte de los diferentes actores acerca de que la democracia es el mejor régimen político existente para dirimir las diferencias de intereses y preservar la estabilidad social; el convencimiento de que, a pesar de sus deficiencias, la democracia es preferible a cualquier otra forma de arreglo político.

Este trabajo reflexiona sobre los presupuestos básicos de la democracia, la legitimidad y la cultura política en la realidad mexicana. Para el desarrollo de las anteriores ideas se presenta en el primer capítulo el concepto de legitimidad en Weber y lo trasladamos al campo de la democracia, con el propósito de establecer qué se entiende por legitimidad democrática, lo necesariamente pasa por reflexión acerca de la participación ciudadana. Después, se analizan algunos de los postulados de las principales teorías democráticas, resaltando en ellas el papel, implícito o explícito, que se asigna a los individuos como sujetos activos o pasivos del proceso democrático.

El capítulo segundo, por su parte, pretende inferir la suposición de un carácter ciudadano y de una cultura política participativa en las teorías democráticas revisadas, con el propósito de discutir la óptica más adecuada a través de la cual se puede interpretar la realidad democrática mexicana. Enseguida se revisa el concepto de cultura política, empezando por el concepto clásico de Almond y Verba, llegando hasta las consideraciones realizadas sobre la cultura política y la posmodernidad. El objetivo de este punto es determinar qué se entiende por cultura política y su importancia para la democracia. El capítulo también aborda el tema de la ciudadanía, considerando su vertiente tradicional representada por Marshall, hasta la visión de la ciudadanía llamada sustantiva, que concibe lo ciudadano de una manera más dinámica, más como una forma de lucha, de defensa de intereses (en muchas ocasiones frente al propio Estado) por demandas muy variadas.

El tercer capítulo repasa brevemente al sistema político y las reformas político electoral que han reflejado su transformación. Se destaca el carácter autoritario y paternalista de dicho sistema, que habría de dar origen a una cultura política igualmente autoritaria, sumisa y clientelar, que también es descrita al final de este mismo apartado. Además realiza una breve recapitulación de las reformas políticos

electorales emprendidas a partir de 1977 y hasta el 2007, que reflejaron la apertura del sistema político como consecuencia de diferentes luchas sociales y políticas.

Finalmente, el capítulo cuatro recupera trabajos analíticos que tienen como base la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), dirigidas por la Secretaría de Gobernación, y busca determinar, a partir de datos cuantitativos, si los cambios político electorales ocurridos en México durante los últimos años han venido acompañados de un cambio en la cultura política, en las actitudes ciudadanas, o si, por el contrario, la institucionalidad democrática no ha logrado alcanzar una modificación sensible en los comportamientos y valoraciones de los mexicanos respecto de la política.

Los datos de los ejercicios ENCUP así parecen referirlo, esto explica el déficit de legitimidad que presenta la democracia mexicana. Los mexicanos participan en ella sin llegar a creer firmemente en sus bondades. Lo hacen a partir de pautas de comportamiento y valoraciones que no se corresponden con los presupuestos de una democracia moderna. Lo hacen como producto de campañas mediáticas costosísimas, pero no a partir de un verdadero sentimiento ciudadano. Con la convicción de participación en un ejercicio cívico, libre y soberano de expresión de la voluntad popular.

Para los mexicanos es imperioso superar los obstáculos y remanentes de un pasado autoritario y corrupto que impide la adopción plena de los mecanismos democráticos como forma no solo de organización política, sino de integración social ante una realidad mundial y nacional marcada por la crisis en sus diferentes órdenes:

“Si México no opta juiciosamente por profundizar y perfeccionar su democracia constitucional y moderna, jamás encontrará la manera de hacerse viable”.

(Hernández Prado, 2007: 195)

CAPÍTULO I. LEGITIMIDAD Y DEMOCRACIA, UNA MIRADA SOCIOLÓGICA

Este capítulo tiene el objetivo de presentar el concepto de legitimidad desde la óptica de Max Weber, para después vincularlo con la definición sociológica de democracia. Lo primero que mencionamos es que Weber define la legitimidad como una creencia de los individuos acerca del sistema social en el que viven. La creencia puede ser debida a diferentes motivos, y estos dar origen a distintos tipos de dominación. El mismo Weber señala al respecto:

“De acuerdo con la experiencia ninguna dominación se contenta voluntariamente con tener como probabilidades de su persistencia motivos puramente materiales. Afectivos o racionales con arreglo a valores. Antes bien, todas procuran despertar y fomentar la creencia en su “legitimidad”. (Weber, 1994: 170)

De acuerdo con lo anterior, la creencia en la legitimidad democrática está dada no sólo por factores político electorales, sino también de orden social como el empleo, el salario, el nivel de vida, aspectos no siempre contemplados desde la óptica de la política, que atribuye la baja credibilidad democrática a insuficiencias o fallas en los aspectos procedimentales del régimen político.

Y la dominación constituye un tipo especial de poder. Un poder que se asume como consentido, como legítimo, por aquellos sobre los cuales se ejerce. Weber lo dice de la siguiente manera:

“Debe entenderse por “dominación”, de acuerdo con la definición ya dada, la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos (o para toda clase de mandatos)... ()... un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea de interés (externo o interno) en obedecer, es esencial en toda relación auténtica de autoridad.”(Weber, 1994:170)

En este sentido, es que se puede hablar de la legitimidad democrática, por cuanto el dominio que ejerce un régimen democrático, tiene como origen la decisión voluntaria de aquellos que a través del sufragio universal participaron en su conformación.

1.1 El concepto de legitimidad en Max Weber

Max Weber parte del concepto de relación social para el análisis de las regularidades sociales, esto es, regularidades en el comportamiento que proporcionan una estructura estable y duradera a la relación social (Abellán Joaquín, 2007: 12). Según Weber, se requiere de una probabilidad alta de que los comportamientos se repitan para que la duración o estabilidad de una relación pueda ser confiable. Esta regularidad tiene varias y distintas causas que la originan. Así, identifica aquellas regularidades que consisten simplemente en la práctica cotidiana de determinadas acciones, sin que esta regularidad responda a la existencia de alguna norma en específico.

Dentro de la regularidad se puede ubicar a los usos sociales como la costumbre y la moda. La primera implica la práctica cotidiana de acciones diversas que responden a tradiciones fuertemente arraigadas dentro de una comunidad; la moda, por el contrario, trata de acciones de carácter básicamente emocional, en donde lo novedoso es el atractivo que da origen a la recepción y repetición de determinadas conductas.

Otros usos sociales implican la repetición de acciones debido a la presencia de intereses de índole racional instrumental. Esto es, la obtención de ciertos fines condiciona la repetición de ciertas conductas o comportamientos que se estiman necesarias para poder llegar a los mismos. Si se quiere alcanzar ciertos objetivos concretos se han de adoptar ciertas conductas que se consideren pertinentes para tal objetivo.

Otro tipo de regularidad social, que interesa especialmente a Weber, se origina en el hecho de que las personas integrantes de un grupo social actúen de manera regular bajo la idea de que el orden social en el que viven es legítimo. La percepción de legitimidad de un orden social por parte de los individuos que lo integran o al menos de la mayoría de los mismos, origina la posibilidad de aplicar medidas coercitivas sobre aquellos individuos que no encuadren sus conductas dentro de los preceptos del orden establecido: hecho que constituye el fundamento del derecho y la convención. Sobre esto menciona Weber:

“La acción social y especialmente las relaciones sociales, pueden caracterizarse por el hecho de que las personas participantes en una relación social orienten su comportamiento por la idea de que existe un orden legítimo” (Abellán, 2007: 13).

Las fuentes de legitimidad de un orden han sido diversas a lo largo del tiempo. Originalmente, la legitimidad de un mandato o legislación presuponía que los mismos derivaban o estaban en consonancia con el orden imperante. Es decir, la legitimidad del orden tradicional descansa en el supuesto de que valores y normas se fundan en un principio de justicia, que está por encima del libre albedrío de los hombres, que por naturaleza es imperfecto.

Dado lo anterior, el término legítimo se usa cotidianamente como sinónimo de razonable. De algo aceptable para los involucrados en una relación social, en procura del interés de la sociedad al que se considera primario o superior. Esto es, lo legítimo tiene una justificación en relación con un interés o bien común, situado por encima de los múltiples intereses de los individuos. De acuerdo con esto, las diferentes interpretaciones de justicia están en la base de las distintas concepciones que existen sobre la legitimidad.

La justicia en tanto principio fundador de un orden social, tiene orígenes divinos, naturales, históricos o racionales. Las distintas interpretaciones del principio de justicia que sustenta la legitimidad, no sólo tiene implicaciones teóricas, sino que también implica los límites del poder político. Qué es justo y qué no, o en qué medida una decisión puede ser catalogada de justa o injusta, por adecuarse o contravenir un orden dado más allá de la voluntad humana, representa una limitante al poder político.

El concepto de legitimidad de Weber representa una crítica radical a la concepción tradicional de la legitimidad al trascenderla, al mostrar sus bases subjetivas, valorativas, que, por lo mismo, no puede pretender una aceptación universal. El supuesto orden natural o divino al que se otorga legitimidad por parte de un grupo de hombres, descansa, también, en creencias, en valores subjetivos de esos mismos individuos. Lo cual implica que se privilegian, se aceptan ciertos valores, y se desechan otros.

Esto es, existe un conflicto de valores insuperable, no es posible acceder a una neutralidad valorativa. Forzosamente se toma posición frente a los hechos sociales y, desde luego, frente a un orden social.

Cuando Weber resalta la naturaleza insuperable del conflicto de valores pone en duda, al mismo tiempo, la existencia de un principio (divino, natural, histórico, o racional) en el que puedan fundamentarse y, gracias a su mediación, reconocerse o establecer una jerarquía entre ellos.

De esta manera Weber rechaza el concepto de justificación propia de la definición tradicional de legitimidad. Así pues, la fundamentación de la legitimidad de un orden ocurre desde los intervinientes en la relación social. Es decir, son los individuos los que percibirán la legitimidad o no de un determinado orden de acuerdo a sus propios y distintos principios valorativos.

El que los participantes en una acción social actúen pensando en que existe un orden social legítimo, es decir, en que existen unas normas obligatorias para el comportamiento en la que ellos se reconocen, frente a las cuales se obligan, aumenta la probabilidad de que la acción vaya a ser repetida, incrementándose por consiguiente la estabilidad o regularidad de la pauta de comportamiento. A decir de Weber:

“Un orden legítimo representa de esta manera una forma estructurada de regularidad social” (Abellán, 2007: 13).

La regularidad social no descansa solamente en la costumbre o en el interés de los individuos, sino que la regularidad o la estabilidad social queda sancionada además desde fuera: desde el derecho o la convención que los mismos individuos reconocen como válidos. El derecho y la convención son órdenes normativos que cuentan con una sanción para los comportamientos desviados del orden.

De acuerdo con lo anterior, la validez de un orden social podrá considerarse válido siempre y cuando los mismos individuos que lo integran estén de acuerdo en que sus acciones sociales sean modeladas por los principios de ese orden.

Como es fácil advertir, Weber introduce una fundamentación subjetiva en la validez del orden. A tal percepción subjetiva de la obligatoriedad de un orden la denomina Weber creencia en la legitimidad. Y aunque no define con amplitud, para él más bien tiene un carácter axiomático.

“La legitimidad presupone que los individuos asumen las normas que constituyen un orden social como obligatorias o como modelos, es decir, como algo que “debe ser”.” (Serrano, 1994: 12)

La legitimidad está dada sobre todo por aquellos individuos sobre quienes se ejerce un dominio que aceptan como válido, como legítimo. Así, Weber distingue cuatro tipos de motivos por los cuales los hombres pueden atribuirle legitimidad a un orden: tradición, creencia arraigada en el ánimo –creencia emocional-, creencia en

que algo tiene un valor absoluto, en virtud de que el orden esté establecido legalmente.

La legalidad del orden puede extraer su legitimidad de haber sido establecida mediante un acuerdo o por la imposición desde un poder considerado legítimo al que se le obedece. La legitimación de un orden por el carácter sagrado de la tradición es la forma más antigua y más universal de legitimación, mientras que la forma de legitimidad más frecuente actualmente es la creencia en la legalidad del orden, es decir, la creencia en que el proceso de establecimiento de un orden nuevo se ha realizado correctamente desde el punto de vista formal y en la forma regulada.

La creencia en la legalidad de un orden implica, por tanto, dos cosas: por un lado la racionalidad formal de sus normas, y por otra, el cumplimiento de un procedimiento considerado como correcto.

Del orden social legítimo y de los tipos de órdenes, Weber pasa al concepto de organización o de grupo social con un poder estructurado, donde la dominación se presenta como una función reguladora de la vida social. Los grupos sociales organizados cuentan con ordenamientos que le son impuestos por un poder, pues el que un orden sea establecido por el acuerdo de todos los integrantes del grupo social, es más bien un caso límite.

La imposición es lo característico de la mayor parte de los órdenes, incluso en aquellos casos en los que el poder ejecutivo del grupo organizado descansa en el principio democrático de la mayoría, pues la minoría tiene que someterse a la mayoría.

A favor de la imposición está, además, el hecho de que las personas pertenecen necesariamente a una determinada comunidad política; por ejemplo por poseer determinadas características de nacimiento, residencia, etc., en el territorio de esa comunidad. Estos fenómenos convierten la necesidad de establecer ordenamientos para regular la vida social de una coacción política.

Entonces legitimidad implica la probabilidad de que determinadas personas obedezcan un mandato con un contenido determinado. La probabilidad de que determinadas órdenes, o todas las órdenes, encuentren obediencia en un grupo determinado de personas.

Así, la dominación es para Weber, una forma específica de poder, aquella en la que se presta obediencia a un mandato. Es una relación de poder específica en la que no se da una imposición de la voluntad de uno sobre otro, sino en la que existe

un sometimiento, una obediencia, una aceptación del mandato, lo cual indica ya que existe una base, un motivo para ello (Serrano, 1994: 41).

Weber restringe el término dominio para el tipo de relación de poder en la que existe un fundamento para la obediencia, es decir una relación que permita augurar con toda probabilidad el cumplimiento del mandato dado por una persona a otra.

Es este tipo de relación de poder en la que se produce una estructura de mando obediencia, la que resulta relevante para la sociología. Relación que no se genera cuando el poder consiste simplemente en la mera imposición de la voluntad de una persona sobre otra. La sociología se ocupa de estructuras, de acciones guiadas por reglas, por procedimientos. En la relación de mando obediencia a que se refiere el concepto de dominio, el poder se anida en una estructura social. En este concepto de “dominación”, como relación de mando- obediencia, Weber destaca que no basta el mero resultado fáctico de que se produzca el cumplimiento de una orden dada, pues lo relevante en esa relación es la aceptación de la orden recibida como legítima. Es decir, la obediencia en los términos de aceptación del mandato “como si” los que obedecen hubiera hecho suyo realmente el mandato recibido.

Este “como si” es lo relevante, lo decisivo en la definición de dominación. No es sólo el hecho de que se obedezca el mandato que una persona o personas dan a otra persona o personas, si no el hecho de que se cumpla “como si” se hubiera hecho propio, como si se hubiera aceptado como un mandato válido o legítimo.

Lo que a Weber le interesa realmente es la existencia de un poder (dominación) que reclame obediencia y la encuentre realmente. La perspectiva sociológica de este fenómeno le llevará a preguntarse qué motivos llevan a las personas a obedecer un mandato impartido por una u otras personas, y cómo se organiza el poder (dominación) para poder ejecutar su mandato.

Weber parte de la idea de que quién tiene la capacidad fáctica para mandar cuenta con la existencia de un orden normativo y opera necesariamente con el aparato conceptual jurídico.

El concepto Weberiano de dominio va más allá de la teoría clásica de la soberanía popular, al poner la cuestión de las estructuras políticas en el centro de su teoría de la dominación. Pues, lo relevante de la relación mando- obediencia, es que la aceptación del mandato se produce, entre otros motivos posibles, por considerar legítimo al poder del que emana.

Ante esto, Weber se pregunta por los motivos por los que se puede considerar legítimo al poder. Es decir, el tipo de legitimación que se le puede atribuir al poder por parte de los sujetos, y desde ahí fórmula la clasificación de las distintas formas de dominación acorde con la legitimación atribuida al poder.

Así, después de seguir a Weber, entendemos a la legitimidad como la creencia en la validez de un orden social por parte de un número relevante de miembros de ese mismo orden social. Vista de esta manera, la concepción weberiana constituye una crítica a la noción tradicional de legitimidad que considera como legítimo a un orden social, en tanto se encuentre en consonancia con un orden trascendente, natural, histórico o divino.

Y esta legitimidad es otorgada por aquellos que son objeto de dominio en un lugar y momento histórico determinado. Es decir, los valores existentes en un momento dado en una comunidad son decisivos en cuanto a la concepción de legitimidad de un orden dado. La legitimidad supone la aceptación del dominio o autoridad sobre aquellos sobre los cuales se ejerce. A diferencia de las relaciones de poder que suponen la imposición de una voluntad sobre otra.

Weber identifica tres tipos puros de dominio: tradicional, carismático y racional. Tipología para comprender la definición de dominio referida a un régimen de gobierno:

“La dominación nos interesa aquí ante todo en cuanto está relacionada con régimen de gobierno. Toda dominación se manifiesta y funciona en forma de gobierno” (Emmerich, 1990: 95).

Con esta idea, dominación en un régimen de gobierno, es que hablamos de legitimidad democrática, por cuanto la democracia es un régimen que supone el ejercicio de un poder consentido, de una dominación.

La democracia es por definición un dominio fundado en la voluntad de los votantes. Su aceptación debería ser amplia, siempre y cuando lograra concitar la mayor participación posible de votantes. Sin embargo, esta situación no es así. Ya sean mayores o menores los niveles de votación en determinados lugares y momentos, la democracia no goza de gran legitimidad. Más bien se habla de un desencanto democrático.

En el régimen democrático el ejercicio del poder es consentido, legítimo. Entre más votación ocurra en un proceso electoral, más legítimo podría considerarse al

gobierno surgido del mismo, pues su origen es la participación electoral y el respeto al voto. Godofredo Vidal dice al respecto:

“Es sensato suponer que la participación electoral es un indicador de confianza en el régimen democrático. Alta confianza indica que la ciudadanía confía en la competencia electoral partidista para alcanzar sus preferencias políticas. Baja confianza indica lo contrario y es un síntoma de baja institucionalización y baja credibilidad de los partidos políticos” (Vidal, 2007:12).

No obstante lo anterior, existen otros criterios que pueden ponerse en juego, al considerar la legitimidad de un régimen democrático. No sólo de aspectos electorales procedimentales se nutre la legitimidad democrática, sino también de aspectos de carácter social que igual influyen en las percepciones de los ciudadanos en torno a la democracia, y son determinantes en cuanto a la legitimidad que la misma pueda alcanzar, tal y como ha podido observarse durante los últimos lustros en América Latina.

1.2 Legitimidad democrática

De acuerdo con Juan Linz, al hablar de legitimidad democrática se habla del ejercicio del sufragio universal cómo origen de todo gobierno que se asume como democrático. Dice Linz:

“Nuestro análisis empieza con la existencia de un gobierno que ha alcanzado su poder mediante un proceso democrático de elecciones libres, y sobre esta base reclama la obediencia de los ciudadanos dentro de su territorio, con una probabilidad relativamente grande de que ellos cumplan” (Linz, 1987: 36-37).

La obediencia reclamada puede tener como fuente el temor a la imposición de sanciones, hasta la creencia en el derecho del gobierno de exigir obediencia, de los ciudadanos.

Se considera que, en general, los individuos obedecen por costumbre y en función de un cálculo racional de conveniencia. Sin embargo los regímenes democráticos procuran descansar en una relación mando- obediencia mucho más estructurada. El apoyo ciudadano en un régimen democrático, está en función de la capacidad de un gobierno de mantener activos unos compromisos para hacer cumplir decisiones que conciernen a la colectividad.

En tiempos normales, la costumbre y el cálculo racional de las ventajas puede asegurar la obediencia, pero en situaciones de crisis, cuando la autoridad del gobierno se ve atacada por algún grupo de la sociedad o cuando las decisiones afectan a muchos ciudadanos negativamente, esto no es suficiente. Y lo es aún menos cuando los que ostentan la autoridad tienen que hacer uso de la fuerza en el contexto de una guerra civil, donde reclaman el concurso de una parte de la población para enfrentar a otra.

La creencia en su legitimidad es necesaria para asegurar la capacidad de un gobierno para llevar al cabo sus diferentes decisiones. Nunca, en ningún lugar, todos los ciudadanos han otorgado una legitimidad plena a sus gobiernos, pero ningún gobierno puede subsistir sin que esta creencia la comparta un número sustancial de estos ciudadanos.

Los gobiernos democráticos necesitan de esta creencia, con mayor o menor intensidad, entre la mayoría de la población. Un gobierno democrático debería ser considerado legítimo incluso por su oposición política. Es decir, en una auténtica contienda democrática los derrotados reconocen el triunfo de su adversario, al haber aceptado las reglas de la contienda electoral, y al reconocer la validez del triunfo de su opositor.

La legitimidad es la creencia de que a pesar de sus limitaciones y fallos, las instituciones políticas existentes son mejores que otras que pudieran haber sido establecidas, y que en función de ello pueden exigir obediencia. Significa que cuando los que constitucionalmente ostentan el poder exigen obediencia y otro grupo lo pone en duda en nombre de una alternativa de orden político, los ciudadanos optarán voluntariamente por seguir las órdenes de los que ostentan la autoridad.

La legitimidad de un régimen democrático se apoya en la creencia en el derecho de los que han llegado legalmente a la autoridad para dar cierto tipo de órdenes, esperar obediencia y hacerlas cumplir. Tal creencia no implica el estar de acuerdo con el contenido de las normas, ni brindar apoyo a un gobierno en particular, sino en aceptar su derecho a mandar hasta en tanto se produzca un cambio de acuerdo con los mecanismos establecidos por el régimen político en cuestión.

Los regímenes democráticos implican que el control del gobierno se gana sin usar la fuerza, de acuerdo con procedimientos democráticos tales como la libre

competición para ganar el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, y el uso de mecanismos constitucionales para controlar las decisiones de los que gobiernan. La creencia está basada en la expectativa de que los que gobiernan, ante un voto de censura y el requerimiento para que abandonen el poder por medios legítimos, no lo intentarán retener por medios ilegítimos.

La democracia legítima, por tanto, requiere la obediencia a las reglas del juego tanto por parte de la mayoría de los ciudadanos que han votado como por parte de los que detentan la autoridad, así como la confianza de los ciudadanos en la responsabilidad del gobierno. Esto es, los miembros de una comunidad otorgan o retiran la legitimidad de día con día. La legitimidad no existe con independencia de las acciones y las actitudes de personas concretas. Los regímenes, por tanto, gozan de más o menos legitimidad por el mero hecho de existir.

En una democracia es muy posible que fluctúe rápidamente la cantidad e intensidad de apoyo concedido a gobiernos, líderes, partidos y medidas políticas, mientras que la convicción en la legitimidad del sistema no se altera. Es decir, se puede estar a favor del régimen democrático, aunque se descalifique a alguno o algunos de sus principales elementos, o medidas tomados por ellos.

No obstante lo anterior, hay una clara interacción entre el apoyo al régimen y el apoyo a los partidos en el gobierno, que en ausencia de otros indicadores lleva a usar los resultados electorales y las respuestas de la opinión pública como evidencia indirecta de la legitimidad del sistema (Linz, 1987: 40).

La pérdida de apoyo de todos los actores políticos en un régimen democrático puede muy fácilmente llevar a una erosión de legitimidad del mismo régimen, de igual forma que un amplio apoyo al gobierno, especialmente más de los que lo apoyan con su voto, es muy probable que contribuya a reforzar la legitimidad del sistema democrático.

Ahora bien ¿en qué reside la creencia en la legitimidad de las instituciones democráticas? A esta pregunta fundamental se pueden intentar las siguientes respuestas.

La socialización política en torno de la democracia registrada a lo largo del mundo durante muchos años es un importante elemento en la creencia en su legitimidad, y ésta es una ventaja para las democracias que llevan mucho tiempo establecidas y cuyos sistemas de educación, información, prensa y cultura de elite

han permitido la penetración y comprensión de los ideales democráticos (Linz, 1987: 41).

Existe también un sentimiento compartido más allá de los límites nacionales, de que un tipo particular de sistema político es el más deseable o el más dudoso. Este sentimiento tiende a verse reforzado o debilitado por la percepción positiva o negativa de otros Estados o naciones más poderosas que tienen éxito con un tipo particular de régimen (Linz, 1987: 41).

Como Weber observó, ningún tipo de legitimidad se encuentra en forma pura en ninguna sociedad. La mayoría de la gente presta obediencia a un régimen basándose en un complejo conjunto de creencias. Por tanto, la legitimidad democrática se ve frecuentemente fortalecida al convertirse en una forma de tradición, y el carisma personal de los líderes democráticos comprometidos con el régimen tiende a reforzar sus instituciones.

En último término, la legitimidad de la democracia se basa en la creencia de que para un país concreto y en un momento histórico dado, ningún otro tipo de régimen podría asegurar un mayor éxito de los objetivos colectivos. Es decir, entre la mayoría de la población no debe existir la idea de que, por ejemplo, un sistema autoritario, a pesar de cancelar las libertades individuales, sea preferible a la democracia en razón de su supuesta mayor eficacia en la resolución de las demandas sociales.

En relación a la legitimidad democrática, Maurice Duverger señala que el modelo democrático liberal ha llegado a ser la base del sistema oficial de los valores políticos en la mayor parte de las naciones del mundo, incluso cuando están sometidos a un régimen autoritario. Tal generalización de los principios democráticos hace referencia a la vez al sufragio universal y a los derechos del hombre. Como señala Maurice Duverger:

Incluso cuando un usurpador se adueña del poder por la fuerza, su primer deseo es hacerse convalidar por medio de las elecciones. La ceremonia electoral es necesaria, para la investidura, aunque se trate de pseudoelecciones. Los principios y las formas democráticas han llegado a tener una aceptación tan universal que es difícil para cualquier gobierno pretender alejarse de ellas.

“Casi todos los gobernantes obtienen su legitimidad de una investidura popular por el sufragio universal. Un gobierno que no se apoye en la elección de los

ciudadanos no es un verdadero gobierno los ojos de los hombres de hoy.”
(Duverger, 1992: 67)

La igualdad de todos los hombres, que supone la existencia para cada uno de los derechos fundamentales (libertad de pensamiento, de expresión, de religión, de asociación, etc.), forma igualmente parte del fondo común de los valores políticos contemporáneos.

Como el sufragio universal, estos principios son consagrados por la mayor parte de las constituciones, incluso las de los regímenes autoritarios y dictatoriales. En estos últimos, la declaración de tales principios queda en letra muerta, pero las referencias al modelo liberal por los dictadores es en definitiva un reconocimiento a su legitimidad.

Muy raros son los regímenes que no invocan esta legitimidad. Incluso los fascismos no los rechazan por entero. Su nacionalismo les lleva a considerar a los otros pueblos como inferiores; pero, en el interior de su propia nación han aplicado, generalmente, la igualdad de los ciudadanos y el sufragio universal. El nacional socialismo reconocía el poder absoluto de un hombre, pero sólo en la medida en que contaba con la confianza del pueblo alemán, atestiguado por los plebiscitos con sufragio universal. Sólo los Estados racistas descartan los principios democráticos. El racismo al dar como sentada la inferioridad de unas clases respecto de otras, descarta los ideales de igualdad y libertad en que se fundamenta la democracia.

La investidura por los ciudadanos a través del sufragio universal es la única base posible de legitimidad desde el momento en que no se cree que el poder provenga de Dios, ni que se transmite por herencia. Incluso si se admite que el poder debe ser ejercido por la “élites”, los “mejores”, los “superhombres”, es necesario que sean reconocidos como tales por sus conciudadanos. El sostén popular, el apoyo de las masas es necesario a todos los gobernantes si quieren aparecer como legítimos. Las dictaduras de las últimas décadas del siglo anterior, personalizadas o de partido, siempre justificaron sus acciones y su poder en nombre del pueblo, de la sociedad. Incluso, cuando algún dictador se apropió del gobierno por medio de un golpe militar generalmente arguyó un propósito superior en nombre del pueblo, que casi siempre fue la salvación de éste del caos, de la anarquía, o de cualquier otro difuso mal. Duverger señala que:

“El modelo democrático comprende tres elementos esenciales: la designación de gobernantes mediante elecciones por sufragio universal, la existencia de un parlamento con grandes poderes, y una jerarquía de normas jurídicas destinada a asegurar el control de las autoridades públicas por jueces independientes. Estas instituciones tienen el mismo fin: impedir que el poder político sea demasiado fuerte para salvaguardar las libertades de los individuos” (Duverger, 1992: 71).

En relación a la legitimidad democrática y el significado etimológico de la palabra democracia, Sartori señala que “...al afirmar que “el poder es del pueblo”, se establece una concepción sobre las *fuentes* y sobre la *legitimidad* del poder” (Sartori, 2003: 46).

Entonces, se quiere decir que el poder es legítimo sólo cuando su investidura viene de abajo, sólo si emana de la voluntad popular, si es y libremente consentido.

En cuanto teoría sobre las fuentes y sobre la titularidad legitimadora del poder, la palabra “democracia” indica cuál es el sentido y esencia de lo que pretendemos y esperamos de los ordenamientos democráticos. Una sociedad libre, no oprimida por un poder político discrecional e incontrolable, ni dominada por una oligarquía cerrada y restringida, en la cual los gobernantes “respondan” a los gobernados.

Hay democracia cuando existe una sociedad abierta en la que la relación entre gobernantes y gobernados es entendida en el sentido de que el Estado está al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, en la cual el gobierno existe para el pueblo y no viceversa.

Sartori considera que la legitimidad de la democracia proviene de una especie de razón histórica, luego de que los diferentes regímenes políticos que alguna vez compitieron y se enfrentaron con ella, finalmente fueron destruidos por movimientos revolucionarios de distinto tipo, desde las monarquías absolutistas medievales hasta el comunismo marxista, y desde la Revolución Francesa hasta el colapso del socialismo real en la Europa del este en los años ochenta del siglo pasado.

“La caída del muro de Berlín, el 9 de Noviembre de 1989, es el símbolo del fin del Estado Revolucionario por antonomasia. La disolución del comunismo nos deja en presencia de un vencedor absoluto: la democracia liberal” (Sartori, 2003: 365)

En relación a esta última afirmación de Sartori, Anthony Giddens dice algo similar:

“La fuerza impulsora de las revoluciones de 1989 fue la democracia o el autogobierno” (Giddens, 2000: 82)

Para este autor el triunfo histórico de este tipo de gobierno es tal que, en su opinión, la democracia es

“... el principio activo más poderoso del siglo XX.” (Giddens, 2000: 82)

Lo cierto es que como lo señala Hernández Prado:

“La democracia política moderna, sin embargo, está hoy más extendida de lo que pareciera y hay una nítida tendencia histórica mundial a adoptarla y adaptarla en diferentes culturas y latitudes” (Hernández Prado, 2007: 24)

Para Robert Dahl una sociedad política es democrática si cumple ciertos requisitos institucionales formales:

1. El control clave de las decisiones gubernamentales en torno a la política está depositado constitucionalmente en los funcionarios elegidos.
2. Los funcionarios son elegidos en elecciones periódicas y llevadas a cabo limpiamente, en donde la coerción es relativamente rara.
3. Prácticamente todos los adultos tienen el derecho a votar en la elección de los funcionarios.
4. Prácticamente todos los adultos tienen el derecho a participar como candidatos a puestos de elección en el gobierno, si bien la edad límite puede ser más alta para tener un puesto que para ejercer el sufragio.
5. Los ciudadanos tienen derecho a expresarse, sin el peligro de severos castigos, sobre cuestiones políticas, definidas ampliamente, incluyendo críticas a funcionarios, al gobierno, al régimen, al orden socioeconómico y la ideología prevaleciente.
6. Los ciudadanos tienen derecho a buscar fuentes alternativas de información. Más aún, existen fuentes alternativas de información y están protegidas por la ley.

“Para alcanzar sus diversos derechos, incluyendo aquellos enlistados arriba, los ciudadanos también tienen derecho a formar asociaciones u organizaciones relativamente independientes, incluyendo partidos políticos” (Dahl, 2006: 100).

Como se puede observar, el concepto de democracia en Robert Dahl va más allá de lo puramente electoral, pues incluye el ejercicio de derechos como el de expresión, de información, de asociación, sin los cuales el concepto de democracia es muy limitado. La democracia tiene su origen en la voluntad popular, pero su ejercicio requiere de ciertos derechos y garantías que deben ser asegurados por el propio Estado. Como se puede apreciar, los autores citados dan una gran importancia a la voluntad general, expresada a través del voto popular, en tanto fuente originaria de un gobierno democrático. Sin embargo, un conjunto de derechos civiles y garantías individuales, características de un Estado de derecho, son también indispensables a todo régimen que se pretenda auténticamente democrático.

Robert Dahl, al igual que Duverger y Sartori, considera a la democracia como un régimen preferible a cualquier otro de los conocidos en el siglo XX. En su opinión son varios las ventajas que ofrece la democracia a los ciudadanos de los estados con este tipo de gobierno: evita la tiranía, asegura derechos esenciales, asegura la libertad personal, permite la autodeterminación, la autonomía moral, el desarrollo humano, la protección de intereses personales, la igualdad política, la paz y la prosperidad. (Dahl, 2006: 56)

“Gozando de todas estas ventajas, la democracia constituye para la mayoría de nosotros una apuesta mucho mejor que cualquier alternativa equiparable a la misma.”(Dahl, 2006: 72)

De acuerdo con lo anterior, la legitimidad de la democracia radicaría, esencialmente, en el hecho de que el mandato que se deriva de ella proviene del ejercicio soberano de un mayor número de ciudadanos. Es precisamente este elemento el que diferenciaría a la democracia de otros regímenes políticos como la monarquía, la oligarquía, la aristocracia o la dictadura, donde la fuente del poder y las decisiones que éste adopta, no pasan por la consideración de las mayorías, sino que se quedan en el reducido albedrío de un grupo, o de un personaje. La democracia, al menos en su acepción clásica, es el gobierno de los muchos, no de pocos, ni mucho menos de uno solo.

Ahora bien, de su fusión con el liberalismo, la democracia adoptó una serie de elementos como la libertad de expresión, la libertad de reunión, de asociación, de

publicación, entre otros del mismo sentido, que hoy día constituyen baluartes de la democracia, sin los cuales la legitimidad del poder democrático quedaría cercenado.

Resumiendo, la legitimidad democrática está dada, entonces, por la aceptación mayoritaria de los ciudadanos respecto del gobierno que los rige. Al involucrarse de manera profunda en la designación de sus gobernantes, tales ciudadanos estarán mostrando rasgos de una cultura política democrática participativa, que legitimaría a los encargados de tomar las decisiones públicas.

1.3 América Latina y la democracia

Luego de décadas de gobiernos autoritarios, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos alcanzaron el poder por métodos democráticos, y se implantaron regímenes de ese mismo tipo en la región, que siguen las formas y procedimientos políticos que caracterizan a las democracias avanzadas (Salinas Figueredo, 1999: 15).

Cada país ha vivido su experiencia concreta, específica, pero en general se puede hablar de la implantación de leyes e instituciones que pueden ser catalogadas como democráticas. Muy diversos ejercicios electorales se han realizado en los diferentes países, obteniéndose variados resultados, pero en general se puede hablar de una implantación aceptablemente lograda de los mecanismos y procedimientos democráticos.

No obstante lo anterior, como ya se mencionó al principio del capítulo, y a pesar de los múltiples esfuerzos de los gobiernos de la región, la percepción ciudadana acerca de la democracia, de su democracia, es muy poco favorable. Priva en la región una especie de desencanto democrático.

Tal desencanto puede atribuirse a muy diversos factores: culturas políticas atávicas, persistencia de la corrupción, incremento de la presencia y poder de los poderes políticos de facto, disminución del poder estatal, incremento de la pobreza y el desempleo etc. Este último (los malos resultados económicos sociales de los países de la región) es uno de los factores más importantes en América Latina y su asunción plena y legítima de acuerdo con resultados del PNUD 2004 (Cuna, 2007: 181).

Es decir, los avances que se puedan tener en el aspecto democrático formal, resultan desdeñados ante la carencia de satisfactores sociales básicos que los

individuos requieren con urgencia y que piensan pueden obtener a través de mecanismos democráticos.

Importantes autores ubicados más en el marco de la sociología, interrelacionan los aspectos económico sociales y las realidades político formales de la democracia, en especial la formación de ciudadanía, en los cuales podemos encontrar una explicación al llamado desencanto democrático.

Bauman, por ejemplo, considera que los derechos políticos son indispensables para instaurar los derechos sociales, éstos a su vez, son indispensables para instaurar los derechos políticos. Unos no pueden sobrevivir sin la existencia de los otros. Los derechos sociales son la base sobre los que se logra el desarrollo de la persona, la cual, al tener un mejor desarrollo de sus capacidades intelectuales, está en mejores condiciones de luchar por sus derechos políticos.

“Sin derechos sociales para todos, un gran número de personas –cada vez más, seguramente- encontrara que sus derechos políticos son inútiles y carentes de interés” (Bauman, 2008: 96).

Bauman dice que la democracia moderna, a diferencia de la democracia de nuestros días, no se limitó a adaptar sus instituciones a la realidad social sino que buscó incidir sobre ella, transformándola. Desde esta perspectiva, la democracia moderna tuvo una dimensión social, pues pretendió transformar las condiciones sociales desfavorables al desarrollo de una democracia plena, como son la pobreza y la exclusión social.

“La democracia moderna pasó a encargarse de desarrollar instituciones y procedimientos con el fin de reformar las realidades sociales” (Bauman, 2008: 97).

La democracia debe transformar la realidad de tal manera que incida sobre las condiciones sociales que permitan el surgimiento y el ejercicio de derechos tanto sociales como políticos. Una de esas condiciones básicas es el trabajo y su adecuada remuneración, en tanto elemento vinculante con la educación, la salud y la alimentación; satisfactores primordiales en el desarrollo integral de un individuo.

En relación al trabajo asalariado y su importancia para el ejercicio de la democracia, Ulrich Beck argumenta que al destruirse o deteriorarse severamente

este elemento, nervio vital de las sociedades modernas, se resquebraja la relación entre capitalismo, Estado asistencial y democracia. El mismo autor precisa:

“La democracia nació en Europa y E.U., como democracia de trabajo en el sentido de que la democracia se apoya en el reparto del trabajo remunerado” (Beck, 1998: 95).

Beck piensa que en la capacidad económica está la posibilidad de libertad política de los individuos. El trabajo remunerado sustenta la vida privada y la existencia de la vida pública; la existencia de la democracia misma. El trabajo permite la autonomía de la vida privada frente al poder estatal. El desarrollo de intereses personales y la defensa de los mismos. El trabajo bien remunerado proporciona los satisfactores que posibilitan el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y éticas de los individuos.

Por su parte, Guillermo O'Donnell, politólogo argentino, señala una característica importante de los gobiernos y Estados en la región latinoamericana:

“... estos Estados y sus respectivos gobiernos tienen escasa capacidad para democratizar sociedades en las que una larga y muy asentada historia de desigualdad demanda persistentes esfuerzos en los que un Estado ensanchado debería jugar un papel central” (O'Donnell, 2003: 34).

En opinión de este autor, el Estado ha perdido terreno frente a poderes fácticos que son capaces de imponer sus intereses al interior del Estado, y sobre el interés de las mayorías.

O'Donnell parte de la idea de que, en términos generales, los Estados latinoamericanos son débiles, en función de que han sido deficitarios en el cumplimiento de tres funciones básicas que el autor asocia a todo Estado moderno: la eficacia, la eficiencia, y la credibilidad. Por eficacia se entiende la capacidad de un Estado de proveer de ciertos satisfactores sociales básicos a su población, a través de políticas públicas operadas por un cuerpo burocrático moderno. Es decir, con capacidad operativa para traducir los programas de gobierno en acciones concretas de beneficio y desarrollo económico social. Se requeriría en cambio, de una burocracia no dispendiosa ni corrupta, profesionalizada; que regule sus acciones en el marco de la ley. Una burocracia que haga un uso y asignación racional de los de por sí escasos recursos.

Por eficiencia se entiende el imperio de la ley en las diversas relaciones sociales. El ejercicio del derecho sin distingos sociales, culturales, de género, o por cualquier otro motivo. Un Estado de derecho auténtico supone la existencia de instituciones probas y eficientes. En América Latina, sin embargo, este no ha sido el caso. El derecho, su ejercicio, ha estado sometido a la discrecionalidad de los impartidores de justicia. A la influencia del poder y del dinero. Los más desfavorecidos en lo económico social han resultado, también, los más afectados en la impartición de la justicia.

Dado lo anterior, la credibilidad en cuanto aceptación de la población latinoamericana de las instituciones políticas existentes es bastante débil, así como de las acciones cotidianas de los gobiernos que, invariablemente, pretenden legitimar su dominio, buscando hacer creer que todo lo que hacen, es en beneficio de la sociedad. La legitimidad del Estado y, en general, de las instituciones frente a las demandas sociales es baja (O' Donnell, 2003: 33).

El autor considera que tal déficit de los estados latinoamericanos se debe tanto a factores estructurales de origen histórico muy remoto, como a fenómenos de más reciente aparición como el neoliberalismo y la globalización. A la dependencia económica, al subdesarrollo, la pobreza ancestral de la región, se viene a sumar las nuevas realidades del capitalismo mundial, que imponen condiciones más difíciles para las sociedades latinoamericanas.

Para O' Donnell el conjunto de fenómenos mencionados pone en peligro no sólo la consolidación de la democracia en la región, sino su existencia misma. La democracia requiere de un Estado fuerte. Entendido como un Estado que sea un buen administrador de los escasos recursos existentes, y que de esa manera se logre mejores niveles de vida para todos. Se requiere un Estado que respete y haga valer la ley sin distingos sociales, y que, de esa manera, logre una credibilidad social que lo fortalezca, que lo legitime.

Por su parte, Boaventura de Souza, sociólogo brasileño, dice que las sociedades modernas, a diferencia de las tradicionales, permitieron el ascenso social de los individuos más allá del origen de su nacimiento. Sin embargo, dice, las políticas neoliberales y la globalización han cancelado todo tipo de expectativas para la mayoría de la población mundial, especialmente de la ubicada en los países más pobres, como los latinoamericanos.

“Este colapso de expectativas es el colapso de la sociedad misma, el colapso del contrato social, es el contrato de las poblaciones desechables, son procesos de exclusión irreversibles. La gente deja de ser ciudadana y es el paso de la sociedad civil a lo que yo llamo la sociedad incivil: tanta gente que vive con desigualdad y donde hay un colapso total de expectativas porque están totalmente dependientes de fuerzas poderosas sobre las cuales no tienen ningún control” (De Souza, 2003: 38).

De Souza argumenta que se vive una especie de fascismo social, en el cual la parte más fuerte de la sociedad tiene capacidad de veto sobre la más débil. Tal forma de sociabilidad origina el surgimiento de violencia política que asume dos formas: la violencia política organizada y un tipo de violencia masiva, común, que se ejerce en forma despolitizada de los grupos favorecidos a los más vulnerables, y del Estado a los grupos sociales más pobres.

Lo anterior debido a que la globalización neoliberal terminó con una tensión creativa entre la democracia y el capitalismo. Es decir, si en un principio el contrato social resultaba muy injusto, los trabajadores lucharon por sus derechos y lograron hacer de ese su trabajo un motor de ciudadanía. (De Souza, 2003: 38)

Hoy ese motor se encuentra muy diezmado, pauperizado, y mientras el trabajo es un recurso global que se puede encontrar en todos lados donde resulte más barato, el mercado de trabajo sigue siendo esencialmente local para los trabajadores que no pueden desplazarse a través de las fronteras.

El otro factor que el autor señala como causa de lo anteriormente descrito es la función del Estado como agente de interacciones mercantiles, que obliga al ciudadano a tratar de resolver sus necesidades en el ámbito del mercado. Es decir, el Estado ha reducido la esfera de lo social que posibilitaba la atención de las necesidades de los más desfavorecidos, llevándolos a una situación de abandono ante la escasez de trabajo ya mencionada.

En consonancia con este planteamiento, Pablo González Casanova señala que es necesario precisar el concepto de democracia como poder efectivamente de la mayoría. Como forma de lucha contra la explotación, contra la sangría ocasionada por la deuda externa, contra el predominio de los monopolios privados que no tienen interés en resolver los problemas de la humanidad y de los más pobres.

La democracia con el poder del pueblo, supone, dice González Casanova, el control del mercado por parte de las mayorías, así como de las decisiones fundamentales. No se puede admitir una democracia oligárquico-tecnocrática, ni una democracia colonial, ni una transnacionalizada de pequeños grupos dominantes. Al respecto señala:

“Tenemos que hacer un esfuerzo por precisar nuestros proyectos de democracia como pluralismo religioso e ideológico, como equilibrio de poderes, como respecto de autonomía, y como predominio de la representación electoral en la mayoría en la toma de decisiones sobre economía, deuda externa, privatización, desnacionalización, libre comercio, ingresos, y gastos públicos, zonas de libre comercio o articulación con Estados Unidos, salarios directos e indirectos a trabajadores y empleados, subsidios directos e indirectos a exportadores, banqueros y especuladores, o sobre educación de alta calidad para unos cuantos o para la mayoría” (González Casanova, 1990: 100).

Las democracias plenas, no sólo procedimental -electorales, requieren de justicia social y de la vigencia plena de los derechos y garantías individuales de todos los ciudadanos. En la existencia de tales derechos radica, en buena medida, el surgimiento de comportamientos ciudadanos, portadores de una cultura política democrática, que haga efectivos los alcances amplios de la democracia. Democracia, bienestar, trabajo, derechos sociales y políticos, ciudadanía, incluyente y participativa, son realidades que no se pueden disociar entre sí.

1.4 La teoría política democrática

Las teorías o doctrinas políticas en tanto elementos del discurso político tienen un impacto directo sobre las prácticas políticas, en la medida en que suponen una cierta visión de la realidad a la que interpretan, dan sentido, y contribuyen a moldear. Las teorías y doctrinas políticas establecen una cierta organización de la vida política, del funcionamiento de las instituciones, y del papel de los individuos, a partir de ciertos valores y principios fundamentales. Como señala Roberto Gutiérrez:

“A través de discursos, ideas, proyectos y símbolos se producen imágenes de un futuro posible y deseable que funcionan como ofertas políticas orientadas a satisfacer las demandas de los sujetos. Como sostiene Óscar Landi, los dispositivos ideológicos configuran identidades y “ciudadanías políticas”,

susceptibles de recorrer el amplio marco de posiciones que van del totalitarismo a la democracia” (Gutiérrez, Diciembre 2001: 36).

Las diferentes teorías políticas han abordado de manera distinta el problema de la relación entre la democracia y la participación de los individuos en los asuntos públicos. Algunos enfoques suponen a la democracia el ámbito natural para la participación de los individuos, mientras que otros autores, ven a los individuos, no siempre como sujetos activos dentro de la política. Si ciertas corrientes teóricas dan por supuesto la existencia y preponderancia de la ciudadanía al interior del régimen democrático, otras suponen sólo marginal, o ficticia la importancia de los sujetos al interior del régimen democrático, viendo en las elites al real sujeto de las decisiones de poder:

“... para los elitistas la democracia se reduce a un juego de minorías que compiten en un mercado político por la preferencias de las mayorías. La política se asemeja al mercado y los ciudadanos devienen en consumidores. Para los enfoques participativos, por el contrario, la cuestión democrática no es un asunto que competa exclusivamente a las elites, pero los mecanismos de participación de las mayorías en los asuntos públicos suele limitarse a procesos acotados como elecciones o consultas (Dossier Metapolítica, Octubre-Diciembre 1997: 509).

Otros enfoques, sin negar la existencia de la dominación al interior de la democracia, suponen la existencia de espacios de participación política para distintos grupos sociales, que pueden de esa manera influir sobre las decisiones políticas, o sobre la rotación de las elites en el poder. Esta última concepción concibe a la democracia como un sistema flexible, evolutivo; adaptable a las transformaciones históricas, y a la aparición de nuevos actores políticos.

A continuación revisaremos brevemente algunos autores que explícita o implícitamente abordan el problema de la interrelación entre la democracia, el individuo y la participación política. Hemos elegido a los siguientes autores porque creemos que representan puntos extremos en la temática que hemos abordado.

1.4.1 Kelsen y la teoría de la democracia formal procedimental

Las fuentes de la legitimidad han sido diversas a lo largo del devenir de la humanidad. Entre las comunidades primitivas la fuerza, la destreza física, la

longevidad, los supuestos poderes sobrenaturales, entre otros, fueron tenidos como elementos justificadores del dominio ejercido sobre clanes y tribus de diverso origen y composición.

En las sociedades avanzadas, la religión y la tradición se instituyeron en elementos legitimadores del poder constituido. Las dinastías gobernaron por mucho tiempo, con el peso de la tradición y el respaldo de las iglesias.

En estas sociedades el poder estuvo rodeado de una aureola mística, mágica. El poder no era asunto de hombres profanos. Su ejercicio estuvo reservado a elegidos, a miembros de castas, que estuvieron siempre cerca de los designios de un poder ultra terrenal.

Un largo proceso histórico hizo variar tal percepción humana. El mundo se racionalizó, se desencantó en términos de Weber. El poder se humanizó, se hizo laico, asunto terrenal. La fuente del poder se encontraría en el hombre mismo, en el pueblo, en la sociedad.

El liberalismo político cuestionaría el poder del soberano absoluto. La Revolución Inglesa, La Revolución Francesa, La Independencia de las Trece Colonias de Norte América, entre otros hechos históricos fundacionales, abrieron paso a una nueva concepción en el ejercicio del poder: la democracia.

La democracia parte del supuesto de que el poder soberano radica en el pueblo, y es éste, mediante la expresión de su voluntad, el que crea las instituciones que organizan el ejercicio del poder. El pueblo sólo delega su soberanía en las autoridades por él constituidas, pero la conserva y la puede retirar en cualquier momento. La democracia pasará a ser, progresivamente, la forma legítima de organización del poder en las sociedades occidentales.

El hombre, el ciudadano, constituye el poder. Pero lo constituye en procura de su beneficio, de su interés personal y colectivo. Luego entonces, la cuestión está en encontrar la forma más idónea de configurar un régimen político, de manera que salvaguarde este principio democrático fundamental.

Una de las corrientes de pensamiento más influyentes acerca de la idea democrática, de sus principios y fines últimos, es la del liberalismo político, que constituye la base doctrinal e institucional de la mayoría de las constituciones políticas del mundo occidental. A continuación analizaremos los postulados de Kelsen que es uno de los mayores exponentes de esta corriente liberal, tan influyente en el mundo contemporáneo.

Kelsen piensa que el funcionamiento de la democracia es de orden básicamente procedimental y racional. Tal carácter es la garantía, según el mismo autor, de que no surgirán, ni podrán encontrar justificación alguna, pretensiones totales de configurar, de un modo unilateral y ahistórico, los contenidos de la libertad, que sólo pueden proceder del ejercicio no inhibido de esa misma libertad (Schmitt, 2006: 16).

Ese carácter procedimental implica que no hay principios o verdades absolutas. Que nadie puede, ni debe, arrogarse la pretensión de poseer en exclusiva una verdad absoluta, o de representar un interés indiscutible. Todas las posiciones son libres.

Kelsen considera que el ideal democrático sintetiza dos postulados de la razón práctica, que son, a la vez, dos instintos primarios de la vida social: la igualdad y la libertad. Todos los hombres son iguales y, al serlo, son también libres; pues nadie tiene un mayor valor para gobernar sobre los demás. No obstante lo anterior, se plantea el viejo dilema roussoniano de la libertad del hombre y su necesidad de vivir en sociedad. El problema de la libertad enajenada por los vínculos sociales, que sólo puede ser resuelto a través de la idea del mítico contrato social, mediante el cual el hombre libre se une a sus congéneres para la conservación de su vida, de su propiedad, de su igualdad y, en última instancia, de su libertad misma. Kelsen señala lo siguiente:

“Del supuesto de nuestra igualdad-ideal-puede inferirse la tesis de que nadie debe dominar a nadie. Pero la experiencia demuestra que para seguir siendo iguales necesitamos soportar un dominio ajeno. Por esto la ideología política no renuncia jamás a hacer solidarias libertad e igualdad, siendo precisamente característica para la democracia la síntesis de ambos principios” (Kelsen, 2005: 16).

Kelsen, siguiendo a los autores del contractualismo clásico, piensa que el paso de un estado de naturaleza a uno donde existe el orden y la autoridad, no suprime la libertad sino la transforma. De esta manera, la libertad propia de la anarquía se convierte en libertad democrática.

Desde esta óptica el pueblo es el titular de la soberanía que ejerce a través de sus representantes electos al parlamento. El pueblo en el ejercicio de su libertad

soberana da origen a la democracia, que es una forma de expresión de la voluntad general en procura del bien común. Kelsen escribe:

“La democracia es la idea de una forma de Estado o de sociedad en la que la voluntad colectiva, o más exactamente el orden social, resulta engendrado por los sujetos a él, esto es, por el pueblo” (Kelsen, 2005: 30).

Ya en el estado político, el hombre no sólo reivindica sus derechos frente al poder estatal, sino que contribuye en la conformación del mismo mediante el ejercicio del sufragio universal. Como se puede ver, Kelsen habla de un tránsito desde una visión liberal a otra de carácter democrático.

Para el autor comentado tiene gran importancia el papel de los partidos políticos en el funcionamiento de la vida democrática y del Estado mismo, pues, en su opinión, ayudan a definir y conformar la voluntad general. El papel del parlamento es, desde luego, vital en el funcionamiento de la democracia, pues al no ser posible la democracia directa, el pueblo, único titular de la misma, la ejerce de manera indirecta, delegada, en ese cuerpo del Estado.

El individuo, es el actor fundamental de la democracia. Los individuos a través de actos básicamente racionales, encuadrados en las estructuras democráticas, son capaces de alcanzar el bien común en función de un supuesto interés general. La ciudadanía se expresa a través del sufragio que es visto como un acto supremo y fundador. La participación ciudadana se limita fundamentalmente a ese acto de votar, pues las estructuras democráticas serían capaces de garantizar, por si solas, la existencia de una ciudadanía con una cultura política democrática.

El concepto de democracia a nivel procedimental, está compuesto de un conjunto de principios, de procesos, de instituciones, que prescriben, en un nivel fundamentalmente teórico, los elementos mínimos que debe reunir un régimen político que se ostente como democrático.

Nos movemos esencialmente en el plano del “deber ser”. Con una idea prescriptiva frente a la cual debe contrastarse, medirse, la realidad histórica concreta. Y es que la conceptualización de la democracia como dice Sartori, no puede obviar alguna de estas dos dimensiones. Teoría y realidad empírica confluyen en la definición de este concepto.

“...el problema de definir la democracia se desdobra, porque, si por un lado la democracia requiere de una definición prescriptiva, por el otro no se puede olvidar la definición descriptiva” (Sartori, 2003: 46).

De acuerdo con lo anterior, en el nivel de la prescripción, nos preguntamos acerca de los elementos mínimos que debe tener un modelo de régimen al cual se pueda calificar de democrático, y la función que dentro de tal modelo debe tener la participación ciudadana.

Kelsen, señala un conjunto de principios e instituciones que sostienen la idea democrática, los cuales van en el sentido de lograr una mayor participación de los individuos en los asuntos públicos, que dan su legitimidad a la democracia.

Para este autor uno de los principios fundamentales de la democracia es el de la soberanía popular. En el pueblo reside la facultad de crear al poder, a las instituciones que lo acompañan. Esta idea, que hoy es una obviedad de la filosofía política, en su momento constituyó una transformación de carácter civilizatorio en el devenir de la humanidad.

Por debajo de la argumentación a favor de un determinado régimen político se encuentra una reivindicación del ser humano. El hombre progresivamente se apartará del fanatismo religioso. Empieza a hacerse cargo de su destino. Pasará a ocupar un lugar central en un mundo que se vuelve hacia el laicismo. Durkheim, en sus lecciones de filosofía señala:

“El individuo adquiere derechos cada vez mayores de disponer de sí mismo, de las cosas que le son atribuidas, de hacerse en el mundo aquello que le parezca más conveniente, de desarrollar libremente su naturaleza” (Durkheim, 1985 :57).

Si el hombre puede crearse a sí mismo, puede crear las instituciones políticas que mejor le acomoden en el terreno de su propia libertad. El hombre es un ser libre. Con su propio albedrío puede construir el mundo que su imaginación y voluntad le permitan. Es este otro de los supuestos fundacionales en que descansa la democracia.

La libertad del hombre sólo es posible si va acompañada de la igualdad entre todos los hombres. Si alguno o algunos asumen una superioridad intrínseca sobre los demás, la libertad y la democracia no son posibles. Los hombres poseen los mismos derechos y las mismas obligaciones, al ser partícipes de la creación de un

contrato social que transformó su libertad natural en libertad política. El hombre es un ser libre e igual, y por lo tanto un ser ético, moral; responsable de sus actos.

En este orden de ideas el ideal democrático es uno de los más altos preceptos del humanismo; la reivindicación de la libertad, la igualdad y la dignidad humana, frente a los poderes despóticos que las negaban. El ser humano como ente creador de su persona, de su destino, de su forma de organización política, que no puede ser otra que la democrática.

Si los anteriores son, a nuestro criterio, los principios de la democracia moderna, pasemos ahora a señalar las instituciones que organizan el poder en este tipo de régimen político.

El hombre, en su condición de ciudadano, ejerce su libertad soberana a través de dos instituciones creadoras de legitimidad; el sufragio universal y la representación política.

Ante estas exigencias se puede clasificar a la democracia en dos dimensiones o tipos: la directa y la representativa moderna. La primera que existió en la Grecia antigua, entre otros lugares, supuso una participación directa en la asamblea de la Polis, de aquellos hombres que disfrutaron de la condición de ciudadanos. Deliberar, decidir, de manera personal frente al resto de los ciudadanos, fue una forma democrática de enfrentar y decidir sobre los asuntos públicos (Dahl, 2006:18-19).

Las características de las llamadas Ciudades-Estado de la antigüedad, pequeñas y poco pobladas, facilitaron este tipo de democracia. Es necesario aclarar que la condición de ciudadanos estuvo negada a mujeres, esclavos y otros grupos sociales.

En las modernas sociedades, grandes y complejas, la democracia directa es prácticamente imposible. Sus dimensiones imponen otras formas de organización política. La democracia representativa ha sido la alternativa a las nuevas realidades históricas.

Los ciudadanos han delegado en otros su poder soberano. Si la deliberación y toma de decisiones de manera directa es imposible, los ciudadanos eligen a sus representantes, que serán los encargados de salvaguardar sus intereses ante los órganos representativos de la soberanía nacional.

La creación de los órganos del Estado a través del sufragio de carácter universal, es la característica más distintiva y reciente de las modernas democracias.

Los órganos del Estado, creados de forma democrática, se encargan de la creación de las leyes, su aplicación y su sanción.

La mayor o menor representación de tales órganos se alcanzará en la medida en que, con sus actos concretos, sean capaces de reflejar la voluntad mayoritaria del cuerpo electoral soberano.

Ahora bien, como dice Kelsen, para que lo anteriormente señalado se algo más que buenos propósitos, es necesario que exista una responsabilidad jurídica a nivel personal, de los integrantes de tales órganos frente a los electores. Por ejemplo, estos últimos deben tener el derecho de poder remover a sus representantes electos, en ciertas circunstancias que así lo ameriten. Tal disposición está encaminada a garantizar un mínimo control sobre las decisiones gubernamentales que impactan sobre la sociedad.

El otorgamiento del voto a todos los ciudadanos, sin distingo de géneros, profesión o condición social, es una premisa fundamental de la democracia. Como ya señalamos, el voto universal, que iguala en el plano jurídico a todos los hombres, es una de las instituciones democráticas de más reciente aparición. Hasta apenas mediados del siglo pasado, se alcanzó el voto para las mujeres en varios países que se ostentaban como democráticos.

Si el sufragio universal tiene una importancia fundacional para un régimen democrático, es evidente la importancia que tiene la organización de su captación, procesamiento y divulgación. En la medida que el voto es el vehículo de expresión de la voluntad soberana, es indispensable la presencia de una institución electoral autónoma, eficaz y creíble; que conduzca los procesos electorales de una manera transparente e imparcial.

Las elecciones deben realizarse de modo frecuente. De manera que se evite la perpetuación de intereses o camarillas, que vayan en contra de los intereses sociales. Es decir, deben establecerse plazos perentorios, lo suficientemente cortos, a efecto de que el voto soberano pueda retirar de tajo, algún gobierno que con sus actos se haya desviado del interés de sus mandantes.

El reflejo de la voluntad general en los resultados electorales, debe cuidar todos los aspectos que posibiliten la obtención de tal objetivo. Incluyendo aspectos que, a primera vista, parecieran puramente técnicos u operativos, como por ejemplo la distribución adecuada del territorio que comprenda determinada circunscripción,

especialmente en el caso de elecciones parlamentarias o de diputados, para el sistema presidencial.

El territorio geográfico que debe ser dividido en tantos distritos como representantes haya que elegir. Además, atendiendo a un principio de igualdad, entre los mismos distritos debe haber proporción entre el número de votantes que contengan y el número de representantes elegidos por cada distrito.

A efecto de evitar posibles distorsiones entre el número de votantes real para cada partido y su representación en el órgano legislativo, los sistemas político democráticos han instituido la representación proporcional. Tal representación garantiza que la fuerza relativa de los partidos en la asamblea representativa, sea la misma que en el cuerpo electoral.

Otra de las grandes bondades de la representación proporcional, es que permite la representación de todos los grupos políticos, incluso los minoritarios. Más que una imposición mayoritaria, en una democracia auténtica debe prevalecer el compromiso entre ambos grupos sociales, que finalmente posibilite la incorporación de los postulados de la minoría, así sea de manera parcial, en la creación del orden social.

Dos instituciones de capital importancia en la consecución de un orden democrático, son la iniciativa popular y el referéndum. Lo son porque ambas suponen la combinación de la democracia directa con la indirecta. En la iniciativa popular el parlamento debe decidir sobre proyectos de ley presentados por un grupo determinado de ciudadanos. Mientras que en el referéndum, ciertos proyectos de ley del parlamento deben ser aprobados por el voto popular, para adquirir el carácter de ley.

En las modernas democracias las organizaciones civiles y los partidos políticos desempeñan un papel fundamental en la existencia de una lógica democrática. Los partidos políticos movilizan y organizan a la opinión pública, alientan y encauzan las distintas concepciones y posiciones. Fomentan la participación política, entre otras importantes tareas.

Kelsen, en su teoría del Estado, llega a decir que es tal la importancia de los partidos políticos en la formación de los órganos del Estado, que se justificaría que formaran parte del mismo.

Las distintas organizaciones civiles, tales como los sindicatos o las organizaciones no gubernamentales, defienden y reivindican ante el poder

constituido, asuntos muy particulares o específicos de los individuos, aglutinados en grupos de carácter gremial o profesional, o como demandantes de diversos asuntos como vivienda, derechos humanos, ecología, entre otros varios.

La existencia de estos grupos independientes, refuerzan las posibilidades de un auténtico grupo democrático, al potenciar las fuerzas de los individuos permitiéndoles una mayor capacidad de resistencia o negociación frente al Estado, u otros poderes. Lorenzo Meyer señala al respecto.

“No es necesario ser experto en teoría política para comprender la importancia que tiene la existencia de una red de organizaciones creadas por la propia voluntad e iniciativa de los ciudadanos para influir en ese mar de acontecimientos que constituyen la cosa pública” (Meyer, 2005:25).

El conjunto de instituciones que hemos señalado, sólo puede funcionar efectivamente de una manera democrática, si van acompañadas de un conjunto de derechos: la información, la libertad de expresión, el derecho de asociación, el derecho de reunión, el derecho de manifestación, entre otros más, que garanticen efectivamente la libre participación política de la ciudadanía. Derechos y garantías nacidos a partir de los contenidos liberales, fusionados con los presupuestos democráticos.

La democracia supone la interiorización y desarrollo de sus valores por parte de una sociedad, no sólo en sus aspectos políticos, sino también en los diversos órdenes de su vida. La democracia supone actitudes, comportamientos, que conformen una cultura, una forma de vida. Macpherson señala al respecto:

“...se ha entendido la democracia como un calidad que impregna toda la vida y todo el funcionamiento de un comunidad nacional o más pequeña. O si se prefiere como un tipo de sociedad, todo un conjunto de relaciones reciprocas entre la gente que constituye la nación o la unidad de que se trate” (Macpherson, 2003:15).

Entendemos que Macpherson habla de la existencia de una cultura política democrática, que se exprese en diferentes momentos, ámbitos y situaciones, y constituya una verdadera forma de vida democrática.

La teoría liberal democrática representada de manera destacada por Kelsen, supone entonces el ejercicio racional de los actores políticos hacia el logro del bien común y del interés general. La soberanía radica en el pueblo, el cual lo delega en

una representación institucional. Existe un conjunto de leyes e instituciones que asegura el ejercicio efectivo de la democracia. La igualdad y la libertad, son dos principios esenciales, a partir de los cuales se crea todo el discurso democrático. El conjunto de derechos y garantías dado por el liberalismo asegura el ejercicio de libertades que dan sustento a la democracia.

El hombre, su calidad de ciudadano, es la fuente de legitimidad de la democracia. La democracia liberal da por hecho una cierta calidad participativa de los individuos en torno a los asuntos públicos, fundamentalmente a través del voto; pero también mediante el ejercicio de sus derechos y garantías que recogen las constituciones políticas.

La visión kelseniana es seguramente la más influyente en el discurso político oficial de nuestro tiempo. Los procesos electorales realizados en el mundo occidental, y en otras regiones del mundo, atienden a los principios y procedimientos del liberalismo político. Los Estados nacionales, y los regímenes políticos prevalecientes en la mayoría de los países, de igual manera, se organizan a partir de los postulados del liberalismo político.

1.4.2 La teoría de las elites, o realista de la democracia (Schumpeter)

Muy por el contrario a lo afirmado por Kelsen, para Schumpeter el pueblo no ejerce el gobierno al interior de los regímenes democráticos en ninguna forma posible. La soberanía popular es sólo una ficción. En realidad, para él, son las elites, que se hacen elegir en forma periódica por ese mismo pueblo, quienes verdaderamente ejercen el control del gobierno.

Schumpeter parte de una crítica a la teoría liberal de la democracia del siglo XVIII, que ve en esta forma de gobierno el imperio de la soberanía popular. La filosofía de la democracia del siglo XVIII, de acuerdo con Schumpeter, puede ser:

“... compendiada en la siguiente definición: el método democrático es aquel sistema institucional de gestación de las decisiones políticas que realiza el bien común, dejando al pueblo decidir por sí mismo las cuestiones en litigio mediante la elección que han de congregarse para llevar a cabo su voluntad” (Schumpeter, 1983: 321).

El autor dice que esta definición contiene varias afirmaciones que no se sostienen, o que no pueden ser probadas en los hechos y organiza su crítica en tres

ejes fundamentales: la inexistencia de los supuestos del bien común y de la voluntad general, así como de la noción de racionalidad efectiva.

Para este autor, en las modernas sociedades no es posible establecer un estado de cosas o condición alguna que pueda ser considerada como un “bien común”, pues lo que se encuentra en esas sociedades es la existencia de diversos intereses contrapuestos. Lo que priva es el conflicto. El enfrentamiento entre grupos e individuos por hacer prevalecer sus intereses frente a los demás, agregando que si no es posible definir el bien común, tampoco es posible establecer la voluntad general que supuestamente habría de dar origen al mismo, pues se considera que la acción de las personas se guía por criterios básicamente racionales, cuando existen muchos otros factores asociados a la toma de decisiones que no poseen un estricto carácter racional.

El mismo Schumpeter agrega que si no es posible definir el bien común, tampoco es posible establecer la voluntad general que supuestamente habría de dar origen al mismo. El logro de una voluntad general implicaría, necesariamente, el consenso de la gran mayoría en torno de múltiples y muy disímiles temas, lo cual resulta prácticamente imposible en sociedades tan grandes y diversificadas como las actuales. En este contexto lo que priva no es la voluntad de las mayorías en atención al bien común, si no la imposición de los intereses de los grupos más favorecidos sobre el resto de la sociedad. El poder soberano no tiene como origen las mayorías, sino las posiciones de poder.

En el mismo orden de ideas, Schumpeter dice que usualmente se considera que la acción de las personas se guía por criterios básicamente racionales, cuando en realidad existen muchos otros factores asociados a la toma de decisiones que no poseen un estricto carácter racional.

El hombre es un ser tanto racional, como emotivo. Se puede actuar simplemente por hábito o costumbre, además de que no siempre se cuenta con la información necesaria y suficiente para tomar decisiones que resulten racionales tanto en su intención como en sus consecuencias. Por lo tanto, no es posible establecer que la gente actúe de una manera estrictamente racional desde el punto de vista del bien común y la voluntad general, supuestos de la democracia liberal, que, como ya se ha dicho, tampoco es posible definir de manera unívoca. Schumpeter propone la siguiente definición de democracia:

“(...método democrático es aquel sistema institucional, para llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo” (Schumpeter, 1983: 343).

La democracia es, ante todo, un método de competencia político electoral que permite a ciertos actores (las elites políticas) enfrentarse entre sí por el voto de los individuos, a efecto de tener el privilegio de tomar las decisiones públicas. Este método es, desde luego, pacífico y supone una mayor estabilidad del sistema político, pues en la base de la competencia electoral elitista subyace el acuerdo en torno a las reglas electorales.

El método democrático supone la existencia de partidos políticos fuertes, autónomos y competitivos, que se alternan en el poder, y que además de aceptar las reglas y procedimientos electorales, fungen como vehículos de las distintas élites políticas.

De lo anteriormente dicho, se desprende que el papel de los individuos, de los actores sociales, se concibe de escasa importancia. Sólo en apariencia el pueblo, la sociedad, es forjador de la soberanía popular. El voto es visto como un recurso por el cual las elites, verdaderos actores políticos, han de luchar a través de las diferentes ofertas electorales.

La lógica del mercado se traspasa al campo de lo político electoral. Se crea un mercado, donde el potencial votante es visto y manejado como un consumidor, regulado y restringido, a una oferta limitada de propuestas políticas. El monopolio de las ofertas políticas, base de los programas de gobierno, corresponde en realidad a los grupos de poder en campaña política, que mantienen en todo momento el control sobre las expectativas y reclamos del conglomerado social.

Como se puede advertir el ámbito de participación ciudadana es muy acotado, y se reduce casi exclusivamente a votar. El pueblo no gobierna efectivamente, simplemente acepta al grupo de hombres que lo gobiernan por un tiempo determinado. Los individuos sólo pueden acceder a la toma de decisiones políticas de una manera totalmente marginal a través del voto.

Más que de ciudadanos en el régimen democrático, Schumpeter habla de consumidores inmersos en una lógica de mercado, que eligen de vez en vez, de entre algunas ofertas políticas diseñadas y controladas por elites, que se disputan

entre sí el derecho a tomar las decisiones políticas en nombre de los miembros de una sociedad determinada.

Se puede inferir que, en general, Schumpeter supone una cultura política sumamente pasiva en las democracias. Muy de tipo clientelar, donde sus valores, comportamientos y expectativas estarían fundamentalmente determinados por la oferta de los partidos políticos, medida en términos de beneficios tangibles.

No obstante lo anterior, este autor reconoce que la democracia supone un avance sobre las dictaduras al permitir la alternancia en el poder de, al menos, dos grupos políticos que, además, renuncian a la violencia y acuerdan competir de una manera pacífica.

En la visión realista de Schumpeter no hay concesiones a los supuestos del bien común y de la voluntad general de hombres libres e iguales, que de manera racional se involucran y deciden de manera democrática. En la democracia, como en el ejercicio de la política en general, privan las relaciones de poder. El privilegiar ciertos intereses y el discriminar otros, no es asunto de principios alentados por una racionalidad omnímoda. La democracia es un juego de grupos de poder, que periódicamente se enfrentan entre sí, a efecto de dirimir el derecho de tomar las decisiones en nombre de todos, o de la mayoría. En términos del propio Schumpeter, la democracia no es el gobierno del pueblo, sino para el pueblo.

1.4.3 Norberto Bobbio

Norberto Bobbio considera que a pesar de que la democracia se ha presentado como el gobierno del pueblo, y que se fusionó en cierto momento con el liberalismo político, impregnándose de las libertades personales que éste postula, como se señaló anteriormente, en realidad, la democracia realmente existente es una ficción que resume en lo que él llama las falsas promesas democráticas (Bobbio, 1989: 16).

Para los propósitos de este trabajo son especialmente interesantes las siguientes tesis de Bobbio. La democracia no es representativa de todos los intereses, pues en realidad los individuos que logran expresarse a través de ella son aquellos que cuentan con ciertas capacidades como son el dinero, la habilidad y la capacidad empresarial, entre otras. Para Bobbio son las grandes organizaciones, no el individuo común, las que logran hacer valer sus intereses al interior de los mecanismos democráticos.

Bobbio dice que en la democracia persiste el poder oligárquico en los ámbitos económico, político, militar, ideológico, financiero, mediático, administrativo e, incluso, cultural, que tienen la capacidad de actuar en forma coordinada. Debido a su gran poder, las oligarquías pueden controlar y vetar sobre diversas áreas de la vida social incluidos, desde luego, los procesos democráticos.

Bobbio se refiere a los alcances, a los límites, de la democracia, en cuanto existen áreas de la vida social dónde los principios y procedimientos democráticos no tienen cabida, por ejemplo, el ámbito laboral.

Una falsa promesa sobre la democracia, según Bobbio, se refiere a la existencia de un poder “invisible”, constituido por diversas agencias gubernamentales dedicadas a la seguridad nacional, con un enorme poder de vigilancia y que muy frecuentemente violan las garantías individuales. Estas entidades no están sujetas por entero a la legalidad ni al escrutinio público y, en los hechos, operan en la semiclandestinidad.

Además del “gobierno invisible” que representa una seria limitante a los afanes democráticos, Bobbio señala que existen otras organizaciones con gran poder e influencia, paralelas al poder estatal, que se encuentran por completo al margen de la ley como la mafia, las sectas y las logias.

Otra tesis de Bobbio se refiere a la inexistencia de una ciudadanía enterada, informada, que posibilitará el ejercicio del sufragio con pleno conocimiento de causa. El voto, siendo el vehículo por excelencia para la expresión de la voluntad popular, debería contar con todos los elementos para ser efectivamente un ejercicio libre y consciente, cosa, que a juicio del autor, no ocurre.

Como se puede observar, este autor advierte pocos márgenes para la existencia de una cultura política plenamente democrática. Los ciudadanos, supuestos actores sociales fundamentales en el juego democrático, en realidad se encuentran sumamente constreñidos en sus márgenes de maniobra, y en su real peso sobre las decisiones públicas por organizaciones de todo tipo, y por su propia preparación y falta de información.

Norberto Bobbio ubica el ejercicio de la democracia en el contexto real de las sociedades contemporáneas. Las elites de las que habla Schumpeter parecen adquirir nombre y apellido en los planteamientos de Bobbio. El ejercicio real de la democracia se enfrenta a la presencia de poderosos grupos de interés, institucionales y clandestinos, que mediante su enorme poder pueden imponer sus

decisiones a la sociedad. La propia condición de los ciudadanos, poco informada y participativa, no le permite el ejercicio de un peso real en el ámbito de la toma de decisiones. Esta visión descarnada refleja la situación del mundo que vivimos hoy día, donde las organizaciones transnacionales pasan sobre la soberanía de los países y les imponen decisiones que afectan a sus sociedades. O donde las organizaciones del crimen organizado desafían el poder de los Estados nacionales, impidiendo la consolidación democrática en regiones de Latinoamérica.

1.4.4 Robert Dahl

Para Dahl la democracia permite una multipolarización del poder, pues éste no se encuentra alojado tan sólo en elites políticas, como creía Schumpeter. En la democracia sigue existiendo el fenómeno del dominio político por parte de grupos poderosos, pero existen espacios ganados por los individuos que éstos aprovechan para reivindicar sus demandas propias, y establecer ciertos equilibrios políticos (Vidal, 2007: 24).

En este sentido, la democracia conlleva una autonomía creciente de los sectores sociales, y si bien es cierto que en la democracia no se puede hablar de un gobierno del pueblo, también lo es que las elites gobernantes se encuentran sometidas a frenos y límites constitucionales, mientras que la ciudadanía dispone de medios diversos para influir en el proceso gubernamental.

Entonces, más que hablar de democracia este autor habla de poliarquía, pues existe una distribución del poder con diferentes grados de equidad y autonomía al interior de tales regímenes.

Ahora bien, lo anterior es posible porque en la democracia existen una serie de instituciones, derechos y garantías individuales que posibilitan la participación política de los ciudadanos, de una manera libre, enterada y segura. Estamos hablando de elementos tales como cargos públicos electos, elecciones libres, imparciales y frecuentes; libertad de expresión; acceso a fuentes alternativas de información y ciudadanía inclusiva. En especial:

“Deben existir dos elementos fundamentales, que tienen que ver con la sociedad civil: la participación en las elecciones y en el gobierno, así como en el debate público” (Escamilla, 2001:71).

Dahl considera que las elecciones no deben ser la única forma en que se exprese la participación de la ciudadanía, en tanto forma de consulta y poder de decisión; sino que, además, debe tener la posibilidad de influir, directamente, en la elaboración y aplicación de las políticas públicas. Asimismo, el mismo autor considera que el debate público representa la existencia de prácticas esenciales para la democracia como la libre expresión, la tolerancia, la igualdad política, la ciudadanía instruida y la inclusión política.

De acuerdo con Alberto Escamilla, de los anteriores argumentos de Dahl, se puede deducir que los aspectos institucionales procedimentales de la democracia son decisivos en su desarrollo y consolidación, señalando que:

“De esta consolidación procedimental deviene la democratización de los partidos y **cambios sustanciales en la cultura política ciudadana** (subrayado nuestro)”
(Escamilla, 2001: 71).

Como se puede deducir de lo anteriormente expuesto, para Dahl la auténtica democracia contiene los elementos institucionales que fomentan las prácticas ciudadanas de carácter democrático. El aspecto institucional procedimental es muy importante, y a partir de ahí se puede desarrollar tanto la democratización de los partidos, como el desarrollo de prácticas ciudadanas enteradas y comprometidas. Desde la concepción democrática de Dahl, si bien es cierto que el pueblo no gobierna, también cierto es que el individuo cuenta con espacios, derechos y garantías de participación, que hacen factible modificar situaciones existentes y el acotamiento del poder de las elites.

La teoría democrática de Robert Dahl puede ubicarse entre las mencionadas anteriormente. Por un lado la liberal de Kelsen y, por otro, la “realista” de Schumpeter y Bobbio. Dahl no niega el hecho de la dominación al interior de los regímenes democráticos, sin embargo no piensa que tal relación ocurra de manera mecánica y total entre los que ejercen el poder y los que son dominados. El poder no puede ser monopolizado por una sola elite. El poder se encuentra distribuido entre distintos grupos, y tal distribución es dinámica, cambiante. Los grupos dominados tienen espacios para luchar por sus intereses, y cuentan con garantías y derechos para hacerlo frente al poder estatal. Los grupos dominados siempre podrán retirar del ejercicio del poder a una elite en particular, aunque eso suponga el arribo de otro grupo de poder.

El enfoque liberal supone en los individuos un carácter ciudadano dado de por sí. Ellos son los que a través del ejercicio de su voto crean el gobierno que los rige de una manera democrática. Su participación, sin embargo, se limita básicamente a la arena de lo electoral. La visión realista restringe severamente las posibilidades de influencia de los individuos en los asuntos públicos. Son los grupos poderosos los que cuentan con la influencia suficiente para decidir sobre las cuestiones públicas. Los individuos ni siquiera llegaron a constituirse en auténticos ciudadanos informados y participativos. No se puede presumir una cultura política democrática entre los mismos.

La de Dahl pudiera ser vista como una visión más completa de la democracia y de la política, en general. Pues sin negar el hecho de la dominación entre grupos sociales, tampoco niega la posibilidad de lucha y reivindicación por parte de los sujetos a dominio. En este sentido, los individuos pueden constituirse como ciudadanos al ejercer los derechos y garantías que les permite el régimen democrático. Pueden desarrollar una cultura política democrática, acorde con los presupuestos de un régimen de ese tipo.

Revisaremos ahora el concepto de cultura política en relación al de democracia, en el entendido de que ambos elementos no pueden ser disociados entre sí, y que la consolidación de un régimen democrático necesariamente implica la existencia de una ciudadanía con una cultura política democrática, más allá de la existencia de una serie de instituciones y procedimientos también indispensables.

CAPÍTULO II. CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA Y CIUDADANÍA POLÍTICA

Como muchos otros, el de cultura política es un concepto de carácter polisémico y controvertido. Ha sido abordado desde diferentes perspectivas y acentos teóricos, al grado de ser prácticamente imposible contar con un significado más o menos homogéneo del mismo.

No obstante lo anterior, las diferentes contribuciones teóricas acerca de la cultura política hacen referencia a fenómenos tales como los comportamientos, las actitudes, las expectativas, las ideas de corte político que se pueden encontrar en los individuos, y que derivan de una serie de valores que estos han interiorizado a partir de sus vivencias específicas con el fenómeno del poder.

En este texto, entendemos la cultura política como el conjunto de actitudes, comportamientos, ideas, creencias, expectativas y valoraciones que desarrolla un individuo en el contexto de un régimen político determinado. Dicha cultura puede ser de distinto símbolo dependiendo del carácter del régimen en cuestión. La cultura política no es estática y puede cambiar al unísono de los cambios operados en el régimen, pero también lo puede hacer de manera más rápida o lenta. La cultura política funciona como un refuerzo del régimen, aunque cuando la misma no sigue los cambios operados en el mismo, puede ser un contrapeso de los mismos cambios. Regímenes democráticos generaran culturas políticas democráticas y regímenes autoritarios generaran culturas políticas autoritarias, aunque existen otros factores, como la educación, que pueden modificar la cultura política prevaleciente en un momento dado.

Ahora bien, pensar la ciudadanía como sustento de un auténtico régimen democrático, supone además de una determinada concepción de democracia y de ciudadanía, una concepción específica sobre las funciones del Estado y el alcance de las mismas al interior de una democracia. Si se postula la existencia de la ciudadanía a partir de su condición de portadora de determinados derechos, se debe también pensar en formas activas y eficaces de exigibilidad jurídica de esos mismos derechos, lo cual supone una reforma de las estructuras estatales.

Basar la existencia de la democracia en la ciudadanía implica, asimismo, una redefinición del ámbito público que es el campo por excelencia donde se manifiesta la condición ciudadana. Lo público pensado como arena donde confluyen e interactúan los diversos actores sociales como el Estado, las instituciones sociales y el sector privado.

Durante las últimas décadas se ha observado un retraimiento del papel del Estado en la región latinoamericana, con el consiguiente debilitamiento de sus responsabilidades frente a la ciudadanía y frente a los procesos democráticos mismos. Aunque suene paradójico, la reivindicación de los derechos ciudadanos en América Latina no puede prescindir del papel del Estado en tanto garante de los mismos a través sus instancias jurídicas, aunque muchas veces la reivindicación y lucha por los derechos de ciudadanía en la región se ha hecho, precisamente, frente al poder y los abusos del poder estatal.

Entonces, pensar la ciudadanía como basamento sustantivo de la democracia puede entenderse como una reconceptualización del Estado de derecho, frente a la movilización ciudadana capaz de generar nuevos derechos.

La existencia de la democracia a partir del fundamento ciudadano puede tener al menos tres significados distintos. La existencia de comunidades portadoras de una identidad cultural homogénea, que otorga sentido e identidad a sus miembros y que impone deberes de solidaridad comunitaria por encima de los derechos y garantías individuales, que establece el liberalismo en relación a la condición de ciudadanía. La defensa sin mediación institucional del individuo-ciudadano, que descansa en la idea de la autoregulación de la sociedad. Como señala Canto:

“Muchas invocaciones a la “ciudadanización” (de la política, de la cultura) incorporan esa ambigüedad, en el sentido de que ciudadanizar significa poner ciudadanos (y no políticos) en cargos públicos” (Canto, 2005:47).

Puede también significar una invocación simplificada de soberanía popular, que lleva al permanente cuestionamiento del sistema político, de las instituciones políticas y de la legalidad. Estos tres ámbitos o niveles en que se mueve la ciudadanía, son concebidos como alternativas a los espacios institucionales para la expresión ciudadana como los partidos políticos el parlamento, a los cuales se ve en una crisis de representatividad irreversible.

Al concebir la democracia a partir de una fundamentación original ciudadana, se plantea, más que alguna de las tres anteriores visiones, la de la ampliación de las iniciativas ciudadanas, la de las tareas de control y las llamadas *accountability*; la defensa de los derechos establecidos en el plano civil, político, económico y social. Menciona Manuel Canto:

“... con la idea de reconectar la democracia con los derechos de ciudadanía estamos haciendo referencia a la ampliación de las iniciativas ciudadanas, a la tarea de control y ejercicio de la accountability, a la defensa por parte de las asociaciones civiles de los derechos establecidos (en el plano civil, Político, y sobre todo, económico y social, a la participación crítica en la elaboración de políticas públicas o a la generación de procedimientos para volver efectiva esa consulta, mediante la vigilancia de su cumplimiento y de la mejora de los mecanismos de justiciabilidad de los derechos...” (Canto, 2005: 47).

No obstante lo señalado, el concepto de ciudadanía surgió a partir de una concepción más limitada, que después fue evolucionando paulatinamente. En este sentido, es obligado hacer referencia al trabajo pionero de Marshall en 1950, el cual postula la aparición histórico progresiva de los derechos de ciudadanía, según la cual primero fueron los derechos civiles, después los políticos y, finalmente en el siglo XX, los sociales (García Roberto, 2003:78).

En la visión marshaliana, los derechos civiles surgidos en el siglo XVIII, preparan el camino para la obtención de los derechos políticos en el siglo XIX, los cuales al favorecer la creación de los partidos políticos y la ampliación del sistema político, favorecieron el surgimiento de los derechos sociales.

Estos tres tipos de derechos señalados por Marshall, han sido asociados con los derechos de ciudadanía, fundados en la igualdad que da la pertenencia a una comunidad. Dicha pertenencia, Marshall la conceptualiza en términos de nacionalidad. También señala que la comunidad requería de un vínculo de unión basado en la lealtad a una civilización.

Las tesis de Marshall han sido sujeto de críticas por considerar que es un tanto evolucionista la aparición de los derechos, pues estos no han seguido el mismo patrón de aparición en diferentes realidades históricas, ni siempre han podido permanecer y acrecentarse como se pudiera pensar en el esquema de Marshall (García Roberto, 2003: 78).

Además, se ha señalado que la existencia de tales derechos ha estado siempre asociada a la lucha por los mismos, y no puede ser concebida como un proceso mecánico. Acerca del carácter nacional y la pertenencia comunitaria se discute y se cuestiona hoy, en el marco del surgimiento de tendencias globalizadoras y supranacionales, así como de la aparición de impulsos locales y particularistas.

El concepto de ciudadanía está asociado a la idea de membresía, de pertenencia a una comunidad nacional, a un Estado nación, que otorga una serie de derechos a sus miembros y excluye a los demás. Ser ciudadano desde este punto de vista es poseer una serie de garantías y derechos constitucionales que distinguen a los miembros de un Estado nacional frente a individuos que no participan de esa condición. La ciudadanía también está referida a la pertenencia a cierta cultura que otorga identidad a las personas. Rasgos culturales que comparten los individuos debido a factores históricos y que identifican entre sí a los portadores de esa cultura. Los acentuados fenómenos de migración mundial de los últimos años están muy presentes en lo anteriormente dicho. Miles de migrantes no disfrutan de su condición de ciudadanía en los países a los que han llegado por no tener una pertenencia formal, jurídica, que los haga ciudadanos de los estados en que han establecido su residencia. Muchos de esos migrantes desean lograr la condición de ciudadanía pero sin perder sus orígenes culturales, lo cual frecuentemente ha enfrentado resistencias por parte de las poblaciones nativas que exigen una asimilación a sus prácticas culturales.

2.1 El concepto de cultura política, origen y escuelas

Es nuestro propósito hacer una revisión de algunas de las ideas más significativas en torno a este tema, y para ello resulta obligado iniciar con una breve consideración del trabajo pionero en la materia, “The Civic Culture” de Almond y Verba de 1963, en el que los autores analizan y comparan las culturas políticas o virtudes cívicas de los ciudadanos de Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Alemania y México, utilizando datos empíricos, buscan establecer la relación entre las culturas políticas de esos países y su papel en el mantenimiento de sus estructuras políticas (Almond y Verba, 1987).

Los autores parten de considerar a Estados Unidos e Inglaterra como modelos de democracia, frente a los tres países mencionados que se encontrarían en situaciones de mayor atraso en la materia, buscando identificar aquella cultura política que es más propicia al florecimiento de la democracia liberal.

Almond y Verba definen una clasificación de las culturas políticas nacionales que vincula distintas orientaciones de los individuos hacia la política, con instituciones, actores y procedimientos políticos. Los autores identifican tres tipos básicos de orientaciones: 1) cognoscitiva, 2) afectiva y 3) evaluativa.

La primera orientación está referida al conocimiento y la acción que los sujetos puedan tener acerca de su sistema político. La segunda a la parte emotiva que los individuos manifiestan respecto de su sistema político, en términos de aceptación o rechazo, mientras que la tercera alude a una manifestación de juicios de parte de la población respecto del mismo sistema político.

Los autores comentados señalan dos actores básicos frente a los cuales se manifiestan las tres orientaciones mencionadas: el sistema político con sus distintos componentes, y el individuo mismo en tanto actor político básico. La cultura política será más de tipo democrático en la medida en que se fundamente preferentemente en componentes de tipo cognoscitivo y desplace a aquellos de tipo afectivo y evaluativo, así sea de manera gradual. Los individuos o actores sociales de una cultura política democrática, serán capaces de participar en las decisiones políticas que les afecten, involucrándose de una manera activa en la vida pública de su país.

Almond y Verba distinguen tres tipos puros de cultura política, a partir de la combinación de las tres orientaciones (cognoscitiva, afectiva y evaluativa) y la forma en que interactúan con los objetos políticos: 1) cultura política parroquial; 2) cultura política súbdita; 3) cultura política participativa.

La cultura política parroquial se caracteriza por su carácter localista. No se vincula con el gobierno central; es característica de sociedades tradicionalistas y no tiene capacidad de influencia sobre las decisiones políticas. La cultura política súbdita, aunque sabe de la existencia de un sistema político de carácter nacional, no considera tener capacidad de influencia sobre los mecanismos del poder, y se concibe a las órdenes de las instancias decisorias. La cultura política participativa tiene conciencia del sistema político, y considera poder influir sobre las decisiones del gobierno.

Los autores en comento, señalan que la cultura política participativa que han ubicado en algunas de las realidades históricas que ellos estudiaron, resulta la más adecuada para el funcionamiento y permanencia de las estructuras democráticas; sin embargo, señalan también, que tal cultura no se presenta de manera única pues, aunque puede ser dominante, siempre va acompañada de elementos de los otros dos tipos de cultura. A la cultura política resultante de la combinación de las tres mencionadas, los autores le llaman cultura cívica (Almond y Verba, 1987).

El ejercicio de la cultura política cívica supone la existencia de individuos enterados, participativos y responsables frente a los asuntos de interés público. Tal

participación es concebida no como una forma de desestabilizar al gobierno sino, por el contrario, como una forma de apoyo a través de la participación. En la cultura cívica, agregan los autores, los individuos pueden saberse capaces de presionar sobre el gobierno pero deciden no hacerlo, dando, de esta manera, un importante margen de maniobra al gobierno en turno. Es decir, la cultura política cívica o democrática permite el ejercicio ordenado del poder o, dicho en otros términos, favorece la gobernabilidad.

En su estudio, los autores concluyen que fue en los Estados Unidos e Inglaterra dónde hallaron más elementos de una cultura política cívica caracterizada por una participación muy extendida de los individuos en los asuntos públicos, un sentido de obligación ciudadana para con la comunidad, la idea muy arraigada de que las personas comunes pueden influir sobre las decisiones del gobierno, la existencia de múltiples organizaciones intermedias de interés muy activas, así como la existencia de un alto orgullo de parte de los ciudadanos por su sistema político (Peschard, 1994:23).

Algunas de las críticas más recurrentes a los planteamientos de Almond y Verba sobre cultura política, han sido que ésta, es sobre todo un reflejo del sistema político, más que un determinante de él. Se ha argumentado, también, que la cultura cívica política propicia la estabilidad de cualquier régimen, no sólo el de la democracia. Además de lo anterior, se ha señalado, también, que existen subculturas políticas, como la de las elites gobernantes, por ejemplo, no sólo una cultura política homogénea a los diferentes actores políticos; cuestión a la que otorgan poca importancia Almond y Verba (Peschard, 1994:23).

También se ha señalado un cierto carácter imperialista de este enfoque de Almond y Verba, pues parece reivindicar el predominio del régimen democrático por encima de cualquier otro. Al poner como modelo los casos de Estados Unidos e Inglaterra, parecería decir que el camino para el resto del mundo es el capitalismo con democracia liberal.

No obstante las críticas, el modelo de Almond y Verba sigue siendo válido en el análisis de realidades políticas como la muestra, además de que este enfoque

sirvió para el desarrollo de diversas orientaciones, algunas de los cuales señalamos a continuación.¹

Jacqueline Peschard dice que la cultura política se conforma por el conjunto de valores, concepciones y actitudes que los individuos dirigen hacia el ámbito específico de lo político; o, de otra manera, la percepción necesariamente subjetiva que tienen los individuos respecto del fenómeno del poder, (Peschard,1994:10) .

Esteban Krotz, pone el acento en aquellos elementos más ubicados en el plano de las aspiraciones de las personas respecto del poder, que en sus manifestaciones concretas como comportamientos y actitudes. De esta manera, dice Krotz, el concepto de cultura política debe rescatar la dimensión de los sueños, deseos, aspiraciones, que los individuos desarrollan en función del poder. Esto es la utopía de una sociedad en que la estructuración del poder no siga las concepciones maquiavélicas de dominio y sometimiento. Krotz, piensa que en la cultura política existe espacio para las aspiraciones y deseos de los individuos, de otro tipo de sociedad, más justa para todos sus integrantes (Krotz, 1996: 13).

Krotz nos dice que la cultura política tiene un carácter dinámico, es más o menos cambiante, de acuerdo con la dinámica de la sociedad en cuestión. La cultura política puede variar en atención a factores diversos muy de tipo personal, como de tipo colectivo o social. La educación de un individuo puede hacer variar su cultura política, pero también lo puede hacer su participación en un evento de tipo político de gran magnitud. La influencia de la televisión, las migraciones, la influencia de las iglesias, el papel de los partidos políticos, entre otros eventos, que impactan sobre la socialización y resocialización política de las personas.

Roberto Gutiérrez, por su parte, define a la cultura política como una síntesis heterogénea y eventualmente contradictoria de valores, conocimientos, opiniones, creencias y expectativas, que definen la identidad política de los individuos, (Gutiérrez, Diciembre 2001: 27).

Lo dicho hasta aquí es básicamente descriptivo. Nos habla sobre comportamientos, actitudes e, incluso, deseos de las personas respecto del poder, pero no nos dice ¿de dónde vienen esos elementos?, ¿a qué se deben? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son sus motivaciones? A tales cuestiones es a las que, dice

¹ Habrá que señalar, primero, que la bibliografía sobre el tema es extremadamente amplia, por lo que, la citada aquí, no es más que una pequeña parte de la conocida, y atiende a los criterios de particular interés del presente trabajo.

Roberto Gutiérrez, es necesario dar una respuesta, para rebasar el plano de lo meramente descriptivo, y poder dar cuenta de esos procesos en los cuales se conforma la cultura política (Gutiérrez, 1990: 141-149).

Otro aspecto importante en relación a la cultura política que señala Roberto Gutiérrez es el de su heterogeneidad. Gutiérrez dice que no se puede hablar de un sólo conjunto de actitudes, expectativas y comportamientos, para toda una sociedad. Los diferentes grupos, y aún los individuos mismos, son capaces de desarrollar específicas culturas políticas, en atención a situaciones muy particulares de su existir. Puede haber ciertos rasgos políticos comunes a una sociedad, sin embargo también es posible encontrar aspectos muy particulares en función de ciertas identidades.

Conocer las verdaderas razones de la cultura política implica el análisis histórico de todas aquellas estructuras sociales a partir de las cuales se van conformando las pautas y actitudes del comportamiento político. Es necesario profundizar en las motivaciones que definen el ser individual, la identidad de las personas. Además de ciertas estructuras e instituciones sociales, como la escuela o la familia, el estudio de la cultura política debe contemplar aspectos culturales más amplios, como el pensamiento mítico, las costumbres o las utopías sociales (Gutiérrez, Diciembre 2001: 47).

Los autores mencionados hablan al igual que Almond y Verba, de actitudes, percepciones y valoraciones, de los individuos frente al poder, pero, además, hablan de la necesidad de buscar en las instituciones o fenómenos sociales el origen de tal cultura política. Krotz, en especial, reivindica un lugar para las aspiraciones, para los sueños de las personas en relación a una sociedad diferente a las conocidas hasta ahora, marcadas por el dominio político.

Creemos que la observación de Roberto Gutiérrez sobre la importancia de conocer sobre los ámbitos donde se gesta la cultura política es de mucha aplicación en nuestra realidad histórica, dónde la cultura política prevaleciente ha sido resultado no sólo de las instituciones tradicionales como la escuela o la familia, sino también de instancias políticas como el sindicalismo. Explicar nuestra particular cultura política y su posible idoneidad o no, frente a las exigencias de un régimen democrático, implica conocer el proceso histórico de su conformación (a lo que nos abocaremos en el tercer capítulo).

Por otra parte, algunos autores han dicho que una cultura política democrática, como la que de manera sucinta hemos esbozado aquí, pocas o veces o casi nunca se ha dado en la realidad. Lo que en realidad se requiere, de acuerdo con este enfoque, es el desarrollo de una cultura política realista, factible de ser llevada a cabo, y de acompañar a los procesos democráticos (PNUD, 2004).

2.2 Una cultura política para la democracia real

En relación a la cultura política, autores como Antonio Crespo, creen que la idea de que pueda surgir o crearse una cultura política virtuosa entre la ciudadanía, es una quimera. No existen los referentes concretos, empíricos, entre el mundo político real, que pueda dar sentido a esa especie de predica moral, a partir de la cual se pretende introyectar una serie de valores entre la población, que se supone son congruentes y necesarios a las prácticas democráticas (Crespo, 2006: 93), o bien como señala Cruz Revueltas

“... la democratización de una sociedad no debe ser entendida en términos de una “conversión” moral de la población a algo así como una ética democrática dirigida por el Estado” (Cruz Revueltas, 2006 :95).

De acuerdo con esa visión, el Estado busca imbuir entre su población convicciones tales como la tolerancia, la solidaridad, la honestidad, la capacidad de ceder en los beneficios propios en atención a los de la comunidad, etc. Sin embargo, se cree que esta visión es prácticamente imposible de llevar a la práctica, pues los individuos ante una disyuntiva determinada, optarán siempre por la prevalencia de su propio interés, más allá de cualquier consideración de índole comunal.

Más aún, Crespo piensa que el tipo de cultura política mencionada no es necesaria para el mejor funcionamiento de la democracia, y nunca ha existido en ninguna parte, incluyendo las democracias desarrolladas. En su opinión se requiere, más bien, de cierto entendimiento y aceptación pragmáticos de parte de los actores sociales, acerca del real funcionamiento de la democracia y de sus ventajas y desventajas frente a otros tipos de regímenes políticos, sobre todo pensando en la existencia de intereses diversos dentro de la sociedad, que compiten entre sí, y que de alguna manera tienen que ser conciliados (Crespo, 2006: 95).

De acuerdo con lo anterior, la democracia tiene un diseño que le permite dirimir de manera pacífica, civilizada y con el mayor sentido de justicia posible, los

numerosos conflictos de interés entre los actores sociales. Se parte de la idea de que no se trata de sacrificar los intereses personales en aras de lo social, sino por el contrario de lograr la maximización de los mismos, sin que ello redunde en un perjuicio de lo social a nivel estatal o nacional.

En esta óptica, la democracia es vista como una fórmula que busca dirimir los intereses particulares de la forma más equitativa y civilizada posible, sin buscar su anulación. De esta forma, una cultura política para este tipo de democracia pragmática, realista, consistiría en fomentar la comprensión de los mecanismos democráticos entre la ciudadanía, el funcionamiento de sus estructuras institucionales, así como las bases sobre las cuales este tipo de régimen político opera en la realidad.

Asimismo, una cultura política para una democracia real, en opinión del mismo autor, debe caracterizarse por la convicción entre la mayoría de los ciudadanos de que el régimen político democrático, es preferible a cualquier otro, a pesar de los defectos y limitaciones que éste pueda tener (Crespo, 2006: 94).

Se trata de no sobrecargar de expectativas a la democracia. De aceptar que no siempre puede abatir la corrupción, ni el abuso de poder. Ni que pueda ser siempre y totalmente justa y equitativa en las contiendas electorales, y que aún así es preferible a los sistemas anárquicos muy proclives a la violencia, y a los propios sistemas autoritarios, que frecuentemente se presentan como más eficaces, aunque conculcadores de las libertades ciudadanas. Se debe llegar a la comprensión de que la democracia es el sistema político que menos costos políticos y de otro tipo genera a los ciudadanos.

Ahora bien, añade Crespo, el logro de una cultura política de este tipo que dé viabilidad, sustento, y que ayude a la consolidación democrática, no se logrará a partir de las predicas teóricas o morales, sólo podrá ser el resultado de hechos vividos, tangibles, de parte de todos los actores involucrados en el proceso democrático. Lo mismo al interior de las instituciones y la forma en que en ellas se adoptan las decisiones, como en el respecto de las reglas del juego democrático por parte de partidos y candidatos.

El logro de una cultura política de este perfil, no debería ser sólo responsabilidad de las instituciones electorales, sino resultado de las prácticas cotidianas en diversas instituciones sociales como sindicatos, familias, escuelas y los propios partidos políticos.

Se trataría de entender que la democracia no es un sistema perfecto ni mucho menos, pero que brinda la posibilidad de ser perfeccionado constantemente. En palabras del propio Crespo:

“Se tiene que llegar eventualmente a la conclusión de que la democracia, siendo perfectible, es imperfecta y que nunca va a ser perfecta, pero que, sin embargo, es preferible tenerla a no tenerla” (Crespo, 2006: 93).

El señalamiento de Crespo es importante en cuanto que pregunta por la manera en que puede ser iniciada una determinada cultura política, o ser sujeto de transformación en un sentido determinado. Este autor no cree en las exhortaciones de tipo moral para la creación de una cultura política participativa, más bien cree que la misma puede ser producto de circunstancias bastante pragmáticas como la negociación de intereses. Circunstancias concretas llevarían a los actores sociales a aprovechar las peculiaridades de la democracia, y de esa manera aprender a entablar negociaciones, acuerdos, que posibilite la satisfacción de intereses individuales y el rescate del interés general. Una educación política progresiva que puede ser desencadenada por factores diversos como una crisis política o económica.

2.3 Cultura política y posmodernidad

Norbert Lechner, escribió acerca de las nuevas formas de concebir y practicar la política en la región latinoamericana, en momentos en que el clima intelectual europeo se caracterizaba por el dominio de una cultura posmoderna. Lechner se pregunta si el posmodernismo favorece o va en sentido opuesto al desarrollo de una cultura política de carácter democrático, que este mismo autor reconoce como un elemento esencial para en la consecución y mantenimiento de una democracia (Lechner, 2002: 105)

De entrada, Lechner considera que el posmodernismo se vive como un proceso de desencanto, en particular de los movimientos denominados de izquierda. Los cuales ya no reivindican al socialismo, como la meta a alcanzar a través de sus actividades políticas, la izquierda no cree tampoco en el proletariado como el sujeto de transformación histórica. Ha renunciado a una visión omnicomprensiva de la realidad. Critica la filosofía de la historia, la idea del sujeto, la noción de totalidad, aunque tal crítica de los paradigmas marxista y de la tradición política no ha venido

acompañada de una nueva propuesta de paradigma alternativo (Lechner, 2002: 105).

El autor plantea que la posmodernidad ha significado una nueva sensibilidad, que pasa por el desvanecimiento de los afectos, el enfriamiento de las emociones, la erosión de la distancia histórica crítica, la idea de la vida social como un collage sin relieves, el énfasis en la subjetividad, en la autenticidad y en la intimidad del individuo; el cuestionamiento del fundamentalismo político moral. Como señala Zygmunt Bauman:

“El nuevo individualismo el debilitamiento de los vínculos humanos y el languidecimiento de la solidaridad están grabados en una de las caras de la moneda cuyo reverso lleva el sello de la “globalización negativa”.” (Bauman, 2008; 40)

Tal estado de ánimo, ubicado principalmente entre los jóvenes, debe ser tomado en cuenta a la hora de repensar los significantes actuales de la política. Él piensa que una de las problemática principales en que se manifiesta la cultura posmoderna en el mundo es la falta o ausencia de identidad, situación que, a su juicio, siempre ha representado un problema para los individuos en América Latina. El resquebrajamiento de la articulación social que hace posible la idea de un mundo común, compartido por todos los integrantes de un pueblo, nación o región.

El autor en comentario piensa que para América Latina el imaginar una identidad colectiva es una tarea que puede emprenderse a partir de la existencia y desarrollo de una cultura política democrática que no puede obviar la nueva sensibilidad característica de la pos modernidad.

Serían dos problemas a los que inicialmente la nueva cultura política tendría que dar respuesta: determinación del nuevo espacio o espacios de la política, que implica señalar qué pertenece y qué cabe esperar de la política, así como el asunto de la precariedad del tiempo, en el entendido que las acciones políticas posibles dependen de la disposición del tiempo que se tenga. Las identidades colectivas perseguidas sólo pueden ser logradas a través de continuidades temporales.

Lechner dice que la indeterminación del espacio político y la necesidad de su redefinición, provienen, en buena medida, de situaciones políticas que vivió la región latinoamericana en épocas pasadas, como por ejemplo lo que él llama una “inflación ideológica”, (Lechner, 2002:107), que en busca de una identidad planteó una visión

totalizadora de la historia que unificara el proceso social. El autor dice que independientemente de las diversas tendencias políticas tal visión tuvo los siguientes elementos.

- a) *Socialización de los principios políticos como verdades absolutas.* La transformación de los principios políticos en dogmas, atendió al logro de fuertes identidades colectivas y se tradujo en visiones rígidas de la sociedad y los actores sociales, en poca disposición a la negociación, así como en la negación y descalificación total de los adversarios políticos.
- b) *Vinculación estrecha entre la utopía resignificada y la sacralización de los principios.* Se presentó a la utopía social como necesidad histórica, a donde indefectiblemente habría de conducir la movilización social. Al tenerse una concepción Instrumental de la política hacia un sólo objetivo predeterminado, se negó la posibilidad de otras posibles alternativas, cursos de acción, estrategias y definición de objetivos diversos. El presente fue tenido como una etapa meramente transitoria hacia una especie de tierra prometida, lo cual fomentó la adopción de actitudes de sacrificio y el desprecio del pasado. La futura sociedad, cuyo advenimiento de todos modos era inevitable, tendría que alcanzarse a partir del conocimiento y la acción sobre la historia. Giddens dice al respecto:

“Karl Marx, cuyas ideas deben mucho al pensamiento de la ilustración, expreso el concepto con mucha sencillez, Hemos de entender la historia, explicaba, para poder hacer historia. Marx y el marxismo, guiados por este principio, tuvieron un enorme influjo en el siglo XX.” (Giddens, 2000: 14)

- c) *Carácter totalitario de la utopía.* Los diferentes espacios sociales fueron cuestionados. Declarados obsoletos. Se cuestionó el ordenamiento social existente, y se proyectó la racionalidad de un espacio al ámbito social en su conjunto, que dio origen a una visión sectaria y totalitaria a la vez.

Lechner añade que la política concebida de esta manera, tiene un fuerte tinte religioso, y que en ámbitos donde la exclusión social y la pobreza extrema existen, la política refuerza ese carácter, y esto es válido tanto para las opciones de izquierda como de derecha, que pueden adoptar ropajes místicos de salvación. Estos contextos son propicios para el surgimiento de líderes mesiánicos que son vistos por las masas como la solución rápida a sus diversos problemas.

Con el antecedente de estas prácticas y concepciones políticas vigentes en América Latina durante muchos años, han ocurrido los cambios en la cultura política de la región que pueden pensarse como influidos por la cultura pos moderna. Entre estos cambios, sobresalen dos tendencias: la revalorización de la secularización y el realismo político.

Las tendencias actuales van en el sentido de revalorar el carácter secular de la política, a manera de concebirla ante todo como un espacio para la negociación y el logro de acuerdos factibles. La idea es descargar a la política de compromisos de tintes ético religiosos y de expectativas excesivas, que vayan más allá de lo realistamente posible.

Se busca liberar a la práctica política de motivaciones redentoras, asociadas a ciertos sistemas de valores y actitudes afectivas. Se desecha la visión heroica de la vida, y el sentido mesiánico de la historia. No se busca ya una utopía que en el pasado apareció como factible e inevitable.

“... las ideologías –y en grado sumo la ideología marxista- ya están muertas...”

(Sartori, 2009; 89)

El realismo político aparece no sólo como una crítica del pasado, sino como una invocación a crear el orden social de manera conjunta. Ese orden tendría que ser una construcción social, y no el resultado de la acción de un solo actor.

Se reivindica el valor de la ley y los procedimientos que la misma prescribe, en muchas ocasiones por encima de los contenidos materiales. Existe conciencia plena del equívoco de postular la omnipotencia política, reivindicándose en cambio la especificidad de los diversos campos sociales.

Lechner piensa que la secularización de la política puede apoyarse en el posmodernismo, en tanto implica cierto desvanecimiento de los afectos. El posmodernismo disminuye la carga emocional de la política; le quita presiones al tiempo de permitirle una mayor autonomía. Estas tendencias pueden favorecer la consolidación democrática, lo que no implica, de acuerdo con el autor, que estemos en la posmodernidad.

Ésta, producto de una hipersecularización escinde las estructuras sociales de las otras estructuras valorativas y emocionales:

“Es decir acepta la visión liberal de la política como “mercado”; un intercambio de bienes” (Lechner, 2002:111)

El posmodernismo no reflexiona sobre los bienes que no están sujetos a la lógica del mercado, como los derechos humanos; y su crítica a la noción de sujeto histórico socava las bases para pensar la política.

Una cultura política “ideal”, frente a una cultura política “realista”, parece ser la dicotomía que se presenta, y quizás no sean necesariamente excluyentes. Quizás a partir del desarrollo de la cultura política realista se pueda llegar a una cultura ideal. En todo caso se está de acuerdo en la necesidad del desarrollo de comportamientos, valoraciones, expectativas ciudadanas coincidentes con los preceptos democráticos. Asimismo, si es cierto que la cultura posmoderna presente sobre todo en los jóvenes, implica una actitud menos apasionada frente a la política, más realista, quizás esa actitud pudiera contribuir al logro de actitudes más conciliadoras, más de negociación, que abonaran al logro de una cultura democrática.

2.4 Ciudadanía sustantiva y cultura política democrática

Existe otro concepto de ciudadanía, como ya se mencionó, ubicado en el contexto de la lucha social con una connotación más dinámica, más propositiva, que plantea justamente la acción social como una forma de hacer valer efectivamente los derechos otorgados por la constitución. Se trata de prácticas, de espacios de ciudadanía, en términos de Sergio Tamayo, en el entendido de que los derechos ciudadanos no están dados de una vez y para siempre, sino que su aplicación es algo siempre negociada, siempre sujeta a disputa (Tamayo, 2006: 17).

Así, la cultura política ciudadana la definimos caracterizada por la participación activa en los asuntos públicos. Una ciudadanía que va más allá del disfrute o la constatación de una serie de derechos y obligaciones consagrados en la ley. Una ciudadanía sustantiva que se construye en la lucha por la defensa y promoción de sus intereses en los diferentes espacios en disputa. Tal ciudadanía se concibe como portadora de una cultura política democrática, participativa, que con sus actos concretos manifiesta una serie de valoraciones democráticas. La ciudadanía sustantiva no se queda en el plano de lo jurídico formal, aunque parte de él. Se construye en el proceso mismo de lucha frente al Estado u otros actores sociales por la obtención de mayores espacios ciudadanos.

La cultura política y, en general, todo tipo de cultura se concretiza en comportamientos, valoraciones y expectativas de individuos específicos. Es decir, si

la cultura política surge de la interrelación entre los sujetos sociales y las estructuras sociales específicas existentes en un determinado lugar y momento histórico determinado, su objetivación tiene lugar en las actitudes y acciones de personas concretas en su actuar cotidiano.

Existen culturas políticas de distinto símbolo como ya se ha mencionado, las cuales responden a realidades políticas que pueden ubicarse entre los extremos de la dictadura o el totalitarismo, y los regímenes políticos de carácter plural y democrático. En estos últimos, la cultura política democrática es una manifestación de una dimensión política comprometida y participativa de los actores sociales, llamada ciudadanía.

Ciudadanía, entendida como aquella condición en que el individuo ha desarrollado ciertos comportamientos y actitudes que implican su involucramiento activo en los asuntos públicos. El ciudadano se asume como un ser enterado y comprometido con su realidad política; es capaz de trasponer su ámbito personal o individual, y se inserta en la esfera de lo público, demandando, gestionando, o proponiendo medidas diversas ante situaciones que le atañen a él y su comunidad.

Al participar en la *res pública* es capaz de activar y dar sentido a los mecanismos institucionales de la democracia. Su accionar, no se limita solamente al hecho de ejercer el sufragio en cada periodo electoral, sino que es más diverso y permanente.

Hablamos de una ciudadanía en sentido sustantivo, tal y como la define Sergio Tamayo siguiendo las ideas de Sieder:

“... la ciudadanía es una construcción social, dinámica, conflictiva y contradictoria que cambia a consecuencia de luchas históricas. Se explica con los derechos y obligaciones de los ciudadanos, pero estos se ejercen en relación al poder; está delimitado por códigos y procedimientos constitucionales pero su ejercicio es siempre interpretado, confrontado y negociado” (Tamayo, 2005: 119).

Tal concepción de ciudadanía rebasa la concepción puramente formal de la misma, en cuanto ésta se limita a la existencia de individuos con ciertas derechos y garantías, sancionados por los ordenamientos jurídicos vigentes. La ciudadanía sustantiva es una concepción dinámica, activa, inscrita en el contexto de las luchas

sociales frente a problemáticas diversas que generalmente implican relaciones de poder.

CAPÍTULO III. SIGLO XX EN MÉXICO: ESTADO AUTORITARIO, REFORMAS Y CULTURA POLÍTICA

Se ha definido en las páginas iniciales de este trabajo el concepto de legitimidad como la capacidad de un sistema político para engendrar y consolidar la creencia entre los ciudadanos acerca de la factibilidad y la necesidad de determinadas instituciones de dominio para un país o sociedad, en un cierto momento histórico. Se ha argumentado que tal creencia en el ánimo de la mayoría de los individuos de una sociedad, es necesaria para que el gobierno en cuestión tenga viabilidad y pueda permanecer en el tiempo. La existencia de legitimidad es inversa a la necesidad de un gobierno de acudir a la represión.

Se ha escrito también que la legitimidad de un gobierno no es algo dado de una vez y para siempre. La legitimidad puede tener diversos orígenes y variar en el tiempo, aumentar o disminuir, según el comportamiento de ciertos factores como el desempeño del gobierno, la percepción de los grupos de beneficiarios reales o aparentes de las políticas del gobierno, acontecimientos externos con fuerte repercusión en el ámbito nacional, entre otros.

De esta manera, para todo gobierno, especialmente uno de carácter democrático, será una tarea prioritaria el mantenimiento constante de su legitimidad y, si se puede, el incremento de la misma a través de los mecanismos a su alcance, empezando con su propio desempeño diario, hasta el uso de la propaganda política más sofisticada.

Una de tantas clasificaciones de legitimidad que se puede adaptar al caso de México, es la de Karl Deutsch que habla de una legitimidad por origen revolucionario, una legitimidad por desempeño y una legitimidad por procedimiento legal (Deutsch, 1994:62).

La legitimidad por origen revolucionario se refiere el caso de aquellos regímenes que surgen como producto de una revolución que canceló el antiguo gobierno y logró el desarrollo económico y social del país en cuestión.

La legitimidad por desempeño se refiere a aquellos gobiernos que a través de la alta eficiencia en la gestión de los asuntos públicos alcanzan la aceptación de la ciudadanía, al lograr el desarrollo económico, la seguridad ciudadana, así como el bienestar social. La legitimidad por procedimiento legal, por su parte se refiere a aquellos gobiernos que llegan al poder mediante los procedimientos legales establecidos para tal efecto, reconocidos y aceptados por los diferentes actores.

Este último caso de legitimidad, es el que usualmente se identifica con los regímenes revolucionarios. Estas tres fuentes de legitimidad, aclara el autor, no son necesariamente excluyentes.

3.1 El régimen revolucionario, el origen legítimo

El régimen político mexicano surgido de la revolución de 1910 se define como una república federal, con separación de poderes, Estado de derecho y sistema multipartidista. Asimismo, se define a sí mismo como de origen “revolucionario”, es decir, como encarnación de los objetivos y aspiraciones, por los cuales lucharon los grupos revolucionarios a principios del siglo XX en México.

Este régimen se planteó, entre sus objetivos principales, la justicia social, el desarrollo personal a través de la educación y el trabajo, así como el logro de satisfactores sociales como el ingreso, la vivienda, la salud, etc. De esta manera el régimen o los regímenes de la revolución mexicana, se propusieron como objetivo fundamental el logro de la democracia no sólo en sus aspectos políticos, sino también en los sociales.

El régimen revolucionario acudió a distintas formas de legitimidad a efecto de mantenerse en el poder. El recurso de la coerción fue usado de manera no recurrente y sistemática; aunque nunca se dudó en echar mano de él, siempre que se consideró necesario. La legitimidad procurada por el Estado mexicano, tuvo preferentemente como base de sustentación, su origen pretendidamente revolucionario, así como beneficios aportados en el plano de lo económico social a los distintos grupos de la sociedad mexicana, independientemente de que en el plano político siempre procuró una cierta apariencia de vida democrática limitada, con propósitos legitimadores. Al respecto Deutsch dice:

“...el régimen implantó una serie de políticas sociales que lograron beneficiar en algún grado principalmente a los sectores organizados dentro del esquema corporativo del Estado, y que permitieron sustentar con cierto fundamento su legitimidad popular y revolucionaria” (Deutsch, 1994:65).

Incluso el desarrollo industrial del país, aparejado con altas tasas de crecimiento económico constante, le dio a los regímenes políticos de la revolución una buena dosis de legitimidad por desempeño. El periodo del llamado “milagro económico mexicano”, es un buen ejemplo de lo aquí afirmado. Entre los años 1945 a 1975,

aproximadamente, la economía mexicana creció a tasas del 7% anual, comportamiento comparable al de los países más industrializados del mundo, que permitió a los gobiernos del nacionalismo revolucionario una alta aceptación entre la población, en términos de expectativas sociales satisfechas.

La revolución mexicana de principios del siglo XX en México, ocasionó una profunda transformación de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales del país. El derrocamiento del régimen dictatorial oligárquico encabezado por Porfirio Díaz, implicó la concurrencia de distintas fuerzas políticas, que una vez alcanzado ese objetivo común, mostraron sus profundas divergencias entre sí e iniciaron una lucha armada entre ellos mismos por alcanzar el poder político que no habría de terminar sino hasta finales de la segunda década del siglo XX.

El sistema político mexicano desde su nacimiento ocurrido en la segunda década del siglo XX, ha presentado siempre profundos rasgos autoritarios. Sus estructuras y sus prácticas han estado casi siempre alejadas de los principios democráticos, y esto ha sido así debido a la forma en que surgieron y se consolidaron sus principales elementos.

El Partido Nacional Revolucionario (PNR) surgió como un organismo impulsado desde las esferas de gobierno para la organización del poder y su transmisión pactada, que terminó con las sangrientas luchas que los caudillos políticos desplegaron a lo largo del país, en procura de sus ilimitadas ambiciones de poder. Las luchas de las diferentes facciones revolucionarias frente al poder de la dictadura porfirista, acabó con el triunfo del ala burguesa terrateniente, que tuvieron en Obregón y Calles a sus dos máximos representantes.

La llegada de Álvaro Obregón al poder en 1920, no representó el término de los conflictos armados en el país, sino, por el contrario, el inicio de nuevos enfrentamientos entre la facción triunfante, que se disputó entre sí los beneficios del poder y la riqueza que creían merecer luego de su participación en el movimiento armado de 1910.

Así, el PNR se constituyó, más que en un partido político, en una cofradía de caudillos que tendría como fin la transmisión pacífica del poder y, con ello, el inicio de la institucionalidad política en el país. Al menos eso fue lo declarado por su gran impulsor Plutarco Elías Calles, luego de expresar la urgente necesidad de constituirlo, ante el asesinato del caudillo mayor, Álvaro Obregón, que puso nuevamente al país al borde de la guerra civil.

El PNR nació, en el seno del poder, como un instrumento para su administración, para la transmisión pactada entre la llamada “familia revolucionaria”. El PNR fue, también, un instrumento para el ejercicio muy personal del poder del llamado jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, en el periodo que va de 1928 a 1934, conocido precisamente como el *maximato*. Arnaldo Córdova señala al respecto:

“Más que un partido el PNR comenzó siendo una verdadera coalición de fuerzas bajo el mando de un Comité Ejecutivo Nacional a través del cual se imponía la autoridad de Calles” (Córdova, 1981:38).

Durante el *maximato*, sobre todo durante los gobiernos de Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, el país vio como las decisiones de un hombre se impusieron por sobre las instituciones políticas, que por demás resultaban aún muy débiles. La institucionalidad política que dijo buscarse con la conformación del PNR resultó muy desdibujada, ante el poder apabullante del “jefe máximo”.

Los gobiernos de Obregón y Calles fueron, desde luego, gobiernos personalizados donde el poder de las incipientes instituciones políticas poco contó. El poder fue un asunto de grandes personajes, de caudillos, de elites, de cofradías, con poca responsabilidad frente al pueblo de México, que entonces se encontraba muy ajeno a los asuntos del poder.

Con Obregón y Calles se inició uno de los elementos del sistema político mexicano que más han obrado en desmedro de la participación política libre y autónoma de trabajadores, campesinos y otros grupos sociales. El sindicalismo obrero fue cooptado y corporativizado por el poder desde sus primeros lustros de existencia.

Es el mismo Obregón quien desde tiempos de la Casa del Obrero Mundial, logró la participación de los llamados “batallones rojos” al lado del ejército constitucionalista frente a los ejércitos populares. Después, con la aparición de La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), el control corporativo de la clase obrera fue prácticamente total.

Desde muy temprano, el líder de la CROM, Luis N. Morones, se vinculó estrechamente con los gobernantes sonorenses a quienes sirvió con el control de los trabajadores y la represión de aquellos grupos desafectos a sus gobiernos, a cambio de reconocimiento y prebendas diversas que alcanzaron una secretaría de Estado

para Morones que, incluso, llegó a albergar para él mismo aspiraciones presidenciales.

Durante el cardenismo, 1934-1940, el movimiento obrero alcanzó una relativa autonomía, debido a la crisis capitalista de 1929 y al declive de la CROM, lo cual le permitió participar de manera decisiva en la política de masas desplegada por el presidente Cárdenas, y alcanzar de esa manera una importante posición en la política nacional. Lo mismo puede decirse de los campesinos, cuya movilización en el episodio de la reforma agraria resultó decisiva en los objetivos gubernamentales. La expropiación petrolera, así como la expulsión del país de Calles, fueron episodios en los que grandes conglomerados sociales tuvieron un papel muy activo en las decisiones de política pública (Córdova, 1981:38).

No obstante lo anterior, durante el cardenismo se avanzó en la consolidación del corporativismo, como un instrumento de control de muy diversos sectores sociales. Durante este primer periodo sexenal en México, el Partido Nacional Revolucionario (PNR), se convirtió en Partido de la Revolución Mexicana (PRM), al cual fueron incorporados obreros y campesinos en respectivos sectores. La operación de sujeción social, fue un episodio definitivo con la conversión del PRM en Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la aparición dentro de él, del llamado sector popular, Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), que aglutinara a toda una diversidad de grupos sociales.

La corporativización de muy diversos grupos sociales llevó al control de las energías sociales de muy diversos grupos e individuos, que fueron llevados a una lógica de inmovilización y control de sus demandas, a cambio de ciertos beneficios negociados por una dirigencia corrupta que sirvió a los intereses de un Estado autoritario. Generaciones de trabajadores fueron atrapados en las estructuras corporativas y entendieron que sus capacidades de demanda, movilización y lucha se encontraban constreñidas por acuerdos cupulares entre sus dirigentes y las instancias estatales (Córdova, 1981: 75)

Con el corporativismo vino aparejado un notable clientelismo político, en el cual el Estado asistencial procuró ciertos beneficios de tipo social a ciertos grupos sociales, los cuales a cambio guardaron fidelidad política al partido político oficial. El asistencialismo social se tomó como moneda de cambio por el voto y la movilización política de amplios grupos sociales, dando pie al surgimiento de comportamientos clientelares antes que ciudadanos.

La política social se transformó en fuente de legitimidad de los autodenominados gobiernos revolucionarios, que en lugar de democracia procuraron ciertos satisfactores sociales a diversos grupos de la sociedad, que entraron en una lógica paternalista que los ató al Estado mexicano. Corporativismo, asistencialismo, clientelismo, paternalismo, fueron las constantes de la relación Estado sociedad mexicana durante muchos años, mientras el modelo de desarrollo económico fue lo suficientemente productivo para permitir las políticas sociales compensatorias, aproximadamente hasta principios de los años setenta.

Sin embargo, tal situación cambió drásticamente con la crisis económica de los años ochenta, que implicó un cambio en la racionalidad política y económica del Estado mexicano.

3.2 El sistema político mexicano, breve mirada a su funcionamiento

El Estado mexicano se considera producto de la revolución de 1910 y como tal se asume como tutor de las clases sociales más desfavorecidas. El cumplimiento de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917 fue parte infaltable de la retórica oficial de los gobiernos “revolucionarios”. A su invocación fue desplegada la política social ya mencionada, pero, también, los mismos artículos sirvieron, como eficaces instrumentos en el control y manipulación de masas de obreros y campesinos, que se ocultó en la idea de un gran pacto social.

Cuando los mecanismos clientelares y asistenciales no funcionaron, o no fue posible su utilización en la relación Estado sociedad, la alternativa de la represión fue utilizada puntualmente. El uso de la fuerza física se empleó contra grupos disidentes que no ubicaron sus demandas en los circuitos establecidos por el propio Estado mexicano. Profesores, ferrocarrileros, estudiantes, mineros, y varios grupos sociales más padecieron las medidas represivas de los gobiernos priístas (Demetrio Vallejo por parte de los ferrocarrileros, Othon Salazar del magisterio, el movimiento estudiantil del 68, son sólo algunos de los ejemplos en este sentido).

En el plano de lo político electoral el régimen priísta se mostró igualmente autoritario y hegemónico. Dos fueron los principales instrumentos que se pusieron en juego: el presidencialismo y el Partido de Estado.

La figura del presidente prácticamente diluyó la presencia de los otros elementos del sistema político. La constitución política de 1917 le otorgó poderes formales de gran importancia, y las costumbres políticas le reconocieron poderes

informales muy importantes. Jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de las fuerzas armadas, manejo discrecional en la formulación y elaboración del presupuesto, capacidad de iniciar leyes y hacerlas aprobar, jefe del partido oficial, jefe de la clase política, arbitro de las pugnas políticas mayores, capacidad de exclusión de la vida política, vértice en la transmisión del poder, en especial de su sucesor. Daniel Cosío Villegas señaló al respecto:

“Las amplísimas facultades que tiene el presidente de México proceden de la ley y de una serie de circunstancias del más variado carácter” (Cosío Villegas, 1982: 22).

El conjunto de poderes formales y reales le permitieron un dominio absoluto de los poderes legislativo y judicial, así como de los gobiernos de las entidades federativas. El poder del presidente de la república apareció como un poder faraónico, casi sin límite.

Unido al poder presidencial, el partido oficial, un partido de Estado, aprovechando su simbiosis con las instancias gubernamentales, se constituyó en un auténtico partido hegemónico, que monopolizó la vida político electoral del país. Los enormes recursos públicos de que disfrutó este partido, así como el apoyo político del gobierno y los organismos electorales, dieron al partido oficial una influencia casi total sobre la vida político partidaria del país. La oposición en este renglón resultó prácticamente simbólica, pues ni remotamente contó con la capacidad de disputar el poder al partido de gobierno. Los mexicanos llegaron a habituarse a que “siempre gana el PRI”, y por tanto el voto, su voto, no tenía mucho sentido, pues poco o nada contaba en la designación de aquel quien habría de gobernarlo por otros seis años. Lorenzo Meyer señala al respecto:

“En el caso de México es posible afirmar que desde 1916, fecha en que se pusieron los cimientos del nuevo orden y hasta antes del 2 de Julio del 200, las elecciones no fueron nunca la fuente primaria del derecho a gobernar...” (Meyer, 2005: 34).

Este enorme poder del presidente y del partido hegemónico, se tradujo, entre otras cosas, en una gran corrupción en todos los ámbitos sociales, especialmente en el político electoral, que no contó jamás con un marco regulatorio adecuado, ni con instituciones electorales autónomas y fuertes. Más aún, no se contó, en general, con

un auténtico Estado de derecho que regulara la vida social de la nación mexicana. Tal ausencia redundó en una situación de impunidad a todos los niveles de la vida política y social. Las violaciones a la ley pocas veces se castigaban, y en muchísimos casos los encargados de hacer justicia resultaban los responsables de las violaciones a los derechos de los ciudadanos.

En esta situación fue muy difícil el desarrollo de actitudes ciudadanas por parte de los mexicanos, más allá de los derechos y garantías establecidos por la constitución política, poco ejercidos por los individuos, y poco respetados por el Estado mexicano. Al respecto escribe Lorenzo Meyer:

“El ciudadano existía mucho en los documentos y el discurso pero poco en la realidad” (Meyer, 2005: 29).

La libertad de expresión, de reunión, de manifestación, entre otras, fueron controladas por el poder, y en no pocas ocasiones, severamente reprimidas. Delitos como el de disolución social, que castigaba la disidencia y la manifestación social, sirvieron para reprimir movimientos y encarcelar líderes políticos de distintos sectores sociales. No es casual que una de las demandas del movimiento estudiantil de 1968, que puede ser visto como el inicio de la democratización en nuestro país, fue justamente la abolición de tales delitos.

La cultura política desarrollada en el marco de este estado de cosas, resultó pasiva, clientelar y autoritaria, como reflejo del sistema político corporativo, paternalista, asistencial e, igualmente, autoritario que prevaleció en México durante el periodo referido. Al respecto Meyer señala.

“El corporativismo posrevolucionario mexicano resultó ser la forma de organización propia de un autoritarismo, de la cultura del súbdito y no del ciudadano” (Meyer, 2005: 30).

3.3 El estudio de la Cultura Política en México

Hasta antes de los trabajos de Almond y Verba, no se desarrollaron investigaciones con un carácter propiamente científico sobre la cultura política en México, más bien fueron ensayos con un carácter básicamente psicológico y culturalista, que abordaban de soslayo la cuestión de las actitudes y comportamientos del mexicano frente a las realidades de la política y el poder. Hablamos de trabajos como los de Octavio Paz en *El laberinto de la Soledad*, *El Mexicano* y *la Psicología de sus*

motivaciones de Sergio Ramírez y *El Perfil del Hombre y la Cultura en México*, de Samuel Ramos. Roger Bartra señala al respecto:

“A lo largo del siglo XX la cultura mexicana fue inventando la anatomía de un ser nacional cuya identidad se esfumaba cada vez que se quería definirlo, pero cuya presencia imaginaria ejerció una gran influencia en la configuración del poder político.”(Bartra, 2007: 11)

Con el estudio de Rafael Segovia sobre “La Politización del Niño Mexicano”, se inicia una serie de trabajos sobre la temática en México, que con el tiempo llegará a alcanzar gran importancia. El trabajo de Segovia inquiriere sobre las actitudes políticas de los niños escolares a finales de los años sesenta en relación a la escuela y su proceso de socialización. El autor dice al respecto:

“La escuela revolucionaria, de acuerdo con lo que pudo observarse, cumplió su papel casi a la perfección: los niños mexicanos que tenían la posibilidad de frecuentar una escuela a fines de 1969, o sea en el momento de la encuesta, están bien socializados: su respuesta está adecuada a lo que de ellos se espera, la relación niño sociedad no presenta demasiadas asperezas...” (Segovia, 1994: 3)

Robert Scott y Wayne Cornelius, realizan investigaciones entre las que destacan, *Political Culture in México; Continuties and Revisionist Interpretations y Los Inmigrantes Pobres en la Ciudad de México y la Política*, en donde, entre otras cosas concluyen, en la existencia de una fuerte vinculación entre factores de diverso tipo como los históricos y los educativos, en la conformación en México de una cultura política caracterizada por el autoritarismo, el paternalismo y el corporativismo (Cuna, 2004:35).

Craig y Cornelius observaron una muy baja consideración entre los mexicanos acerca de su condición de ciudadanos, de sus posibilidades reales de influir a título personal ante el gobierno en procura de sus intereses, y una alta expectativa en relación a los beneficios esperados de la esfera gubernamental. De acuerdo con estos autores, la figura del intermediario, del gestor, en cualquiera de las caracterizaciones que este pudiera adoptar, era tenida en alta estima, sobre todo entre los segmentos de la población de menores ingresos (Cuna, 2004:35).

Cornelius argumenta que tales ideas y comportamientos descritos anteriormente están fuertemente asociados a la persistencia de una cultura política de origen rural entre los inmigrantes a la Ciudad de México, que una vez asentados en el ámbito urbano reproducen sus pautas de comportamiento, que les resulta no muy diferente al de su procedencia en lo referente a los aspectos culturales del poder. Cornelius califica de parroquial, apática, poco consciente e interesado en asuntos públicos.

El mismo autor insiste en que el comportamiento político de los ciudadanos desempeñó un papel esencialmente legitimador del sistema político, al no cuestionarlo, ni presionar su cambio o evolución, sino simplemente refrendarlo, vía la votación periódica; la mayoría de las veces con un carácter puramente ritual.

En tiempos más recientes (1995), Roderic Ai Camp en sus respectivas investigaciones, encontró entre la población investigada actitudes tanto favorables como desfavorables hacia el proceso de democratización en México. Distingue actitudes de respeto y aprecio hacia ciertas instituciones como la iglesia y la escuela, así como actitudes muy desfavorables hacia las instituciones políticas, que reflejan una falta de confianza en el gobierno.

A.I. Camp, encontró que existía poca credibilidad en los procesos electorales, así como en la creencia en la posibilidad de influir sobre ellos, aunque algunos sectores empezaban a juzgar positivamente las elecciones en el país. El mismo investigador norteamericano encontró que pocos mexicanos participaban activamente en organizaciones y partidos políticos, señalando que la condición económica de los individuos sujetos de estudio, resultaba determinante en su confianza en el sistema político y en su propio accionar político frente a las instancias gubernamentales (Cuna, 2004:37).

En general, los autores que investigaron la cultura política hasta antes de la década de los noventa, concluían la existencia de una cultura política poco participativa, clientelar, sumisa, que en gran medida caracterizó a gran parte de los mexicanos durante el siglo XX.

La ciudadanía existente, no fue más allá del registro formal de los derechos y garantías que la constitución política le otorgo a los mexicanos, que, por demás, resultaron de lo más avanzados en el mundo. El Estado que le dio origen se mantuvo incólume durante muchas décadas, pero poco a poco habría de abrirse ante la evidencia de su desgaste natural, el avance del pluralismo, del impacto de

movimientos sociales, de la severidad de las crisis económicas, entre otros diversos factores. La legitimidad revolucionaria, mantenida, en gran medida, mediante el asistencialismo social, habría de encontrar sus límites ante el trastocamiento de la realidad económico social que se manifestó en los siguientes años, debido a factores tanto internos como externos.

A continuación, hacemos una breve recapitulación de cómo el sistema político mexicano empezó a abrirse vía las reformas electorales, en respuesta a diversos factores que presionaron en ese sentido.

3.4 La larga ruta de la transformación política en México; reformas políticas y movimientos sociales

La vía de las reformas electorales que el gobierno mexicano ha implementado en momentos específicos de la historia reciente del país han buscado ampliar los canales de participación de grupos sociales y políticos que, en su momento demandaron mayores espacios de expresión, con el objetivo primario de mantener el control sobre los procesos políticos. Más que un afán democratizador en su política reformista, al Estado lo ha animado la idea de mantener su tradicional dominio político, cediendo en mínimo posible. Esto es:

“...la lógica de las sucesivas liberalizaciones en México ha sido una y otra vez dictada por el objetivo de preservación del sistema, antes que por un pretendido imperativo democrático” (Cook, Middlebrook, Molinar, 1996: 177).

Veamos un breve recorrido histórico de lo señalado líneas arriba. En 1946 se expidió la ley que reguló la vida electoral en México, durante treinta años. La ley buscó, ante todo, consolidar el control por parte del PRI del sistema político mexicano, al establecer un proceso de centralización de las elecciones, donde sólo se permitió la participación electoral de los partidos políticos reconocidos (Molinar Horcasitas, 1991: 24 y 25).

En 1963, se realizó una reforma que permitió la representación política de la oposición en la Cámara de Diputados por la fórmula de los llamados diputados de partido. La cual dio la posibilidad a los partidos de oposición de tener representación en el poder legislativo, a partir de la obtención de un determinado nivel de votación conseguido por el partido mismo, en una determinada votación, independientemente

de las diputaciones que pudiera conseguir por la vía uninominal. De esta manera el Partido Acción Nacional alcanzó la cifra de 20 diputaciones federales.

”En esta situación, los efectos de la reforma fueron notables para el PAN, pues ese partido obtuvo en la legislatura 1964- 1967 un número de diputados similar a los que había ganado en las últimas cuatro legislaturas (20 en 1964, contra 22, de los cuales 4 no se presentaron, entre 1952 y 1961” (Molinar Horcasitas, 1991: 66).

Hacia finales de los años setenta el llamado “milagro económico mexicano” llegó a su fin. La inflación y la devaluación afectaron de manera importante la economía de los mexicanos. La deuda pública se incrementó considerablemente, la balanza comercial se mostró desfavorable para el país, y el déficit público creció de manera importante.

Años atrás, movimientos sociales y políticos muy importantes, mostraron que más allá de la legitimidad que hubiesen podido conseguir los llamados regímenes del nacionalismo revolucionario vía la dotación de cierto nivel de satisfactores sociales para la sociedad, existía un gran descontento entre sectores importantes de la sociedad, ante la realidad de la cerrazón política y del autoritarismo.

El movimiento estudiantil de 1968 tuvo un gran significado y trascendencia para el proceso democrático en particular. El régimen de la Revolución Mexicana mostró su rostro más autoritario, intolerante y represor, ante los reclamos de mayor apertura política de sectores importantes de la sociedad mexicana, en especial las clases medias. El régimen no estuvo dispuesto a reconocer y permitir el ejercicio de derechos fundamentales como el de reunión, expresión, manifestación, frente a una ciudadanía que se movilizó en defensa y reivindicación de los mismos.

El movimiento estudiantil de 1968 representó el fin del mito del carácter democrático de los regímenes de la revolución. La masacre estudiantil dañó irremediablemente la legitimidad de los gobiernos priístas; mostró su ineptitud, su intransigencia, su corrupción y se constituyó en el germen del reclamo de cambios políticos profundos que adoptaron otros sectores sociales, en los años por venir. El gobierno de Luis Echeverría consciente de tal situación llevó a cabo una política aperturista que buscaba resarcir la imagen del Estado mexicano frente a la sociedad mexicana.

3.4.1 La “apertura democrática” de Luís Echeverría

Ante el descrédito del gobierno mexicano debido a las secuelas de la matanza de estudiantes del 2 de Octubre en Tlaltelolco, apenas iniciado su sexenio, Luís Echeverría impulsó lo que él llamo una política de apertura democrática que evidentemente buscaba resarcir la imagen del gobierno ante amplios núcleos de la población, especialmente las clases medias.

“La apertura echeverrista fue sobre todo, un alegato por reafirmar la legitimidad ideológica e institucional del Estado mexicano amenazado por la crisis política del 68” (Aguilar Camín y Meyer, 2000:247).

Ya en los años setenta, específicamente en el gobierno de Luis Echeverría, se presentaron también problemas políticos y sociales, que se originaban en las estructuras políticas autoritarias del régimen priísta. El sindicalismo corporativo, pieza fundamental del control obrero, sufrió una fuerte sacudida ante los diversos movimientos de reivindicación de la libertad sindical, ocurridos en diversos sectores de la economía nacional. El llamado “charrismo” fue sacudido por estas manifestaciones, que en algunos casos terminaron en la conformación de sindicatos autónomos. En el sector electricista se manifestó una de las fuerzas disidentes más contestatarias, la tendencia democrática y su líder Galván. El sindicalismo universitario también presentó importantes sacudimientos.

Otro gran problema político ocurrido durante el gobierno echeverrista fue el de la guerrilla rural y urbana que se enfrentó al gobierno mexicano, al considerar que era esa la única vía de cambio político ante la realidad de un gobierno monolítico y represor. Los enfrentamientos entre los grupos guerrilleros y las fuerzas gubernamentales se extendieron por algunas de las más importantes ciudades del país, como el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, y terminaron con el aniquilamiento de las fuerzas subversivas.

La guerrilla rural representada por Lucio Cabañas y la urbana representada por la auto nombrada Liga comunista 23 de septiembre, no sólo se enfrentaron militarmente a las fuerzas del Estado, sino que incluso cometieron una serie de acciones que impactaron fuertemente a la opinión pública, como los secuestros de Rubén Figueroa y Eugenio Garza Sada.

El sector estudiantil también se manifestó fuertemente una vez más, y la respuesta del Estado fue la represión desmedida, que ocasionó una nueva masacre de estudiantes ocurrida el jueves de corpus de 1971.

Con el sector empresarial el gobierno de Luis Echeverría también tuvo problemas importantes, al grado de desatarse un abierto enfrentamiento entre ambos actores. El gobierno de Echeverría acusó a los empresarios mexicanos de no preocuparse por el crecimiento económico nacional, motivo por el cual, según él, el Estado mexicano debió incrementar su participación en la economía nacional de manera más que significativa en relación a épocas pasadas.

El empresariado nacional no vio con buenos ojos el abandono del papel tradicional que el Estado mexicano cumplió en sexenios anteriores respecto de la economía, criticando su creciente intervencionismo que, desde su óptica, finalmente llevó al crecimiento del déficit público, la deuda pública y la inflación. Otras acciones llevadas a cabo por Echeverría como la expropiación de las tierras del Valle del Yaqui, en Sonora y Sinaloa, en las que resultaron afectados grandes empresarios como Manuel J. Clouhtier, contribuyeron a exacerbar los ánimos entre el empresariado nacional y el gobierno de Luis Echeverría.

La apertura democrática”, que permitió una mayor apertura a la crítica social y política en algunos medios, sin embargo resultó sumamente limitada en sus alcances reales; tal y como lo muestra el golpe dado al periódico *Excelsior* debido a sus posiciones críticas frente a los gobiernos priístas. El gobierno de Echeverría terminó su gestión en medio de una gran crisis económica y política que incrementó el daño a la legitimidad de los gobiernos de la revolución, luego de los acontecimientos de 1968.

3.4.2 La Reforma Electoral de 1977

Durante el gobierno de José López Portillo en respuesta a la problemática política vivida durante los últimos lustros, se implementó una reforma política que abrió los causes de la participación electoral a fuerzas políticas que, hasta entonces, fueron excluidas de la política nacional. El Partido Comunista Mexicano, el de mayor antigüedad en México, fue beneficiado por la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), que permitió su incorporación a la vida electoral partidista y el abandono de su existencia clandestina (Guerrero, 2004:43).

También se promulgó una ley de amnistía que permitió la reincorporación a la vida civil y pacífica de aquellos individuos que formaron parte de grupos guerrilleros en el pasado, y que se mostraron dispuestos a abandonar el camino de las armas. Muchos individuos en este caso se incorporaron efectivamente a la actividad política electoral, dejando a un lado el camino de la violencia. Sólo dos organizaciones guerrilleras, las Fuerzas de Liberación Nacional y el PROCUP rechazaron la alternativa.

Otros dos partidos políticos, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Partido Demócrata Mexicano (PDM), lograron su registro a través de la fórmula del registro condicionado que les permitió participar en las elecciones federales intermedias y pudieron conservar su registro al obtener más de 1.5 por ciento de la votación total. Señala Horcasitas.

“Así, por ejemplo, la ampliación de espacios para la competencia partidista que ofreció la Ley Federal de Organizaciones de Procesos Políticos y Electorales, LOPPE, de 1977 fue –dentro de la estrategia gubernamental de combate a la guerrilla- una táctica destinada a integrar en el sistema a organizaciones de izquierda, induciéndolas a renunciar a medios extraparlamentarios de acción, en un contexto de prosperidad económica” (Cook, Middlebrook, Horcasitas, 1996: 177).

En treinta años desde la anterior ley electoral de 1946, ningún otro partido político había alcanzado su registro. Sólo el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Popular socialista (PPS), y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), disputaron el voto al PRI, en condiciones por demás desfavorables. Sólo el PAN llegó a alcanzar cierta presencia en la Cámara de Diputados, pero, en términos generales, la oposición tuvo un carácter testimonial por aquellas épocas. Las contiendas electorales sólo eran un muy relativo factor de legitimidad.

En la elección presidencial de 1976, hubo un solo candidato a la presidencia de la república, José López Portillo del PRI, lo cual evidenció el desfase tan enorme entre una sociedad cada vez más plural y activa políticamente, y la institucionalidad político electoral que no reflejaba el espectro de fuerzas políticas existentes en el país.

En estas mismas elecciones el PAN no presentó candidato presidencial, mientras el PPS y el PARM postularon al mismo abanderado del partido oficial, José López Portillo.

El Partido Comunista Mexicano (PMC), proscrito desde mediados del siglo XX, no presentó candidato oficial a las elecciones presidenciales. No obstante lo anterior, el PMC presentó a Valentín Campa como candidato “independiente”, que logró cosechar un millón de votos aproximadamente, lo que patentizó la importante presencia de la opción política de izquierda entre la sociedad mexicana, que estaba excluida de participación electoral por prejuicios larvados en el contexto del clima de la guerra fría del siglo XX.

Otros dos partidos políticos, el PST y el PDM, participaron en las elecciones federales de 1979 de manera condicionada, y pudieron mantener su registro al igual que el PMC que entonces sí pudo participar al amparo de las reformas de 1977.

Entre los contenidos más importantes de la LOPPE, se pueden señalar los siguientes:

- Reconocimiento de los Partidos Políticos como entidades de interés público, con el objetivo principal de promover la participación ciudadana en la vida democrática del país. Los partidos al adquirir tal carácter, obtuvieron el derecho de recibir recursos financieros públicos para su mantenimiento y el desarrollo de campañas políticas.
- Se establecieron procedimientos más flexibles para el registro de los partidos políticos y se creó la Comisión Federal Electoral, como órgano encargado de conducir los procesos electorales, separada de la Secretaría de Gobernación pero bajo la conducción del titular de esta misma dependencia. En este punto, la reforma presentó su principal limitante, pues la organización y desarrollo de las elecciones seguía bajo control gubernamental.
- Se mantuvo la prerrogativa de que los partidos políticos podían conservar su registro con tan sólo alcanzar el 1.5 % de la votación total, y se estableció que incluso los partidos con registro condicionado podían mantener su representación frente a la Comisión Federal Electoral, así como en los comités electorales de carácter distrital y estatal.
- Se garantizó el apoyo financiero para las campañas de los partidos políticos, así como para la edición de sus publicaciones.
- Se volvió permanente el acceso de los partidos a los medios de comunicación masiva.

-Se añadieron cien curules a la Cámara de Diputados, elevándose a cuatrocientos su número total. Las cien curules agregadas fueron disputadas por la fórmula de representación proporcional, exclusivamente por los partidos de oposición. Se canceló la figura de diputado de partido.

La LOPPE fue una ley que promovió la incorporación a la vida política electoral de sectores sociales que crecieron por fuera de los mecanismos corporativos como las clases medias urbanas, y que habían mostrado su rechazo ante la cerrazón del sistema político mexicano. La reforma buscó legitimar al sistema político frente a las problemáticas enfrentadas en años pasados con los grupos obreros, estudiantiles y, aún, empresariales (Guerrero, 2004: 49).

El Estado mexicano abrió la arena político electoral a la participación de otros actores, buscando que fuera ese el ámbito para la solución de los diferentes conflictos políticos. La reforma electoral del 77 permitió potenciar los alcances del sistema político mexicano y logró una más completa representación de la de la soberanía política en el poder legislativo.

La reforma comentada permitió la existencia de un más efectivo sistema de partidos, que implicó un cambio profundo en el sistema político mexicano mismo, sin el desarrollo de grandes problemas en la sociedad. Sólo el Partido del Trabajo se dijo marginado de la reforma descrita, que sin duda buscó, y en buena medida logró, ampliar los márgenes de legitimidad del sistema político mexicano en el corto y mediano plazo, cuestionada por los factores mencionados anteriormente.

La crisis económica de finales del sexenio lópezportillista tuvo importantes repercusiones en el ámbito de lo político. En especial la nacionalización de la banca que el presidente López Portillo decretó en su último informe de gobierno, lo confrontó con el sector empresarial que sintiéndose defraudado por el gobierno priísta, se incorporó al PAN para desde ahí disputar el poder.

La crisis económica de finales del sexenio lópezportillista, en buena medida, ocultó los alcances de la reforma política de 1977, pero a la distancia se puede observar los importantes alcances de la misma, al abrir el sistema político a una mayor pluralidad política que con el tiempo acabaría por transformar profundamente al régimen político.

3.4.3 La Reforma Electoral con Miguel de la Madrid. La crisis económica y los primeros triunfos del Partido Acción Nacional (PAN) en el norte del país

Como ya se ha mencionado, el gobierno de López Portillo basó su efímero crecimiento económico en la explotación de la riqueza petrolera que por esos años alcanzó niveles nunca antes vistos en el país. Los recursos provenientes de la explotación de los hidrocarburos permitieron mantener un sistema económico basado en el crecimiento desmedido de la intervención estatal en sus diferentes modalidades, que llevó a un derroche y despilfarro inusitado. El déficit público llegó a alcanzar niveles de hasta 17% con respecto al PIB. La inflación, la devaluación, la fuga de capitales, perfilaron el contorno de una de las grandes crisis económicas en México.

Miguel de la Madrid llegó a la presidencia de la república con el imperativo de cambiar el modelo de desarrollo económico y social seguido hasta entonces, que mostró su agotamiento total. La reordenación económica y el cambio estructural fueron, entonces, los objetivos primordiales del nuevo gobierno.

El nuevo modelo económico supuso un cambio radical en la relación entre el Estado mexicano y aquellos sectores sociales que habitualmente se relacionaron con él de una manera clientelar. Agotados los recursos financieros que permitieron el despliegue de una política asistencial amplia, se acabó también con la posibilidad de fundamentar la legitimidad del poder estatal en mecanismos compensatorios que aseguraban fidelidades políticas al régimen priísta.

Las primeras grandes manifestaciones de que, no sólo el sistema económico, sino también el político se encontraba en una profunda crisis de viabilidad, ocurrieron en el norte de la república con los triunfos del PAN en varias importantes alcaldías de esa región. A partir de 1983 el voto panista creció de manera notable y el partido blanquiazul alcanzó el triunfo en las ciudades de Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Hermosillo, Guanajuato (en coalición con el Partido Demócrata Mexicano), y Ciudad Juárez.

“1985 fue el último año, considerando las elecciones federales, de relativa calma y seguridad para el PRI. De 300 curules en disputa, obtuvo 292, lo que sumado a su control absoluto del Senado, le garantizó otros tres años de dominio incontestable del poder legislativo. Ello, pese a las señales negativas que habían aparecido en el norte del país entre 1983 y 1984, cuando el PAN obtuvo importantes triunfos municipales en Chihuahua y en Durango” (Cook, Middlebrook, Horcasitas, 1996:198).

Para los propósitos de este trabajo es importante hacer notar como en esta región del país se empiezan a manifestar comportamientos ciudadanos entre las clases medias urbanas en varios estados del norte del país. Muchos de los habitantes de esta región, manifiestan una cultura política participativa, que los hace no sólo cuestionar sino involucrarse decididamente en los asuntos públicos, a través de su militancia política en un partido político, y en una causa ulterior como es la democratización de la vida política de sus estados y comunidades (Guerrero, 2004: 53).

Factores como la educación, el nivel socioeconómico, la ubicación fronteriza, pero sobre todo, el no ubicarse dentro de los circuitos del corporativismo y el clientelismo del Estado mexicano, permitieron a estos mexicanos, desarrollar pautas de comportamiento autónomas y participativas, que podemos calificar de manifestaciones auténticamente ciudadanas.

Ante este panorama que ya anunciaba el declive del PRI y la aparición de una mayor competencia electoral, estimulada por el voto de castigo de varios sectores sociales golpeados por la crisis y las nuevas políticas públicas, son aprobadas varias reformas electorales destinadas a fortalecer el control del gobierno sobre los procesos electorales.

“En estas condiciones, el gobierno delamadridista recurrió a una liberalización regulada cuyo resultado fue el Código Federal Electoral de 1986” (Cook, Middlebrook, Horcasitas, 1996: 180).

En 1986, se reformó el artículo 54 constitucional, incrementándose el número de diputados de representación proporcional de cien a doscientos, estableciéndose la posibilidad de acceso a tales diputaciones ya no sólo para la oposición, sino para todos los partidos políticos, incluido el PRI. En el mismo artículo se establecía que ningún partido por si mismo podía tener más de 350 diputados, aunque hubiese obtenido un mayor porcentaje de votos.

En 1987 se introdujo la llamada *Cláusula de Gobernabilidad*, destinada a garantizar la mayoría absoluta al partido que hubiese alcanzado tan sólo la mayoría simple. De acuerdo con esto, si ningún partido obtenía 251 diputados, el partido que hubiese obtenido el mayor número de de estos representantes obtendría, automáticamente, los diputados que se requiriese para alcanzar la mayoría absoluta. Tales diputados se obtendrían de las listas proporcionales (Guerrero; 2004:55).

La segunda alternativa para asegurar la mayoría absoluta consistía en que si algún partido obtenía el 51% o más del total de la votación pero no alcanzaba el número proporcional de diputados, recibiría automáticamente el número de diputados necesario para alcanzar los 251 o mayoría absoluta. Tales diputados saldrían, como en el caso anterior, de las listas proporcionales.

Estas reformas fueron pensadas, como ya se mencionó, en el contexto de una mayor competencia política, y se aplicaron en la elección de 1988, que habría de resultar un verdadero parteaguas en la historia política del país.

3.4.4 El gobierno salinista, la elección del 88 y la creación del Instituto Federal Electoral (IFE)

La elección de 1988 resultó de singular trascendencia en la vida política del país. Tres fuertes candidatos se disputaron la presidencia de la república; Carlos Salinas por el PRI; Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional (FDN) y Manuel J. Clouthier por el PAN. La competencia resultó muy reñida, a pesar de que los resultados oficiales dieron un considerable margen de ventaja al candidato del partido oficial. Se habló de un gran fraude electoral, y el principal candidato opositor, Cuauhtémoc Cárdenas, emprendió una campaña de movilización en defensa del voto, que tuvo amplias repercusiones a lo largo del país.

Las elecciones contribuyeron grandemente en el proceso de democratización del país, alteraron el contexto social y dieron pie a una reconfiguración profunda de los actores de la contienda electoral. El PAN y el FDN (después PRD), se constituirán en verdaderas opciones de poder.

Seis años de políticas de ajuste y reordenación económica habían hecho mella en el ánimo de miles de mexicanos que habían visto perdidos sus empleos, o reducidos sus niveles de vida, al ser contraídos tanto el gasto como la inversión pública, que repercutió en una disminución de la política social compensatoria.

Una de las principales fuentes de legitimidad del régimen, la política asistencial, estaba resultando erosionada y en el plano político electoral las cosas no se presentaban mejor. Por primera vez, en la historia reciente del país, la contienda electoral ponía en jaque al régimen priísta, y Carlos Salinas llegó al poder con una legitimidad muy erosionada. “Las elecciones presidenciales de 1988 fueron significativas porque hubo cambios importantes en la ley, los resultados electorales y los conflictos” (Gómez Tagle; 1994: 59).

La misma designación de Salinas de Gortari a la presidencia de la república generó una ruptura al interior del PRI, de parte de los partidarios del nacionalismo revolucionario, que veían en la designación de Salinas la renuncia a los compromisos del revolucionario institucional con los postulados de la Revolución Mexicana. Salinas fue identificado por estos mismos grupos, como un tecnócrata con concepciones neoliberales, muy alejadas de los principios del mismo partido oficial.

Los inconformes con la designación de Salinas se agruparon en la llamada “corriente democrática”, y desde ahí demandaron la realización de elecciones internas para la designación del candidato a la presidencia de la república del PRI en 1988. Cuauhtémoc Cárdenas, Rodolfo González Guevara, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, entre otros, encabezaron el movimiento disidente que ante la cerrazón de las cúpulas del gobierno y las partidistas, finalmente, tuvo que abandonar el PRI.

Ya fuera del PRI, se formó un amplio frente de partidos políticos y organizaciones diversas, el FDN apoyó la candidatura a la presidencia de la república de Cuauhtémoc Cárdenas, con un gran impacto social y electoral.

Mientras que Manuel Clouhtier, candidato presidencial del PAN, había estado al frente del Consejo Coordinador Empresarial durante la expropiación de la banca por el presidente López Portillo, y a partir de ese evento, impulsó la participación de prominentes empresarios norteros en la política nacional a través de su filiación al PAN. Clouhtier cuestionó el régimen dominante, los ajustes económicos fallidos, y las continuas violaciones electorales por parte de los gobiernos priistas. La candidatura de Clouhtier también concitó un importante interés entre capas numerosas de la población.

Fue evidente que la crisis económica y las medidas tomadas para enfrentarla habían afectado intereses de amplios sectores sociales, que habían encontrado en la vía electoral, una forma de canalizar su inconformidad. En torno a la campaña de Cárdenas y Clouhtier se manifestó una gran movilización ciudadana en defensa de la democracia, que evidenció por lo menos el embrión de una nueva cultura política, en ciertos sectores sociales, sobre todo urbanos.

A diferencia del PRD, que surge de la disolución del FDN y de la incorporación de otras fuerzas políticas, el PAN optó por una línea conciliadora con el salinismo a cambio del reconocimiento de sus triunfos electorales, y de la

realización de una reforma electoral que asegurara condiciones para la realización de comicios limpios, equitativos y transparentes. Es la época de las llamadas concertaciones, en las que el PAN y el PRI se alían para la realización de acciones de gran trascendencia histórica como las reformas al artículo 27 constitucional que, permitió, entre otras cosas, la enajenación de las tierras ejidales. Señala González Pedrero:

“En 1988, después de unas elecciones muy discutidas, sobre las que se cernía la sombra del fraude electoral, la oposición hubiera podido abrir un frente común para empujar hacia la transición. Sin embargo, en aquella ocasión, el PAN se alió con el PRI y la transición se frustró” (González Pedrero; 2006: 177).

En parte, como respuesta a esa necesidad que experimentó el régimen priísta de legitimarse luego de su muy cuestionada elección, Salinas de Gortari convocó a un acuerdo nacional para la ampliación de la vida democrática. Dicho acuerdo pretendía dar certidumbre y transparencia a los procesos electorales en el país, por lo cual fue que se hicieron una serie de reformas en 1990, 1993 y 1994. Las dos primeras no contaron con la participación del PRD, y no dejaron satisfecho al PAN, por lo que fue hasta la tercera que intervinieron todos los partidos políticos, y se pudo alcanzar acuerdos importantes que implicaron el relevo gradual de la intervención gubernamental en los procesos electorales, que finalmente habría de quedar inconclusa. La creación del IFE y su progresiva “ciudadanización” (que culminaría hasta 1996), la adopción de diversos principios constitucionales para asegurar la eficacia del voto; la institución de un tribunal electoral autónomo y concluyente, entre otras disposiciones, Gómez Tagle apunta:

“La modificación más importante de la reforma de 1989-90 fue la creación del Instituto Federal Electoral. Se trataba de un organismo público, autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, formado por consejeros magistrados (electos por los poderes Legislativo) por el Secretario de Gobernación y por representantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los partidos políticos” (Gómez Tagle, 1994:139).

La reforma del 94 sistematizó la organización del IFE como organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La conformación fue

responsabilidad conjunta de los poderes Ejecutivo y Legislativo, con la concurrencia de partidos políticos y ciudadanos (Pérez Correa, 2006:34).

El Consejo General del IFE se integró por consejeros ciudadanos designados por los poderes Legislativo y Ejecutivo, y por representantes nombrados por los partidos políticos. El Tribunal Federal Electoral (TRIFE) fue instituido como la máxima autoridad jurisdiccional en materia de elecciones, dotado de plena autonomía.

En el plano de lo social, el gobierno salinista implementó el llamado programa de Solidaridad dirigido a la asistencia de los grupos sociales más vulnerables en pobreza o pobreza extrema, que contribuyó a la recuperación electoral observada por el PRI en las elecciones intermedias del gobierno salinista.

El impacto de los acontecimientos de 1994, la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la república, Luis Donaldo Colosio Murrieta, facilitaron la realización de la reforma electoral de 1994.

Salinas intentó recuperar la legitimidad cuestionada a su mandato, y en cierta medida lo logró merced a los programas asistenciales y al menos en parte, a la creación del IFE y el TRIFE, sin embargo el hecho de combatir al PRD, no reconociendo sus triunfos y, en muchas ocasiones, reprimiendo a sus militantes, le restó credibilidad a su mandato. Asimismo, los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu generaron la sensación en la sociedad de una profunda descomposición dentro de la clase política gobernante, que de pronto pareció retrotraer al país a la década de los años veinte, donde las disputas por el poder invariablemente pasaban por el expediente de las armas.

La creación del IFE resultó de gran importancia pero su ciudadanización total quedaría como un faltante a cubrir. El Estado no se apartó cabalmente de la organización de los procesos electorales, y la democracia pareció tener un carácter selectivo, al convalidar sólo los avances del PAN, con quien estableció una especie de cogobierno.

La reforma al artículo 27 constitucional contribuyó en gran medida a mermar la legitimidad revolucionaria del priísmo, pues se había trastocado una de las principales conquistas e ideales del movimiento de 1910. La posesión de la tierra por unos cuantos individuos fue motivo principal del estallido revolucionario, y la reforma salinista abrió la posibilidad de volver a una situación similar, al plantear la libre

compra venta de la tierra. Se pasó de una lógica de propiedad social, a una lógica de mercado. La tierra era una mercancía más.

3.4.5 Zedillo y la reforma electoral “definitiva”

Luego de que en 1988 el candidato del PRI, apenas pudo conseguir el 51% del total de la votación y, en términos generales, el partido gobernante sufrió importantes reveses en varias ciudades del país, para las elecciones de 1991, como ya se mencionó, el mismo PRI registró una notoria recuperación. Programas como Solidaridad, destinado a atender las necesidades más urgentes de los grupos sociales más desfavorecidos, incidieron favorablemente en tal recuperación. El régimen parecía haber recuperado un margen importante de legitimidad a los ojos de los electores, que tres años antes lo habían castigado.

No obstante lo anterior, los problemas políticos registrados en 1984 habrían de sacudir el clima de aceptación que se había alcanzado. El primero de enero de ese año, fecha de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, apareció en el estado sureño de Chiapas, una guerrilla que declaró la guerra al gobierno federal, en contra del TLC, y reivindicó los derechos de los pueblos indios de la nación mexicana. En marzo de ese mismo año fue asesinado el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y en un clima de descomposición política, algunos meses más tarde, fue asesinado también el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu.

En las elecciones de 1994, el candidato del PRI, Ernesto Zedillo, obtuvo más de 17 millones de votos, que le representó un holgado triunfo sobre sus dos principales contendientes, Diego Fernández de Cevallos del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas del PRD.

Al parecer mucho del voto por el PRI, estuvo influido por el clima de violencia registrado en ese año. Al grado que se llegó a hablar del voto del miedo. Lo que sí es cierto, es que las elecciones, como el mismo candidato ganador reconocería, tiempo después, aunque legales no fueron equitativas.

Ya en funciones, el nuevo presidente de la república, propuso al país una reforma electoral que el mismo definió como “definitiva” (Pérez Correa, 2006: 35). Luego de dos años de negociaciones, en 1996, se acordó la reforma que entre otras cosas implicaría la total ciudadanización de los órganos electorales, así como su

separación del gobierno. Este último quedó excluido de la organización de las elecciones.

De acuerdo con esta reforma, el máximo órgano del IFE, su Consejo General, se integraría de la siguiente manera: un consejero presidente y ocho consejeros electorales, con el concurso sin derecho a voto de los consejeros-- del poder legislativo, de los representantes de los partidos y de un secretario ejecutivo. La reforma señaló que tanto el consejero presidente como los consejeros electorales serían electos por el voto de las dos terceras partes de la cámara de diputados, y durarían siete años en su encargo.

Respecto del TRIFE la reforma señalaba que sus resoluciones serían definitivas e inatacables. Estableciendo que a la Sala Superior del Tribunal correspondería la declaración de validez de la elección presidencial.

La reforma de 1996 también estableció el acceso de los partidos a los medios de comunicación a efecto de hacer más equitativa la competencia electoral, así como la facultad del IFE de fijar los topes a los gastos de las campañas. "A mediados de 1996, después de un proceso extremadamente complicado de negociación política, todos los partidos y el gobierno llegaron al fin a un acuerdo sobre una reforma electoral radical (Ortíz Pinchetti, 1998: 142).

Esta reforma, que obtuvo el consenso de todos los partidos, rigió en las elecciones del 2000, que habrían de resultar históricas, así como en las elecciones intermedias de 2003 sin que existiera mayor problema en cuanto a su aplicación.

Las elecciones del 2000 concitaron el interés y la participación entusiasta de miles de mexicanos que mediante su movilización en torno del candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox. Se habló mucho del papel que jugaron los medios en el triunfo del candidato panista, así como de otras cuestiones como financiamientos ilegales, pero es claro que la amplia ventaja que obtuvo Vicente Fox, acalló cualquier duda acerca de la legitimidad de su triunfo.

Las elecciones del 2000 parecieron confirmar la pertinencia, solidez y aceptación de las instituciones electorales creadas durante los años pasados. El IFE había mostrado su eficacia y transparencia en la conducción del proceso electoral. Las votaciones habían sido concurrencias, y la incipiente democracia en México parecía gozar de alta legitimidad.

Vicente Fox inició su gobierno con altos márgenes de aceptación, grandes expectativas despertó su administración entre diferentes grupos sociales. Sin

embargo, a mediados de sexenio, luego de que muchas de esas expectativas resultaron frustradas, las elecciones intermedias registraron un alto abstencionismo. Al parecer, se había esperado mucho más de lo que efectivamente pudo aportar el gobierno foxista.

Asimismo, en el transcurso del gobierno de Fox, tuvo lugar el fuerte despegue de la figura de López Obrador como aspirante a la presidencia de la república en el año 2006. De una manera espectacular, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, se colocó en niveles muy altos de las preferencias de los posibles votantes para los mencionados comicios presidenciales. Tal situación es evidente que causara gran preocupación entre las elites del poder político y económico en México, que no veían con agrado el discurso de López Obrador al que calificaron de populista.

Fue evidente el intento del gobierno de Vicente Fox de eliminar políticamente al personaje tabasqueño. La difusión de los *video escándalos*, donde se exhibió la corrupción de varios de los personajes del PRD, así como el episodio del desafuero de López Obrador, por un supuesto desacato a una resolución del poder judicial, mostraron la colusión de intereses económicos y políticos que decidieron impedir la llegada al poder del mismo personaje. Este suceso representó un gran daño a la legitimidad de la democracia mexicana, pues pareció mostrar que, contrariamente a lo que supone el ideal democrático, la democracia en México no estaba abierta a todas las manifestaciones políticas (Espinoza, 2007).

3.5 Las elecciones del 2006 y el conflicto con la oposición de izquierda. La más reciente reforma electoral

Las elecciones de 2006 resultaron las más cerradas en la historia reciente de México, entre el candidato del PAN, Felipe Calderón y el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

Dichas elecciones resultaron, también, las más disputadas y ríspidas que se recuerden en tiempos recientes. Los ataques entre los candidatos, partidos, e, incluso, otras organizaciones sociales como por ejemplo la COPARMEX, alcanzaron niveles que parecieran ir más allá de lo legalmente permitido. La figura de López Obrador fue demonizada, al grado de ser presentarlo como un *peligro para México*.

Una campaña electoral llena de cuestionamientos, descalificaciones e imputaciones que poco margen dejaron a las propuestas de gobierno de los

diferentes candidatos. El Instituto Federal Electoral se mostró impotente para actuar de manera rápida y efectiva frente a los evidentes desbordamientos de los marcos legales de parte de los participantes. El Tribunal Federal Electoral, emitió un fallo a favor del candidato Felipe Calderón, mucho después de realizada la elección, reconociendo que la intervención en la misma del entonces presidente, Vicente Fox, había puesto en peligro el proceso electoral, pero que no la estimaba determinante en el resultado final de la elección.

El candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, se dijo víctima de un fraude electoral y encabezó una protesta social de gran envergadura, que más allá del sustento real de sus demandas, mantuvo en vilo la estabilidad política del país.

Finalmente, las elecciones, la actuación del IFE, del TRIFE y, en general, todo el proceso electoral quedaron bajo sospecha de una parte importante de la población, que no aceptaron como válido en triunfo electoral de Felipe Calderón. La sociedad mexicana, por su parte, resultó profundamente fracturada entre bandos con diferente orientación política.

Como señala Lorenzo Meyer, queda a los interesados presentar las pruebas fehacientes del fraude electoral del que se dicen afectados. Sin embargo, es evidente el menoscabo que sufrió la legitimidad de la reciente democracia electoral mexicana a raíz de las elecciones del 2006. Mucho de lo avanzado en materia electoral en el año 2000 y aún antes se perdió, por lo menos para un sector numeroso de la sociedad mexicana.

3.5.1 La reforma electoral de 2007

Ya en el gobierno de Felipe Calderón se realizó otra reforma electoral que, al menos en parte, buscó responder a los cuestionamientos y conflictos habidos en la polémica elección del 2006. Dicha reforma establece, entre otras, las siguientes disposiciones: derecho de réplica como garantía constitucional, recortes presupuestarios a los partidos políticos, así como a los dineros destinados a las campañas electorales; regulación del acceso de los partidos políticos a los medios electrónicos de comunicación; prohibición de contratación de tiempos en medios electrónicos; limitación a la intervención de terceros en las contiendas electorales; prohibición de la utilización de recursos públicos para la promoción personal de gobernantes y funcionarios; regulación de precampañas y acotamiento temporal de las campañas; nueva conformación e incremento de facultades del IFE.

En este apartado me permito exponer con detalle cada uno de los puntos arriba citados con base en el reformado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE):

a) Reducción del financiamiento para las campañas políticas. El financiamiento público para las campañas electorales para los años en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales será del treinta por ciento del financiamiento público destinado a cada partido para sus actividades ordinarias de ese mismo año.

Para las elecciones de 2009 los partidos políticos recibieron 800 millones de pesos, en lugar de 2 mil seiscientos setenta millones de pesos que hubiesen recibido, de no realizarse la reforma electoral en comento.

b) Distribución y contratación de espacios en los medios. La reforma asigna al IFE la responsabilidad de conocer y aprobar las pautas de transmisión correspondientes a programas y mensajes de los partidos políticos. Corresponde al IFE administrar los tiempos del Estado en radio y televisión en la entidad en la que se celebren elecciones. Cuando no se esté en período de campaña o precampaña electoral, el IFE podrá disponer de hasta el 12 por ciento del tiempo total a disposición del Estado en radio y televisión. De ese tiempo el IFE distribuirá el 50% en forma igualitaria entre todos los partidos políticos, y el otro 50% lo podrá utilizar para sus propios fines, o de otras autoridades electorales federales y estatales. El IFE posee la facultad de sancionar las infracciones a sus mandatos, incluso con la cancelación inmediata de las transmisiones de radio y televisión.

La reforma electoral de 2007 contempla la formulación de sugerencias a los noticiarios para la difusión de pre campañas y campañas políticas, que atiendan al propósito crear un marco de competencia electoral transparente y equitativa; que no acuda al expediente de la descalificación, ni propicie la discordia entre los actores políticos y la sociedad.

c) Prohibición de contratación de espacios mediáticos. Se elevó a rango constitucional tal prohibición, que a la letra dice “ninguna otra persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de los partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.

d) *Regulación de precampañas.* De acuerdo con lo dispuesto por la reforma las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes del tiempo que duren las propias campañas, además de establecer límites a las erogaciones de los precandidatos. Asimismo se señala que los partidos políticos en conjunto podrán disponer de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión.

e) *Derecho de réplica.* En el artículo sexto constitucional se concede a la persona física o moral que se considere sujeto de difamación el derecho de presentar su propia versión sobre los hechos o la situación en la que se le involucre, en el mismo espacio del medio en que se haya dado a conocer la información sobre su persona. Es necesario señalar que la misma reforma señala que si el medio o la persona que difunde la supuesta información difamatoria sobre alguna persona, identifica la fuente de su información, por ese sólo hecho dejara de incurrir en un delito de carácter penal.

f) *Prohibición de campañas negativas.* En el artículo 4 apartado C, se establece lo siguiente, “en la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”.

g) *Prohibición a la propaganda gubernamental en tiempo de campaña.* Los contenidos de la reforma en este aspecto a la letra dice, “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del distrito federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público”. La anterior disposición contempla las salvedades para el caso de información electoral de las propias autoridades encargadas en la materia, de aquella correspondiente a servicios educativos y de salud, y la relativa a acciones de protección civil. Tal información no podrá contar elemento alguno que implique la promoción personal de funcionario público alguno.

h) *Distribución de recursos públicos.* En este punto, la reforma establece que las aportaciones de los simpatizantes no podrán rebasar el 10 % del tope de los gastos que se determine para las campañas políticas.

De esta breve reseña de las principales reformas electorales en México, se puede ver como el Estado mexicano ha tenido que abrir progresivamente, el acceso a la disputa por el poder a través de la vía electoral, no como una concesión graciosa sino derivado de un conjunto de factores, que en su momento han presionado sobre las estructuras estatales.

Movimientos sociales, sindicales, crisis económicas, que han planteado al Estado mexicano necesidades imperiosas de legitimidad, sobre todo a partir de los años ochenta en que su tradicional forma de legitimidad, el asistencialismo social, se tornó difícil a causa de las crisis económicas que restringieron severamente los recursos estatales para propósitos de clientelismo político.

La vía político electoral ha sido impuesta como una nueva forma de legitimización del poder, a pesar de los diversos cuestionamientos que ha sufrido. Instituciones y leyes siguen operando.

CAPÍTULO IV. LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA. CULTURA POLÍTICA EN MEXICO 2000-2006, AVANCES Y CIUDADANÍA

Durante muchos años el régimen político en México pudo ser calificado de autoritario, se cuenta ahora con una serie de avances que si bien no permiten hablar de una democracia plena, no pueden tampoco ser olvidados, sobre todo si se tiene en cuenta el pasado político no muy lejano de nuestro país. Creemos que, en términos de Robert Dahl, el proceso de democratización en México ha tenido importantes avances. El acceso al poder en nuestro país empezó a responder a una lógica democrática durante los últimos lustros, más que a los viejos esquemas y mecanismos prevalecientes durante el periodo del nacionalismo revolucionario. Como señala Lorenzo Meyer:

“En los inicios del siglo XXI, es posible aceptar que México ya es casi una democracia electoral” (Meyer, 2005:168).

Más o menos, entre 1994 y el 2006, los resultados de los comicios electorales no fueron seriamente cuestionados. Se empezó a entrar en una especie de normalidad democrática, que se cuestionó desde el intento de desafuero de López Obrador y la impugnación del triunfo de Felipe Calderón por parte del mismo candidato opositor. En el 2000 se alcanzó el más alto nivel de aceptación de la democracia mexicana, pero que en los siguientes años la misma sufrió una merma en su credibilidad, debido especialmente a los dos sucesos mencionados.

No obstante lo anterior, México ha registrado avances en lo democrático que lo colocan en una situación distinta a la de su pasado inmediato. Hoy es posible advertir una realidad más democrática que tiene como fundamento irreversible la pluralidad política de la sociedad mexicana.

La construcción de una nueva institucionalidad electoral, así como el profundo desgaste o desaparición de estructuras autoritarias del pasado, abonan a favor de las posibilidades democráticas que, no obstante, requieren aún de su consolidación, mediante la aparición o desarrollo de una ciudadanía plena y de una cultura política democrática. El presidencialismo que durante tanto tiempo dominó la vida política del país no existe más, al menos como se le conoció en épocas pasadas. Los poderes meta constitucionales de los que disfrutó e hizo uso de manera discrecional

y arbitraria el presidente en turno, han sido prácticamente cancelados por la nueva realidad política. Jorge Carpizo dice al respecto:

“Hace más de tres décadas, en el presidencialismo mexicano, apunté que una de las principales características autoritarias del sistema político residía en las facultades metaconstitucionales del presidente de la república... desaparecidas como producto de la transición política que operó en el país a lo largo de los últimos treinta años...” (Carpizo, 2009: 15).

Nos referimos a facultades tales como la de ser jefe de su partido político, que en el pasado fue un partido hegemónico, que le permitió incidir sobre el nombramiento de los más diversos candidatos a representantes populares, teniendo de esa manera un gran control sobre la vida electoral del país. Gobernadores, diputados, senadores, etc., debían contar con la aprobación y respaldo del gran elector, si querían avanzar en sus carreras políticas. El presidente de la República pudo ejercer un control casi sin límites sobre los poderes Legislativo y Judicial, así como de los gobiernos de las entidades federativas.

Hoy es fácilmente advertible un mayor equilibrio de poderes, que es uno de los presupuestos básicos de la democracia. Ya no es tan evidente que el presidente de la república tenga el control absoluto de su partido; existe un mayor juego político al interior del mismo entre los diferentes grupos o facciones que lo componen. Su partido no hegemoniza la vida política nacional, por lo cual el presidente no es ya el gran o único vértice de la transmisión del poder. Cada aspirante puede luchar al interior de su propio partido por la candidatura de su interés.

El poder legislativo y judicial han adquirido un mayor poder y autonomía frente al poder ejecutivo, al cual en no pocas ocasiones han confrontado y limitado, estableciendo una relación inédita entre los tres poderes de la unión. Los años de la alternancia, del 2000 a la fecha, pueden ser vistos como un periodo de disminución del poder presidencial, y un acrecentamiento del poder Legislativo y Judicial.

El partido del gobierno no ha podido tener mayoría dentro de la Cámara de diputados, lo que le ha impedido o dificultado sacar adelante iniciativas de ley planteadas por el Ejecutivo o por su misma bancada, situación que le ha obligado a negociar con otras fuerzas políticas el contenido de tales iniciativas.

Asimismo, el poder del Ejecutivo Federal ha visto disminuido sensiblemente el poder que tenía sobre las diferentes entidades federativas. No fueron pocos los

casos en que durante cada sexenio varios gobernadores tuvieron que abandonar sus cargos por presiones del centro.

El partido oficial, que con el apoyo ilegal de recursos públicos, y el apoyo político del gobierno, monopolizó la vida político electoral del país, se encuentra prácticamente extinto. Sólo a nivel regional, sobre todo en algunos estados donde aún gobierna el PRI, se pueden ver reminiscencias de ese pasado autoritario.

Lo que se tiene ahora es un sistema multipartidista, donde tres partidos nacionales se han disputado el poder durante las últimas dos elecciones presidenciales. Existen, además, una serie de pequeños partidos que a través de su poder agregador de votos en contiendas electorales cada vez más cerradas, han podido incursionar en la vida político electoral del país. Lorenzo Meyer señala al respecto:

“En efecto, a los procesos electorales. Que siempre y sin fallar han tenido lugar en nuestro país, desde que terminó la parte más violenta de la Revolución mexicana se les ha añadido la novedad de un sistema real de partidos. En los últimos diez años la oposición y la sociedad han logrado, por fin, dar forma a partidos más o menos fuertes gracias a los cuales la alternativa al PNR-PRM-PRI ha dejado de ser una mera hipótesis para convertirse en realidad” (Meyer, 2005: 168).

Los cargos de elección popular a diferentes niveles, incluyendo las gubernaturas, se distribuyen entre los diferentes partidos a lo largo del país. Los recursos económicos de que disponen los partidos políticos le son asignados por ley. La organización de los comicios se encuentra a cargo de un organismo ciudadano, formalmente independiente del gobierno, el Instituto Federal Electoral, que cuenta con la representación de los diferentes partidos políticos. Existe, también un Tribunal Federal Electoral que puede funcionar como instancia final con capacidad decisoria de los conflictos electorales. Estos dos organismos de por sí representan un avance en la configuración de la democracia en México.

Asimismo, se puede hablar de mayor libertad de expresión, de publicación, de reunión, de asociación. Existen varias salvedades a lo anteriormente dicho, pero en general se puede hablar de una ampliación de las libertades cívicas, sin las cuales la democracia no puede fructificar. Se cuenta con varias publicaciones de carácter crítico e independiente. La radio, en especial, muestra una mayor apertura a la

expresión de las diferentes ideas, aunque la televisión se encuentra casi tan cerrada como en años anteriores.

La democracia mexicana, lo alcanzado hasta ahora, puede ser visto como el resultado de la lucha de varias generaciones de mexicanos, que a través de diferentes vías han luchado a lo largo de muchos años por superar un sistema autoritario y despótico que canceló casi todas las expresiones democráticas. Creemos que en esto radica la legitimidad alcanzada hasta ahora por ella, sin negar que falte aún mucho por hacer en aras de su consolidación.

En este punto queremos preguntarnos si a los avances observados en el campo de lo institucional electoral, ha correspondido el desarrollo de una cultura política democrática, que evidencie el surgimiento de actitudes o comportamientos ciudadanos, entre los diferentes sectores sociales de la sociedad mexicana. ¿Se han desarrollado nuevas pautas de comportamiento, percepciones, o valoraciones entre los mexicanos acerca del poder, de la política, de los procesos electorales? ¿O, por el contrario, a pesar de los avances político electorales subsiste una cultura política anclada en los mejores años del autoritarismo revolucionario? ¿Qué tipo de cultura política tenemos? ¿Qué tipo de ciudadanía tenemos después de varios años de iniciada la transición política en México? ¿Los cambios en la cultura política y ciudadana llevaron a los cambios en lo político electoral? ¿Los cambios en lo formal electoral llevaron a un cambio en la cultura política? ¿Qué tan amplio fue ese cambio en la cultura política?

4.1 La cultura política en la larga transición política en México

De acuerdo con Roberto Gutiérrez, el balance que se puede hacer de la cultura política en México, así como de comportamientos de tipo ciudadano que se pueden advertir en nuestra realidad, luego del prolongado periodo de transición política, que sucintamente hemos referido, es de claroscuros. Pues, aunque por una parte se pueden identificar ciertos avances, por otro lado, lo que se tiene es la permanencia de inercias que se pudiera pensar estarían un tanto rebasadas. Basándose en el estudio, "Alimenta la alternancia confianza en instituciones", publicado por el diario *Reforma* el 10 de Septiembre del 2000, así como en los resultados de la Encuesta Mundial de Valores para el caso de México, publicados en el mismo diario *Reforma* entre el 9 y el 13 de Mayo del 2000, el sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana, señala lo siguiente.

Roberto Gutiérrez menciona que el 66% de los mexicanos consideró vivir ya en un país democrático, mientras que el 57% consideraba a la democracia un régimen político preferible a cualquier otro. Señala, que en esas fechas tanto el IFE como el TRIFE, gozaban de una alta credibilidad. Gutiérrez, plantea que la alternancia partidista lograda en la conducción de la presidencia de la república en el 2000, impactó favorablemente en la percepción satisfactoria de los mexicanos respecto de la democracia. (Gutiérrez, 2001: 265-282)

En sentido contrario a lo anteriormente expuesto, en el mismo estudio se señalaba que la confianza de los ciudadanos mexicanos hacia su gobierno, era de apenas el 53%, hacia los partidos políticos del 40%, hacia los diputados del 38%, y hacia el poder judicial también de sólo el 38%. Roberto Gutiérrez señalaba que de acuerdo con la Encuesta mundial de valores el 75% por ciento de los mexicanos mostraba poco o ningún interés en la política, a despecho de las onerosas y prolongadas campañas políticas. Lo cual es preocupante, pues la diferencia entre la cultura súbdito y ciudadana está dada básicamente por su capacidad de involucramiento en los asuntos públicos.

En la misma encuesta se advierte una baja participación de los mexicanos en algún tipo de organización de carácter político o social. De los mexicanos encuestados, solamente el 4% dijo pertenecer a un partido político, 6% a un sindicato, 8% a organizaciones artísticas y culturales, 9% a organizaciones deportivas y recreativas y 23% a organizaciones religiosas. La capacidad de movilización y auto organización de los mexicanos, señala Gutiérrez, sigue siendo muy precaria, a pesar de la existencia de ciertos grupos sociales con una alta capacidad de movilización, que pudiera hacer creer otra cosa. Este es un gran déficit de la transición mexicana, pues, la institucionalidad político electoral alcanzada hasta ahora, no tiene un correlato en una ciudadanía participativa y corresponsable que le dé sustento y sea capaz, al mismo tiempo, de limitar al poder.

La escasa participación en los diferentes ámbitos sociales, abona en contra de la política como una actividad responsable y eficaz ante las diversas demandas sociales. La política no es un componente que haya incorporado a su vida el mexicano promedio, pues a pesar de que se le aparece como un fenómeno cotidiano, sigue siendo para él algo muy distante, difícil de entender, y corrupto, lo cual favorece el comportamiento discrecional de las elites gobernantes.

Aunado a lo anterior, agrega Gutiérrez, existe entre los mexicanos una baja valoración por la legalidad, además de que el recurso de la violencia no ha sido totalmente alejado de la práctica política.

Como correlato a la falta de su sentido de participación e involucramiento activo en los asuntos políticos, el mexicano sigue siendo proclive a los liderazgos de tipo caudillista. Asimismo, Roberto Gutiérrez señala que de acuerdo con la Encuesta mundial de valores, el 44% de los mexicanos piensa que sería bueno o muy bueno contar con un líder fuerte, mientras que el 53% de los encuestados opinó que las decisiones públicas importantes debían ser tomadas por tecnócratas. El 28% dijo preferir un gobierno de corte militar.

Lo anterior representa un peligro siempre latente de que caudillismos carismáticos tengan la tentación de hacer a un lado las instituciones, dirigiéndose directamente al “pueblo” como fuente de legitimidad de sus acciones, o que se pueda hacer un uso artificioso de figuras democráticas como el referéndum, el plebiscito o la iniciativa popular.

En opinión de Roberto Gutiérrez, la cultura política reseñada, característica de la población tomada en términos generales, tiene su correlato en los comportamientos y actitudes que frente al poder exhiben las elites de los partidos políticos en el país. La misma se caracteriza por una gran resistencia a la negociación, y al logro de acuerdos. Entendiéndose a la política como un juego de suma cero, es decir como aquel en el que sólo puede haber ganadores absolutos, y perdedores absolutos. Existe también, una escasa disposición al diálogo y a la tolerancia.

Entre las dirigencias partidarias, existe la percepción de la democracia como un gran acontecimiento fundacional, producto de un gran parte aguas histórico, más que como el resultado de un largo proceso de reformas. Tal situación lleva a descalificar los avances logrados, o que pudieran lograrse en torno a la cuestión democrática entre los actores políticos con capacidad de tomar decisiones.

La negación de la legitimidad del adversario, así como su descalificación total, es otro de los rasgos presente en las elites partidistas, el cual lleva a postular al propio proyecto político como el único posible para la nación entera. La búsqueda y preservación de clientelas políticas, es otra de las constantes de todos los partidos políticos. El voto es visto como un producto que hay que conquistar y mantener, en lucha permanente frente a los adversarios.

La sospecha siempre presente de que existen dobles intenciones en el discurso opositor, trae consigo la imposibilidad de reconocer los avances logrados en materia jurídica. Se llega a una negociación forzada, que ve preferentemente los intereses particulares, y se realiza a espaldas de la opinión pública. Es muy difícil el logro de una negociación abierta, productiva; fincada en la corresponsabilidad.

Los medios de comunicación masiva, en opinión de Roberto Gutiérrez, también tienen una parte importante en la conformación de las actitudes y expectativas de la población frente a la política. Pues, la televisión ha jugado un papel ambivalente con respecto al fenómeno político, en el que por una parte ha contribuido a acercarlo a la población y por otra, ha fomentado la visión frívola y de espectáculo sobre el mismo. La necesaria rentabilidad de este medio, se ha impuesto al análisis serio que debería, en principio, caracterizar el análisis de las cuestiones políticas. En este sentido, la televisión privilegia la estridencia y el escándalo político, por encima de su responsabilidad social.

4.2 Legitimidad de la democracia, indicadores desde la cultura política

A partir del análisis de las Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) de la Secretaría de Gobernación para los años 2001, 2003, 2005 y 2008 proponemos un indicador de la legitimidad democrática en México, compuesto por tres indicadores (adhesión democrática, confianza, participación) con el cual pretendemos operacionalizar el concepto de legitimidad, entendida como nivel o grado de aceptación de la democracia por parte de los ciudadanos. Se pretende hacer un ejercicio de objetivación de la legitimidad democrática en México; hacerla empíricamente demostrable.

Así pues, propongo las categorías de apoyo democrático, confianza – dimensiones evaluativas resultado tanto de aspectos cognitivos como de afectivos, que representan lo inmediato y lo cotidiano en la vida de los ciudadanos- y la disposición a la participación –a su vez resultado en buena medida de las evaluaciones en confianza y apoyo a la democracia-, como los rasgos que cruzan las culturas políticas de los ciudadanos mexicanos (tres categorías definen el déficit democrático general que priva en la relación entre cambios institucionales y culturales), y que le dan sentido a la legitimidad.

Los indicadores se desagregan de la siguiente manera:

Cuadro 1. Legitimidad democrática en tres indicadores

Indicadores	Índices
Adhesión democrática	<ul style="list-style-type: none"> - Interés en la política. - Información sobre política - Aceptación democracia - Evaluación de la democracia. - Satisfacción con la democracia.
Confianza	<ul style="list-style-type: none"> - Confianza ciudadana - Confianza interpersonal. - confianza en instituciones y actores políticos y sociales.
Participación	<ul style="list-style-type: none"> - Participación electoral. - participación social. - Participación política.

Fuente. Elaboración propia.

El primer indicador, adhesión democrática, busca inquirir sobre aspectos básicos para el comportamiento democrático tales como el interés y la información sobre política. Se parte de la creencia que estos dos elementos son premisas indispensables para un involucramiento de los individuos en los asuntos concernientes a la democracia. Se inquiriere, también, sobre la idea que sobre el régimen democrático tienen los mexicanos en términos abstractos, como un ideal, como una forma de gobierno; así como acerca de la evaluación que sobre la democracia se tiene.

El segundo inquiriere sobre la confianza que demuestran los ciudadanos con respecto a sus capacidades para influir sobre la política, así como sobre la confianza interpersonal que se manifiesta entre las personas, en tanto elemento fundamental para la existencia del tejido social. Se considera que la relación entre estos niveles es indispensable para la participación ciudadana en los procesos democráticos, así como la idea que se tenga en las propias instituciones públicas.

Finalmente, la participación ciudadana en sus distintas versiones viene a ser un indicador básico para la existencia de una democracia. La participación implica un conocimiento, una aceptación, así sea mínima, de los presupuestos democráticos. Se parte de la idea que la participación implica un compromiso ciudadano con el régimen de gobierno democrático.

A continuación se analizan cada uno de los tres indicadores señalados con el apoyo de los cuadros y gráficos elaborados a partir de la ENCUP correspondientes a los años señalados.

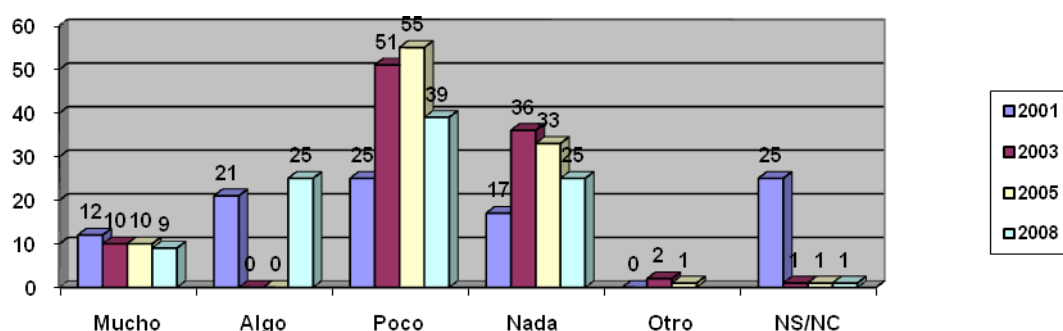
El interés en la política es premisa indispensable para el involucramiento del individuo en los asuntos públicos. Como señala José Antonio Crespo:

“El interés en la vida política, local o nacional, suele considerarse como una palanca básica para la participación eficaz” (Crespo, 2007: 249).

Dicho interés puede estar fundado en diferentes motivos y despertarse a partir de situaciones diversas. Existen realidades propiciatorias del interés ciudadano en la política, y realidades que, por el contrario, lo desalientan. En el primer caso estamos hablando de sociedades con mayor transparencia, apertura y tolerancia que estiman valiosa y necesaria la participación ciudadana frente al poder del Estado. El involucramiento ciudadano en la vida pública se constituye en un contrapeso del poder del Estado y del gobierno, y favorece la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos. Lo anterior a partir del interés que pueda existir entre los ciudadanos en torno de la política y sus implicaciones en los asuntos de carácter público y privado

Otras realidades, por el contrario, desalientan el interés ciudadano en asuntos públicos. Son regímenes autoritarios que no consideran pertinente, ni necesaria la participación social en los asuntos del Estado. La política es asunto de grupos elitistas, que se manejan de modo discrecional, sin la concurrencia, ni la vigilancia de la ciudadanía. La participación ciudadana incluso puede ser reprimida en determinadas circunstancias.

Entonces, el interés ciudadano en la política no es algo fortuito responde a circunstancias concretas que lo despiertan o lo inhiben. El interés en la política puede ser un indicador de una cultura política y una condición ciudadana participativa que legitime el régimen político (gráfico 1).

Gráfico 1. En general ¿qué tan interesado está usted en la política?

Fuente: elaboración propia con base en las ENCUP 2001, 2003, 2005, 2008.

Nota: En 2001 la pregunta fue *¿Qué tan interesado está usted en los asuntos públicos?*, en los ejercicios 2003 y 2005 la pregunta fue *En general ¿qué tan interesado está usted en la política?*, mientras que en el 2008 fue *¿Usted diría que es una persona que se interesa mucho, algo, poco o nada en la política?* Para efectos de análisis comparativo equiparamos las preguntas sobre interés en la política.

Como podemos ver en el gráfico 1, la gran mayoría de los encuestados se dijo poco o nada interesado en la política. Mientras que una pequeña proporción, ubicada en el rango de entre 10 y 12% se dijo muy interesada. Esta situación parece ser una reminiscencia del sistema autoritario prevaleciente en México durante muchas décadas y que, en ciertos aspectos y circunstancias, sigue aún vigente.

Los mexicanos no muestran interés en los asuntos políticos porque les parece un tema distante, muchas de las veces corrupto, sobre el cual tiene poca o ninguna influencia. Los escándalos políticos de los últimos tiempos, así como las onerosas campañas políticas han contribuido a acentuar el desinterés de las personas en la política.

En relación a los asuntos públicos Alejandro Guerrero dice que entre los mexicanos existe una percepción que los ubica "...como asuntos ajenos, lejanos, y colmados de intereses difíciles de entender" (Guerrero, 2004: 142).

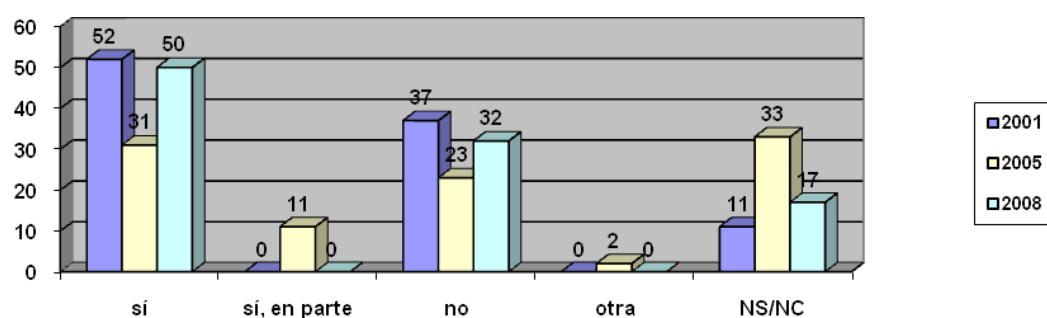
Por otra parte, la legitimidad de un régimen descansa en buena medida en la percepción que sobre el mismo tengan aquellos individuos sobre los cuales se ejerce dominio. Esta condición es importante para todo poder constituido, pero lo es más para la democracia por cuanto implica el ejercicio de un dominio aceptado, producto de un ejercicio en el que se expresa la soberanía popular a través del voto.

La percepción que se tenga sobre un régimen es importante para la estabilidad y el mantenimiento del mismo. Para su viabilidad.

En México la creencia de sus ciudadanos en torno a su democracia es de suma importancia en la medida en que la implantación de la misma tiene poco tiempo en nuestro país y se logró después de múltiples esfuerzos de diferentes actores sociales a lo largo de muchas décadas, sobre todo del siglo pasado. Resulta muy importante la idea que sobre la condición democrática tengan los mexicanos, pues de ello depende en buena medida su consolidación o retroceso.

En sus primeros lustros de existencia la democracia ha enfrentado múltiples problemas, que lógicamente han impactado en el ánimo de las personas. Muchas expectativas se han visto frustradas, mientras, al mismo tiempo, se han registrado innegables avances en materia de libertad de expresión o de pluralismo político, por mencionar sólo dos aspectos. En todo caso es importante saber ¿qué piensan los mexicanos en torno a su democracia? (gráfico 2).

Gráfico 2. En su opinión, ¿México vive o no en democracia?



Fuente: elaboración propia con base en las ENCUP 2001, 2005, 2008.

Nota: En 2001 la pregunta fue *¿cree usted que México vive en una democracia?*, en los ejercicios 2003 no apareció y en 2005 la pregunta fue *En su opinión, ¿México vive o no en democracia?*, mientras que en el 2008 fue *¿Cree usted que México vive o no en una democracia?* Para efectos de análisis comparativo equiparamos las preguntas sobre democracia.

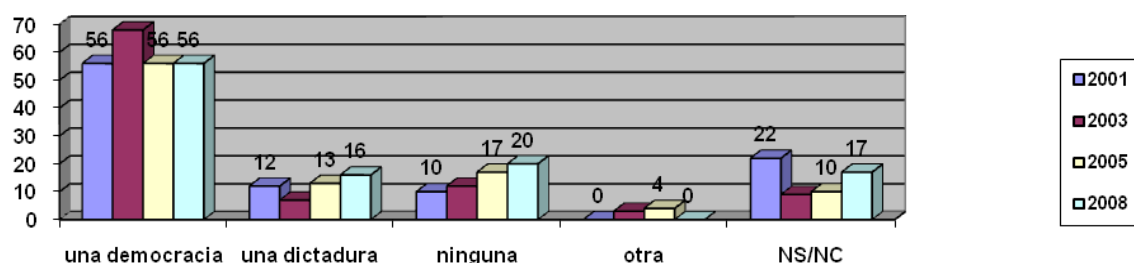
De acuerdo con las ENCUP correspondientes a los años de 2001, 2005 y 2008 apenas un poco más del 50% de los mexicanos consideró vivir en democracia. Mientras que tal porcentaje se ubica en sólo el 31% en 2005. Como se puede apreciar, el apoyo a la democracia, a su legitimidad, medido a través de su creencia

en la misma, resulta por lo menos insuficiente. Estamos hablando de que uno de cada dos mexicanos no considera que se haya logrado implantar un régimen democrático en México durante los últimos años, a pesar de los esfuerzos realizados en tal sentido. Incluso los porcentajes de los que descartan de manera tajante la existencia de la democracia en nuestro país, no deja de ser significativo; el 37% en 2001 y el 32% en 2008.

La percepción de los mexicanos en torno a la existencia de una democracia en su realidad no es la deseable. Muchos factores pueden ser ofrecidos como explicación. Mientras persista una creencia desfavorable sobre la existencia de la democracia en nuestro país, la consolidación de la misma estará pendiente.

Creemos que las respuestas a las interrogantes planteadas en este apartado son muy importantes en la medida en que reflejan el apoyo de la ciudadanía al régimen democrático, más allá de las realidades específicas que le ha tocado vivir en su país. En este sentido el mayor porcentaje de respuestas obtenidas en las encuestas resulta favorable para la democracia, en la medida en que se puede observar una preferencia por la misma frente a otras formas de gobierno; inclusive frente a una dictadura que hipotéticamente pudiera asegurar el crecimiento económico (gráfico 3). En 2005 y 2008 el apoyo democrático se ubicó en 56%, mientras que en 2003 fue ligeramente mayor.

Gráfico 3. ¿Qué cree usted que es mejor para el país?



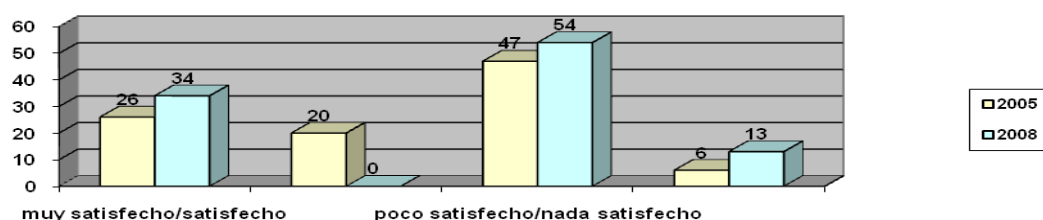
Fuente: elaboración propia con base en las ENCUP 2001, 2003, 2005, 2008.

Nota: En 2001 la pregunta fue *¿Qué tan interesado está usted en los asuntos públicos?*, en los ejercicios 2003 y 2005 la pregunta fue *¿Qué cree usted que es mejor? una democracia aunque ésta no asegure el avance económico del país o una dictadura que sí asegure el avance de la economía*, mientras que en el 2005 fue *¿Qué cree usted que es mejor para el país?* Y para el 2008 la pregunta fue una afirmación: *la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno*. Para efectos de análisis comparativo equiparamos las preguntas sobre apoyo democrático.

Lorenzo Meyer dice al respecto, “...las encuestas de opinión muestran que, en principio, en México el sistema democrático tiene un respaldo mayoritario pero no contundente “(Meyer, 2005:37).

Una de las condiciones para la permanencia de las democracias y el logro de su legitimidad, es precisamente que la mayoría de los miembros de una comunidad que viven en tal régimen, consideren que a pesar de sus limitaciones y fallas posibles esa es la mejor forma de gobierno con que se puede contar en ese momento histórico. El convencimiento acerca de sus ventajas puede ser vista como el inicio de una cultura política de corte democrático (gráfico 4).

Gráfico 4. ¿Qué tan satisfecho está usted con la democracia que tenemos hoy en México?



Fuente: elaboración propia con base en las ENCUP 2001, 2003, 2005, 2008.

Contrariamente a los resultados del anterior apartado, dónde se expresa un apoyo a la democracia en términos ideales por así decirlo, en este punto podemos ver como cuando se trata de evaluar la democracia en su aplicación concreta en la realidad mexicana, la adhesión a la misma disminuye sensiblemente. Se puede ver como los mayores porcentajes se ubican en las respuestas poco satisfechos y nada satisfechos, 47% para 2005 y 54% para 2008, mientras que los que se dijeron muy satisfechos y satisfechos apenas llegaron al 26% y 34%, respectivamente.

Los resultados de la encuesta muestran que ciudadanos consideran que la democracia mexicana tiene un funcionamiento deficiente. Lo anterior puede ser visto como un reflejo de las insuficiencias y defectos que han acompañado al proceso de instauración de la democracia en nuestro país, así como de un desencanto con la democracia, por cuanto generó grandes expectativas que no han encontrado una respuesta positiva en la realidad.

Lo anterior obliga a una revisión del proceso de instauración democrática en nuestro país, especialmente de aquellos actores políticos con capacidad de tomar

decisiones trascendentes para la vida pública del país, como pueden ser el gobierno, los partidos políticos y el Congreso de la Unión.

Se deben analizar las razones del desafecho ciudadano a su propia democracia, así como su apego simultáneo al régimen democrático (cuadro 2).

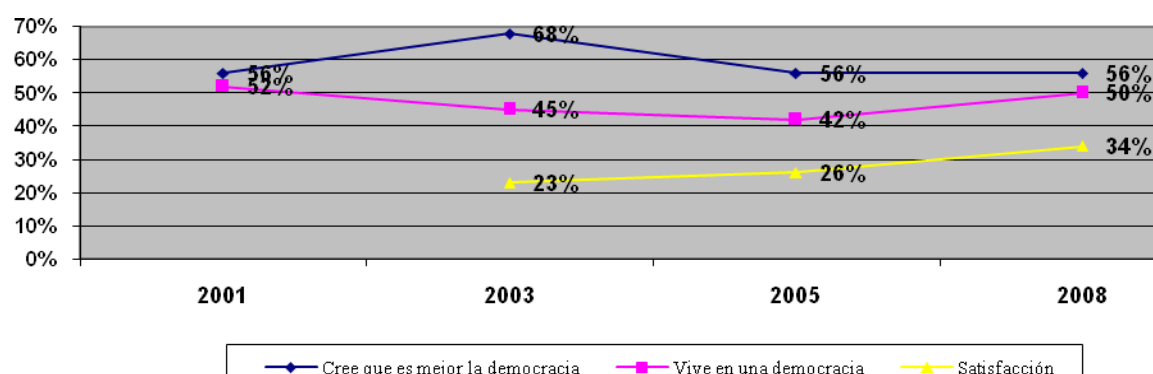
Cuadro 2. El apoyo a la democracia en tres dimensiones

DEMOCRACIA			
ENCUP	Cree que es mejor la democracia para el país	Vive en una democracia (sí/ sí, en parte)	Satisfacción (muy satisfecho/satisfecho)
2001	56%	52%	¿
2003	68%	45%	23%
2005	56%	42%	26%.
2008	56%	50%	34%

Fuente: elaboración propia con base en la ENCUP 2001, 2003, 2005 y 2008.

En este cuadro se puede apreciar como el apoyo al régimen democrático se ubica en porcentajes entre el 56% y el 68% para los años considerados (2001 y 2003), mientras que cuando se pregunta si se considera vivir en una democracia los porcentajes descienden hasta entre el 42% y el 52%, respectivamente, para los mismos años. El descenso es aún más pronunciado cuando se pregunta sobre el grado de satisfacción con la democracia, pues el mismo sólo alcanza el 23% para el 2003 y el 26% para 2005 (gráfico 5)

Gráfico 5. El apoyo a la democracia en tres dimensiones

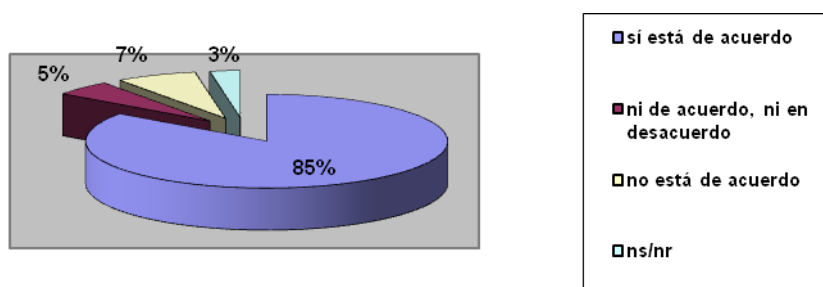


Fuente: elaboración propia con base en la ENCUP 2001, 2003, 2005 y 2008.

Este gráfico permite ilustrar con claridad lo anteriormente expuesto. La línea azul que indica las respuestas por la preferencia democrática se ubican en lo alto. La creencia de vivir en una democracia se ubica por debajo con un menor porcentaje de respuestas afirmativas, y muy por debajo de las dos primeras se encuentra la línea que indica la satisfacción con la democracia existente.

Por otro lado, el tejido social es elemento básico en el funcionamiento de una democracia, por cuanto ésta implica la acción conjunta de los individuos de una sociedad. Si no existe confianza entre los actores sociales, difícilmente se dará una integración social suficiente para el funcionamiento democrático. En este sentido la solidaridad social resulta fundamental para la existencia de una sociedad civil, de una ciudadanía, que reclame y defienda intereses comunes a todos. Se trata de trasponer los límites de lo particular, de sentir como propios los problemas de los demás, de lograr una conciencia social (gráfico 6).

Gráfico 6. Si uno no se cuida a sí mismo la gente se aprovechará

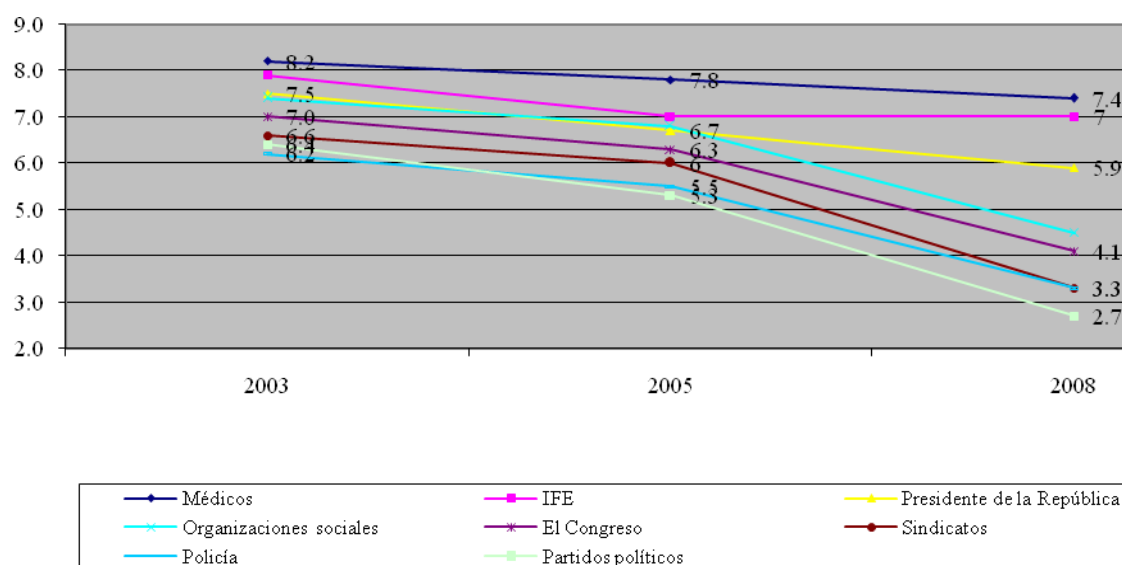


Fuente: elaboración propia con base en la ENCUP 2008.

De acuerdo a los datos recabados en las ENCUP 2008, entre los mexicanos priva un sentimiento muy extendido de desconfianza para con sus semejantes. El 85% del total de los encuestados dijo estar de acuerdo en que si uno no se cuida a sí mismo los demás se aprovecharían. Tal vez en esta respuesta gravite con gran fuerza la precaria situación económica del país, que ha llevado a un acrecentamiento de la competencia entre los individuos, ante la cada vez más notoria escasez de oportunidades. Estaríamos ante un fenómeno que se inicia en el nivel económico y que tiene profundas repercusiones en la vida social y política.

La confianza de los ciudadanos en las instituciones es de primordial importancia, por cuanto es a través de ellas que se lleva a cabo el contacto más directo de los ciudadanos con el Estado y con otros ámbitos sociales como la religión, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales. La confianza en las diversas instituciones es un termómetro que refleja la experiencia real de los ciudadanos ante esas instancias o, por lo menos, la percepción muy generalizada entre la sociedad acerca de los mismos (gráfico 7 y cuadro 3).

Gráfico 7. Confianza en instituciones. En escala de calificación como en la escuela, en donde cero es nada y 10 es mucho, por favor dígame ¿qué tanto confía en...? 2003, 2005.



Fuente: elaboración propia con datos de la ENCUP 2003 - 2005.

Cuadro 3. Confianza en instituciones. En escala de calificación como en la escuela, en donde cero es nada y 10 es mucho, por favor dígame ¿qué tanto confía en...? 2003, 2005.

Confianza en instituciones					
Instituciones	2001 (mucho)	2001 (algo)	2003	2005	2008
Iglesias	55.69%	23.11%	8.1	7.68	7.4
Maestros	42.32%	30.11%	7.8	7.52	6.5
Ejército	---	---	8.1	7.72	7.1
Hospitales	31.99%	31.37%	---	---	---
Médicos	---	---	8.2	7.79	7.4
CNDH	28.5%	29.96%	7.5	6.91	6.1
IFE	28.42%	31.81%	7.9	7.07	7.0
Gobernador o Jefe de gobierno	22.48%	30.45%	---	---	5.6
Presidente de la República	22.27%	29.97%	7.5	6.68	5.9
Medios de comunicación	21.67%	34.37%	7.8	7.40	5.4
Presidente municipal o Delegado	18.83%	27.88%	---	---	46.1
Grandes empresas	16.7%	30.3%	---	---	---
Empresarios	---	---	6.9	6.31	3.7
Agrupaciones de ciudadanos	12.1%	27.12%	---	---	---
Organizaciones sociales	---	---	7.4	6.86	---
Suprema Corte de Justicia	10.18%	25.79%	7.3	6.65	5.4
Sindicatos	9.45%	19.73%	6.6	5.96	3.3
Organizaciones no gubernamentales	9.38%	23.86%	---	6.86	---
Secretarías de Estado	8.7%	24.65%	---	---	---
Policía	6.98%	15.62%	6.2	5.55	32.8
Cámara de Diputados y Senadores (Congreso)	6.04%	15.62%	6.9	6.30	4.1
Partidos Políticos	5.36%	18.81%	6.4	5.36	2.7

Fuente: elaboración propia con datos de la ENCUP 2001, 2003, 2005, 2008.

Del análisis del cuadro anterior resalta de inmediato la muy escasa confianza que se manifiesta para dos instituciones fundamentales de la democracia: las cámaras de Diputados y Senadores y los partidos políticos. Estas instituciones tienen un papel fundamental en la captación y procesamiento de la voluntad popular. Los partidos políticos deben captar el sentir y las necesidades ciudadanas presionando ante los órganos de decisión estatales que deben ofrecer una respuesta a las mismas. Las cámaras deben traducir en leyes los reclamos y demandas de los grupos sociales atendiendo al interés general de la sociedad.

Resultados similares se obtuvieron de la Encuesta Nacional Sobre el Sentir Ciudadano 2009, la cual:

“... pone de manifiesto que una parte significativa de los ciudadanos se siente poco escuchada por los partidos políticos y poco representada por sus diputados...” (Este País, Septiembre 2009: 16).

Como se puede advertir la situación poco ha cambiado, pues:

“No existen mecanismos ni legislación que hagan accesibles los representantes elegidos a sus votantes” (Emmerich, 2009: 104).

Los partidos corren con poca suerte. Dice Emmerich:

“... el descrédito de los partidos ante la ciudadanía, que los ve más preocupados por hacer avanzar sus posiciones, votaciones e ideologías, que por construir una gobernabilidad democrática eficiente (Emmerich, 2009: 61).

El hecho de que estas dos instituciones tengan una muy escasa confianza de la ciudadanía habla indudablemente de un severo déficit de legitimidad de la democracia mexicana. Los mexicanos no creen en dos instituciones básicas para las democracias modernas.

Es de destacar aquí el aceptable nivel de confianza que mantiene el Instituto Federal Electoral, luego de las controversias suscitadas en la elección presidencial del 2006.

Por otro lado instituciones como el ejército, los médicos y el profesorado, gozan de una confianza mucho mayor entre la población mexicana. Es evidente que los mexicanos tienden a descalificar todo aquello que asocian con cuestiones políticas.

La desconfianza en las cámaras y los partidos requiere una revisión de la actuación de estos actores políticos, así como de mecanismos precisos a través de los cuales se les pueda exigir una efectiva rendición de cuentas.

Finalmente, la participación en los asuntos públicos definitivamente es la característica que hace posible el surgimiento de comportamientos ciudadanos con una cultura política de carácter democrático. La participación implica el compromiso asumido a partir de la existencia de una consciencia social. La participación abre la posibilidad a la transformación de un estado de cosas existente. Ahora bien, existen diferentes formas y niveles de participación. Desde aquellas que pueden ser vistas como un tanto pasivas, como la firma de cartas o la petición a una autoridad, hasta aquellas de tipo extremo como la huelga de hambre. Que formas se utilicen, con qué frecuencia, en qué medida, dependerá de las condiciones específicas del régimen político y de la cultura política de los ciudadanos. En México la participación social presenta significativos rezagos de acuerdo con estudios como “Situación de la Democracia en México”. En el documento se señala al respecto:

“Aunque ha aumentado en los últimos quince años, falta mucho para lograr una amplia y activa participación ciudadana en la vida pública. Si bien existen mecanismos legales y organizaciones que posibilitan la participación en casi todos los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales del país, los ciudadanos no los utilizan en demasía (Emmerich y otros, 2009: 95).

Como se puede ver en el cuadro 4, los mexicanos son poco afectos a la participación en los asuntos públicos en cualquiera de sus formas. Para el año de 2003 apenas el 39% de los encuestados dijo organizarse con otras personas afectadas como forma de organización. Sin embargo, para los años de 2001, 2005 y 2008, tal porcentaje se reduce sensiblemente, con 23%, 26% y 22%, respectivamente. Es necesario puntualizar que ésta es la forma de participación más socorrida entre los mexicanos de acuerdo a las encuestas.

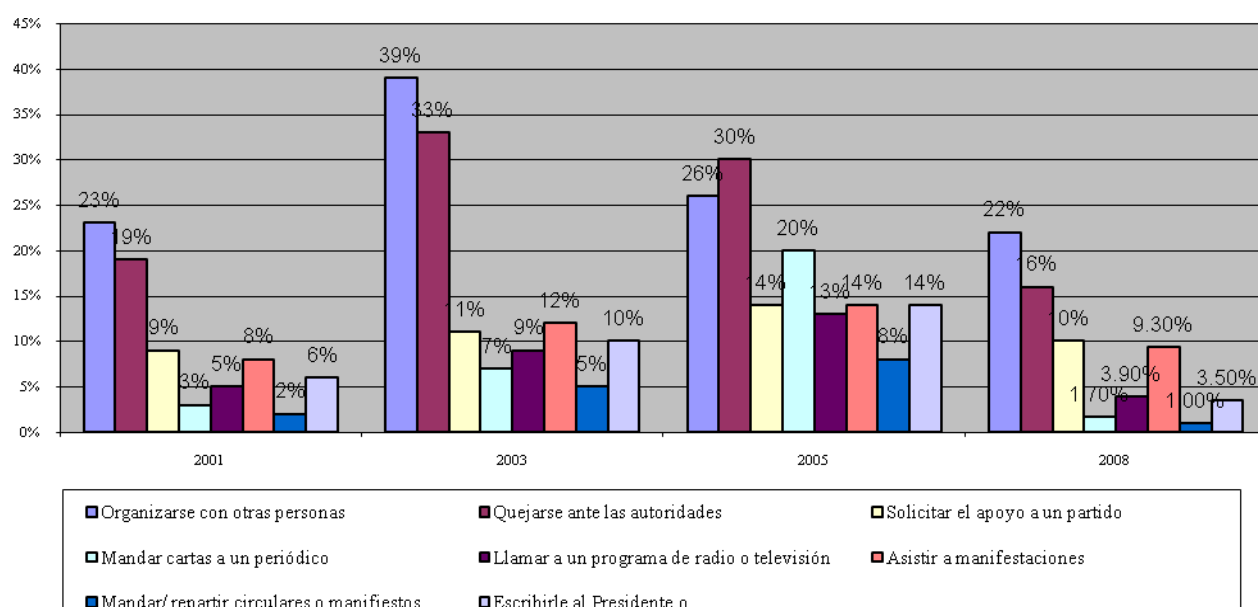
La segunda forma de participación más recurrente entre los mexicanos es la queja ante una autoridad, que en 2003 alcanzó un porcentaje de 33%, en 2005 de 30%, mientras que en los años de 2001 y 2008, apenas se ubicó en 19 y 16%, respectivamente (cuadro 4, gráfico 8).

Cuadro 4. Formas de participación de la población, 2001, 2003 y 2005

Acciones ciudadanas y políticas				
Acciones	2001	2003	2005	2008
Unirse / organizarse con otras personas afectadas	23%	39%	26%	22%
Juntar firmas con los vecinos	20%	---	---	14%
Quejarse ante las autoridades	19%	33%	30%	16%
Firmar cartas/juntar firmas	12%	19%	17%	6.7%
Formular comisiones vecinales	11%	---	---	7.8%
Solicitar apoyo a un partido político	9%	11%	14%	10%
Asistir a manifestaciones	8%	12%	14%	9.3%
Pedir apoyo a algunas organizaciones civiles	8%	13%	16%	9.9%
Escribirle al Presidente, Gobernador o al Presidente Municipal	6%	10%	14%	3.5%
Manifestarse / promover de forma pacífica utilizando un distintivo	5%	9%	7%	4.5%
Llamar a un programa de radio o televisión	5%	9%	13%	3.9%
Pedir ayuda a Diputados o Senadores	5%	6%	11%	5.0%
Publicar cartas en los periódicos	3%	7%	20%	1.7%
Colocar mantas, carteles o fotografías	3%	6%	10%	2.0%
Mandar / repartir circulares o manifiestos	2%	5%	8%	1.0%
Realizar huelgas de hambre	1%	---	---	0.6%

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la ENCUP 2001, 2003, 2005, 2008.

Las otras formas de participación registradas resultan poco relevantes, pues por ejemplo la asistencia a manifestaciones como forma de participación política, apenas si alcanzó porcentajes del 14 y 12%, en 2005 y 2003, respectivamente. Mientras que en 2001 y 2008 el porcentaje registrado fue del 8 y 9%, respectivamente.

Gráfico 8. Formas de participación de la población, 2001, 2003, 2005 y 2008

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la ENCUP 2001, 2003, 2005 y 2008

La participación social de los individuos es potenciada si se realiza a través de su pertenencia a organizaciones de distinto tipo. La identificación de objetivos comunes a una comunidad, a un gremio, a un partido político, permite la acción conjunta de esas agrupaciones con una mayor fuerza que la que permite la acción individual. En México, sin embargo, la pertenencia de los individuos a organizaciones sociales y políticas es muy baja.

“Es escasa la participación de ciudadanos en organizaciones de carácter voluntario. Es mas frecuente su participación en actividades de autoayuda, a menudo inorgánicas, que se hacen particularmente intensas cuando se presentan emergencias de protección civil, como huracanes, inundaciones, o terremotos” (Emmerich y otros, 2009: 97).

De manera voluntaria los mexicanos no acostumbran afiliarse a organizaciones, tal y como se puede ver en el cuadro 5. Solo las organizaciones de tipo religioso presenta índices significativos de afiliación con porcentajes del 37, 23, 22 y 15% , en los años 2001, 2003, 2005 y 2008 respectivamente. La pertenencia a sindicatos también parece significativa, al menos para el 2001, cuando alcanza un porcentaje del 25%, pero disminuye sensiblemente en los años de 2003, 2005 y 2008, con

porcentajes de 12, 10 y 13 %, respectivamente. Habría que señalar que la alta membresía sindical en México, muchas veces tiene un carácter forzado, debido al aún fuerte corporativismo en el país.

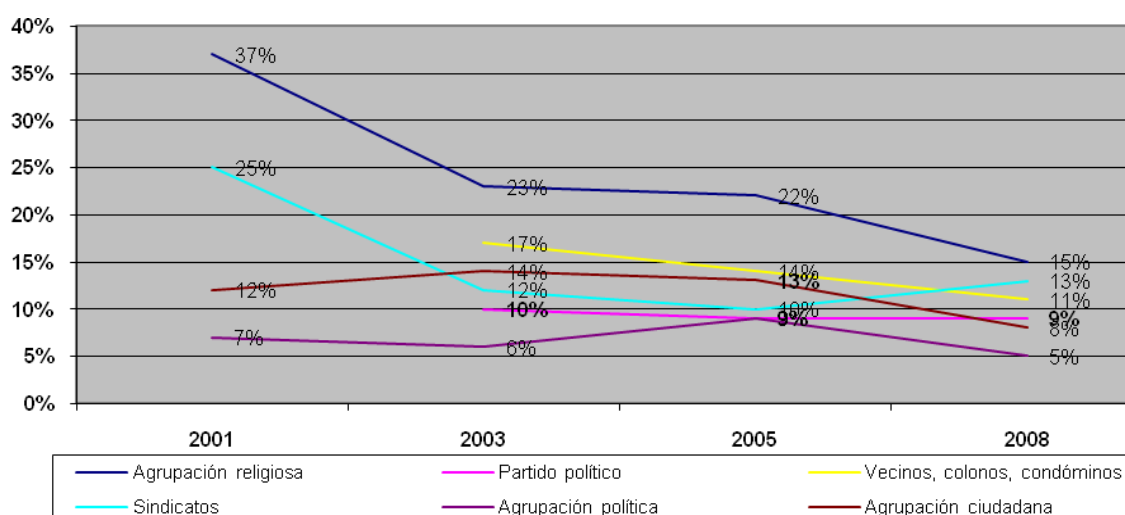
Cuadro 5. Membresía en organizaciones políticas y sociales 2001, 2003, 2005, 2008

Organizaciones	2001	2003	2005	2008
Agrupación religiosa	37%	23%	22%	15%
Vecinos, colonos, condóminos	---	17%	14%	11%
Sindicato	25%	12%	10%	13%
Agrupación agrícola	13%	---	---	5%
Agrupación ciudadana	12%	14%	13%	8%
Agrupación profesional	10%	5%	7%	3%
Agrupación social	9%	9%	10%	6%
Agrupación política	7%	6%	9%	5%
Partido político	---	10%	9%	9%
Otro grupo organizado	5%	---	---	---
Cooperativa	4%	8%	11%	6%
Organización cívica	3%	---	---	---
Institución de beneficencia	2%	6%	7%	3%
De pensionados y jubilados	---	4%	5%	2%
De arte y cultura	---	5%	---	4%

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la ENCUP 2001, 2003, 2005 y 2008.

También puede suponerse que la significativa disminución en la filiación sindical de los años señalados se debe al deterioro de la economía nacional.

La pertenencia a partidos políticos, por su parte, no rebasa el 10% para los mismos años. Lo mismo ocurre para las organizaciones políticas y las organizaciones sociales. Las agrupaciones ciudadanas salen un poco mejor libradas con porcentajes de 12, 14, 13 y 8%, para los mismos años.

Gráfico 11. Membresía en organizaciones políticas y sociales 2001, 2003, 2005 y 2008

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la ENCUP 2001, 2003, 2005 y 2008.

Por último, la participación en los comicios es, sin duda, uno de los mejores indicadores de la legitimidad de una democracia. En México, como se puede ver las tasas de participación han sido de alrededor de 60 % cuando se trata de elecciones presidenciales, alrededor del 60% . En las elecciones intermedias la participación ha disminuido, y en las dos más recientes el porcentaje no ha rebasado el 45%. A pesar de las intensas campañas de concientización llevadas a cabo por las autoridades electorales la participación electoral ronda el 60% en elecciones presidenciales y llega incluso a ser menor en elecciones estatales y municipales (Emmerich y otros, 2009: 58).

Cuadro 6. Participación ciudadana, lista nominal

	1991	1994	1997	2000	2003	2006	2009
Lista Nominal	36,675,367	45,729,057	52,208,966	58,782,737	64,710,596	71,374,373	77, 816, 344
Participación	24,194,239	35,285,291	30,120,221	37,601,618	29,968,371	41,791,322	34,891,037
(%)	65.96	77.16	57.69	63.97	41.68	58.55	44.81

Fuente: IFE

Si no se registran niveles de votación óptimos en México, al menos no dejan de ser significativos. El ciudadano mexicano acude en buena medida a votar, su desencanto con la democracia se debe a factores como la falta de resultados en el

plano económico social, y a otros de carácter político, como la forma misma como se ha conducido el proceso de instauración democrática en México.

CONCLUSIONES

La legitimidad de la democracia mexicana aún es una asignatura pendiente para nuestra sociedad pese a los avances habidos en el plano político electoral durante los últimos años. Aunque en términos generales, a partir del análisis de las ENCUP aquí presentado, se puede advertir una preferencia por la democracia como forma de gobierno entre los mexicanos, en la valoración que los mismos hacen sobre diversos aspectos asociados a ésta, se desprenden una serie de percepciones y actitudes que poco tienen que ver con el ejercicio cotidiano de prácticas auténticamente democráticas, y sí mucho con un desencanto.

Es cierto que se manifiesta de manera más clara la preferencia democrática entre los mexicanos frente a otros tipos de regímenes autoritarios, pero en sus decisiones cotidianas, los mexicanos, la gran mayoría al menos, parecen atados a un pasado de autoritarismo asistencialista que no les permite asumirse como ciudadanos participativos en los asuntos sociales y políticos, por lo cual desdeña las concepciones y, en muchas ocasiones, las mismas instituciones democráticas. La persistencia de una cultura “súbdito”, labrada en varios años de nacionalismo revolucionario, en términos de Almond y Verba, sigue siendo la constante entre grandes franjas de la población mexicana. Es cierto que entre algunos grupos sociales es posible observar actitudes y comportamientos políticos mucho más participativos y comprometidos, como es el caso de los grupos homosexuales y la reivindicación de sus derechos en el Distrito Federal. Pero es el caso solo de ciertas minorías muy movilizadas y comprometidas, que no se presentan o, por lo menos, no con la misma intensidad en otros estados de la república.

Lo anterior parece revelar que en realidad el cambio que ha vivido nuestro país en los últimos años pasa más por lo procedimental, por la creación de leyes, procesos e instituciones en términos de Kelsen, que son indudablemente necesarias, pero que resultan insuficientes, por sí solos, para el desarrollo y consolidación de la democracia. La creación de una institucionalidad política democrática a través de las sucesivas reformas políticas enumeradas, es primordial y su aceptación y óptimo funcionamiento resulta elemento insustituible en la consecución de niveles aceptables de ejercicio democrático.

No obstante lo anterior, la institucionalidad por sí sola no parece ser garantía del funcionamiento democrático, se requiere de actitudes, de comportamientos, de percepciones y de valoraciones positivas en términos de la democracia, por parte de

los diferentes actores sociales. Una cultura política democrática que profundice las prácticas cotidianas, más allá de la pura formalidad de los derechos y obligaciones que le confiere la ley.

Es necesario pensar en una ciudadanía ejercida como forma de lucha permanente, por la reivindicación de demandas e intereses diversos, frente al Estado y, en ocasiones, contra de éste. Una ciudadanía capaz de generar una sociedad civil que funcione como contrapeso del poder político y económico, y que sea el firme sostén de una auténtica democracia. Las instituciones como la escuela, los medios de comunicación y los mismos partidos políticos poco han hecho en el surgimiento y consolidación de una ciudadanía activa con una cultura política moderna. Los partidos con sus afanes de poder por el poder mismo, han alejado a la ciudadanía de la política. Los medios al difundir preferentemente los aspectos más escandalosos del quehacer político, también han contribuido en el distanciamiento ciudadano de los asuntos públicos. Quizás sea la escuela, en particular las universidades, quienes más han contribuido al logro de un cambio cultural en la política; y es la instancia de quien se podría esperar más en este aspecto, al propiciar el acercamiento a la cultura y al ejercicio razonado del saber.

El ejercicio del poder en nuestra realidad, sigue siendo autoritario, discrecional y vertical. Poco han cambiado las cosas en este aspecto. Los funcionarios y los representantes electos no rinden cuentas a la ciudadanía, y su remoción resulta prácticamente imposible. No se ha intentado una verdadera reforma del poder.

Aunado a esto, la cada vez más grave situación económica, contribuye a restar credibilidad a la democracia, pues la oferta social que se hace a la población pocas veces se cumple, provocando que la insatisfacción social se traslade a las percepciones de los individuos sobre la democracia.

La democracia entró en una lógica de mercado, en términos de Shumpeter, en dónde los votantes son vistos como consumidores y estos deben estar atentos a las ofertas de los partidos. El intercambio del voto por la oferta social, al parecer ha resultado insatisfactorio para muchos mexicanos durante los últimos lustros, lo cual manifiestan en sus percepciones en torno de la democracia.

También, en términos de este mismo autor, creemos que podemos hablar de la democracia mexicana como un juego de elites políticas que se disputan el voto de los individuos, y dónde estos no llegan aún a desempeñar el papel de

ciudadanos, protagonistas fundamentales de la democracia. Las elites del poder siguen controlando la dinámica democrática en México. Simplemente que ahora el origen de esas mismas elites se ha diversificado, siendo que en otros tiempos provenía casi exclusivamente del ámbito del nacionalismo revolucionario.

Por su parte, la democracia no ha podido crear los instrumentos necesarios para el logro de una mayor transparencia y control del ejercicio de la gestión pública. Lo mismo puede decirse del ámbito privado, y, en general, de los muy diferentes ámbitos en que se recrea la sociedad mexicana. La corrupción sigue siendo una realidad cotidiana a la cual los mexicanos no han podido enfrentrar, ni mucho menos superar.

Muy cercana a la existencia de la corrupción, esta la inexistencia de un Estado de derecho. El ejercicio del derecho y su aplicación de una manera escrupulosa, eficiente, e imparcial, sigue siendo una excepción en nuestro país. Los argumentos del poder, del influyentismo y del dinero siguen pesando de manera determinante en los asuntos legales.

La justicia no es igual para todos. Un Estado de derecho sólido y honesto es crucial para la vida social y política del país. Su ausencia abona en contra de una auténtica vida democrática, que parte de la existencia de hombres libres e iguales ante la ley.

En este sentido, la creación del Tribunal Federal Electoral para la resolución de las controversias electorales, parece un avance en la democratización del país. Sin embargo, luego de unos primeros años de una actuación aceptable, es innegable la inconformidad que en muchos ciudadanos generó la actuación de esta institución en los comicios presidenciales de 2006. La intervención del presidente de la República, reconocida por el propio Tribunal, de la Confederación Patronal Mexicana, e, incluso, de un candidato sin registro, no fueron suficientes para anular los mencionados comicios, lo cual a los ojos de muchos mexicanos, puso en duda la credibilidad del organismo sancionador, así como del mismo Instituto Federal Electoral. La remoción del consejero presidente del Instituto, así como de los demás consejeros de manera escalonada, después de la elección de 2006, muestra el daño que sufrió la legitimidad del Instituto.

Asimismo, refiriéndonos al caso del manejo de la ley en nuestro país, es evidente que el intento de desafuero de López Obrador como una forma de sacarlo de la carrera presidencial del 2006, es un episodio que dañó severamente la

credibilidad del Estado de derecho en nuestro país. El uso de las instituciones y el retorcimiento de la ley por parte de los partidos políticos como el PRI y el propio PAN, mermaron la credibilidad en el Estado de derecho, y en la democracia misma.

La campaña de “odio” desplegada contra el candidato presidencial, López Obrador, y su desafuero, es una prueba de lo que aquí se afirma. En ambos hechos las elites del poder político y económico se confabularon para cerrar el paso a un candidato no bien visto por esos grupos. En especial, los medios de comunicación encabezados por la televisión, atacaron de manera vehemente al candidato opositor.

Siguiendo a Bobbio, la democracia en México tiene aún promesas incumplidas, como el surgimiento de un ciudadano informado, participativo, que dé sustancia a los mecanismos democráticos. También, de acuerdo con el mismo autor, siguen existiendo ámbitos muy importantes dónde los mecanismos democráticos no pueden operar, como por ejemplo el sindicalismo en nuestro país.

No obstante lo anterior, pensamos que a pesar de la existencia de elites que inciden fuertemente sobre la dinámica democrática, y de ámbitos sumamente autoritarios, la democracia permite la diversificación del poder. Es decir la proliferación de espacios dónde los individuos pueden luchar frente al poder de las elites y del mismo Estado. Es esta la visión de Roberth Dahl, que ve a la democracia como una poliarquía.

En términos de Dahl, pensamos que la democracia en México es perfectible. No podría pensarse en su abandono, sino en su perfeccionamiento. Los aspectos a mejorar pueden ser muchos, y las vías para hacerlo muy distintas. Sin embargo, la forma más efectiva para avanzar en una democracia de mayor calidad, la forma mejor de democratizar a la democracia, debe ser a partir del surgimiento de una ciudadanía plena, participativa, sustantiva, con una cultura política democrática, que impulse los cambios necesarios en las estructuras democráticas.

Muchos de los avances logrados hasta ahora en el plano de la democracia, han provenido de decisiones tomadas desde las altas esferas del Estado, con afanes de legitimación política. Pero es necesario, es deseable, un mayor involucramiento de la sociedad en la dinámica democrática. Sólo a partir de esta participación, la democracia puede adquirir un mayor vigor, una mayor efectividad, ser más eficaz a los diferentes propósitos sociales y políticos que se esperan de ella. El poder podrá conducirse de manera más acorde con los propósitos sociales, si se

cuenta con una ciudadanía enterada, participativa; convencida de los alcances y limitaciones de los mecanismos democráticos.

Las instituciones, los mecanismos, las leyes, y muchas de las realidades que rodean a nuestra incipiente democracia deben ser revisados, superados, en aras del logro de una democracia más plena, más inclusiva, más justa para los diferentes grupos sociales. La democracia debe ser el marco donde se inscriban las diferentes voluntades nacionales frente a los gravísimos problemas por los que atraviesa el país. El logro de una transformación de la cultura política también de las elites políticas, en especial de las dirigencias partidistas, que antepongan un proyecto nacional a las visiones partidarias. Una democracia efectivamente incluyente, tolerante, abierta a las diferentes expresiones sociales y culturales, incluidas la de los más desfavorecidos como los grupos indígenas, es de vital importancia para la viabilidad de nuestra nación.

REFERENCIAS BIBLIOHEMEROGRÁFICAS

- Abellon, Joaquin. "Estudio introductorio", en *Weber, Sociología del poder, Los tipos de dominación*, Alianza, España, 2007.
- Aguilar Camín, Héctor, Meyer Lorenzo. *A la sombra de la revolución mexicana*, Cal y Arena, México, 2001.
- Alanís, María. "Ciudadanos y cultura de la democracia: Encuesta Nacional de reglas, instituciones y valores de la democracia", en SEGOB *Deconstruyendo la ciudadanía*, pp. 31-39, México.
- Almond, Gabriel. Powell, G. *Política comparada. Una concepción evolutiva*, Ed. Paidós, Argentina, 1972, 276 pp.
- Almond, Gabriel. Verba, Sidney. *La cultura cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones*, Ed. Euroamerica, 1987, España, 625 pp.
- Altman, David. "Calidad de la democracia y responsabilidad vertical", en *El diseño de la democracia* (memoria) IEDF, México, 2006.
- Bartra, Roger. *Anatomía Del Mexicano*, ¡DEBOLS!LLO, México, 2007.
- Bauman. *Tiempos líquidos*. Tusquets, México, 2008.
- Beck, Ulrich. *¿Qué es la globalización?*, Paidos, España, 1988.
- Bobbio, Norberto. *El futuro de la democracia*, Fondo de cultura económica, México, 1989.
- Canto, Manuel. *Derechos de ciudadanía*. Icaria-UAM Azcapotzalco y Xochimilco. España 2005.
- Carpizo, Jorge. Prologo, en *Democracia sin garantes. Las autoridades vs. La democracia electoral*, Córdova Lorenzo y Salazar Pedro, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2009.
- Cook María Lorena, Middlebrook kevin J., Molinar Horcasitas. *Las dimensiones políticas de la reestructuración económica*, Cal y Arena, México, 1996.
- Córdova, Arnaldo. *La formación del poder político en México*, Serie Popular ERA, México, 1991.
- Cornelius, Wayne. *Los inmigrantes pobres en la Ciudad de México y la política*, Ed. FCE, México, 1986, 351 pp.
- Cosío Villegas, Daniel. *El sistema político mexicano*, Cuadernos de Joaquín Mortiz, México, 1989.
- Crespo, José Antonio, "Una cultura política para la democracia real", en *Metapolítica* Septiembre-Octubre de 2006, México.

- Crespo, José Antonio. 2007. "Cultura cívica y consolidación democrática bajo el gobierno de Fox", en *Cultura política y participación ciudadana en México antes y después de 2006*, Secretaría de Gobernación, México, pp. 249-282.
- Cruz Revueltas, Juan Cristóbal. "Hacia una cultura democrática", en *Meta política*, Sep-Oct del 2006 volumen 10, num. 49, México 2006.
- Cuna, Enrique. "Aplicación y crítica del enfoque sistémico para el estudio de las culturas políticas en México", en revista *Sociológica*, año 22, número 64, mayo-septiembre, 2007, pp. 179-209.
- Cuna, Enrique. *Instituciones Políticas de atención y cultura política juvenil en México (el caso de la Cd. de México)*. Tesis de Doctorado, UAM Iztapalapa, México, 2004.
- Dahl, Robert. *La democracia, una guía para los ciudadanos*. Taurus, México, 2006.
- Desouza, Boaventura. "Globalización y Democracia", en *Memoria*, num. 175, septiembre del 2003, México 2003.
- Deutsch, Kart. *Política y gobierno*, Ed. FCE, México, 1993, 608 pp.
- Deutsch, Kart. *Los nervios del gobierno. Modelos de comunicación y control políticos*, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1980, 270 pp.
- Dosier Metapolítica, "La cuestión democrática", en *Metapolítica* octubre-diciembre de 1997, México.
- Durand Ponte, Víctor. 1997. *La cultura política de los alumnos de la UNAM*, Ed. UNAM, México.
- Durand Ponte, Manuel. 2002. "El imperio de la desconfianza: debilidad mexicana", en *Acta Sociológica* núm. 36, México, septiembre-diciembre, pp.85-121.
- _____. 2004. *Ciudadanía y Cultura Política en México, 1993-2001*, México, Ed. Siglo XXI,
- _____. 2006. "Confianza y eficacia ciudadana en una sociedad con alta desigualdad", en *Acta Sociológica* núm. 46, México, mayo-octubre, pp. 119-144.
- _____. 2007. "Cultura Política y Participación Ciudadana", en *Cultura política y participación ciudadana en México antes y después de 2006*, Secretaría de Gobernación, México, 155-189.
- Durkheim, Emilio. *Lecciones de sociología*, Quinto sol, México, 1985.

- Dutreinit Bielous, Silvia. 1996. "Comportamientos políticos en las transiciones: una visión de las innovaciones", en Peschard, Jacqueline (coord.). *Cultura política*, pp. 73-83, Ed. CNCPAP, México.
- Duverger, Maurice. *Instituciones políticas y derecho constitucional*. Ariel, México, 1992
- Emmerich, Gustavo. "Dominación, poder, estado moderno y capitalismo en Max Weber", en revista *Iztapalapa*, año 10, Número 19, Enero-Julio, 1990, UAM Izatapalapa, México, 1990.
- Emmerich, Gustavo y otros. *Situación de la Democracia en México*. UAM-I, México, 2009.
- Escamilla, Alberto. "El paradigma de la democracia", En *bien común y gobierno*, Junio del 2001, México 2001.
- Espinoza, Víctor. 2007. "Compromiso cívico y participación social en México. Una perspectiva nacional y regional, 2001-2005" en *Cultura política y participación ciudadana en México antes y después de 2006*, Secretaría de Gobernación, México, pp. 81-106.
- Fernández Poncela, Ana. 1997. *Hombres, Mujeres y política*, Ed. UAM, México, 219 p.
- Fernández Poncela, Ana. 2004. *Cultura política y jóvenes en el umbral del nuevo milenio*, IMJ., p. 147.
- Forte, Riccardo. Silva, Natalia (coords.). 2006. *Cultura política en América*, Ed. UAM, México, 218 pp.
- García Canclini, Néstor. *La Globalización Imaginada*, Paidós, México, 2005.
- García Roberto. "La democracia y el pluralismo", en García Jurado y Flores Rentería, coordinadores. *La democracia y los ciudadanos*, UAM-X, México, 2003.
- González Casanova, Pablo. *La Democracia en México*, Era, México, 1995.
- González Pedrero, Enrique. *La cuerda tensa*, Fondo de Cultura Económica, México, 2006.
- Gómez Tagle, Silvia. *De la alquimia al fraude en las elecciones mexicanas*, GV editores, 1994, México.
- Guerrero, Manuel Alejandro. *México; La Paradoja de su Democracia*, Universidad Iberoamericana, 2004.
- Guiddens Anthony. *Un Mundo Desbocado, Los efectos de la globalización en nuestras vidas*, Taurus, 2000.

- Gutiérrez, Roberto. "A manera de introducción: elementos para un análisis de la cultura política contemporánea en México", en *Revista A, UAMA*, Vol. IX, Num. 23-24, México, 1988, p. 9-16.
- "Algunas aportaciones recientes para el estudio de la cultura política en México", en Héctor Rosales. *Cultura política e investigación urbana*, UNAM, 1990, México, pp. 141-149.
- "Cultura Política y Transición a la democracia", en Salazar C. Luis (coord.), México 2000: Alternancia y transición a la democracia, Cal y Arena, pp. 265-228, México, 2001.
- Roberto Gutiérrez López, *Identidades Políticas y Democráticas*. México, Diciembre 2001.
- "Notas sobre la relación entre cultura política e instituciones" en Jacqueline Peschard (Coord). *Cultura política*, Congreso Nacional de Ciencia política, México, 1996, p. 89.
- "Obstáculos culturales para la consolidación democrática de México. Un acercamiento al caso de las élites políticas", en revista *Diálogo y debate*, año 3, num. 11, enero-marzo 2000, p. 130-144.
- Sánchez, Tania. "Después de la alternancia: los obstáculos culturales de la consolidación democrática", en revista *El Cotidiano*, núm. 129, enero-febrero 2005, pp. 38-44.
- 2007. "Conocimiento ciudadano sobre la democracia en México a través de la ENCUP", en *Cultura política y participación ciudadana en México antes y después de 2006*, Secretaría de Gobernación, México, pp. 59-80.
- Hernández Prado, José. *El menos común de los gobiernos... El sentido común según Thomas Reid y la democracia liberal*. UAM-A, México.
- Inglehart, Ronald. "Cultura política y democracia estable", en *Revista Española de investigaciones sociales*, núm. 42, CIS, Madrid.
- *The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among western Publics*, Princenton University Press; "The renaissance of political culture", en *American Political Science Review*, vol. 4, diciembre de 1988, pp. 1203-1230.
- Kelsen, Hans. *Esencia y valor de la democracia*. Colofón, México 2005.
- Krotz, Esteban. "Aproximaciones a la cultura política mexicana como fenómeno y como tema de estudio" en Esteban Krotz (coord). *El estudio de la cultura política en México*, Ed. CNCA, México, 1996, p.11-38.

- Lechner, Norbert. "El precario relato democrático", en revista *Nexos*, núm. 298, octubre de 2002, p. 47-48.
- Lechner, Norbert. 1995. *Cultura política y gobernabilidad democrática*, conferencia magistral, IFE, México, 1995.
- Lechner, Norbert. *Los patios interiores de la democracia*, Fondo de cultura económica, México, 2002.
- Linz, Juan. 1987. *La quiebra de las democracias*, Ed. Alianza, Madrid.
- Macpherson, C. B., *La democracia liberal y su época*, Alianza editorial, España, 2003.
- Marshall, T.H., "Citizenship and Social Class". En Marshall, T. H. (comp.), *Class, Citizenship and Social Development* (Nueva York: Doubleday, 1965), pp. 22 y 23. Allí se reproduce el texto original de 1949.
- Merino, Mauricio. 2003. *La transición votada*, Ed. FCE, México, 247 pp.
- Merkl, Peter. *Teorías políticas comparadas*, Traducción Nuria Pares, Ed. Roble, México, 1973, 526 pp.
- Meyer, Lorenzo. *El estado en busca de ciudadano*, Océano, México, 2005.
- Meynaud, Jean. Lancelot, Alain. *Las actitudes políticas*, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1965, 125 pp.
- Meyer, Lorenzo. *El Estado en busca de ciudadano, Un ensayo sobre el proceso político mexicano contemporáneo*, Océano, México, 2005.
- Molinar Horcasitas, Juan. *El tiempo de la legitimidad*, Cal y Arena, 1991.
- Moreno, Alejandro. 2003. *El votante mexicano*, Ed. FCE, México, 249 pp.
- O'Donnell, Guillermo. *Acerca del estado en América latina contemporánea, 10 tesis para discusión*. Texto propiciado por la Dirección para América latina y el Caribe, del DRALC-PNUD. 2003.
- Ortíz Pinchetti, "La transición mexicana avances y retos", en *La transición difícil*, Almeyra y otros, La Jornada Ediciones, 1998.
- Pérez Correa Fernando, "Vicisitudes de la democracia Mexicana", en ESTE PAÍS Julio 2006, México.
- Peschard, Jacqueline. *La cultura política democrática*, Ed. IFE, México, 1994, 52 pp.
- PNUD. *La democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas*, Ed. Aguilar, Argentina, 2004.

- PNUD. *La democracia de ciudadanía. Una agenda para la construcción de ciudadanía en América Latina*, PNUD, 2009.
- Putman, Robert. 1993. *Making democracy work. Civic traditions in modern Italy*, Ed. Princenton University Press, Princenton.
- Rubio Carracedo, José. *Teoría crítica de la ciudadanía democrática*. Trota, 2007.
- Salinas Figueredo, Dario (Coordinador). *Problemas y perspectivas de la democracia en América latina*. Triana editores, Alas (Asociación latinoamericana de sociología), Universidad Iberoamericana, México, 1999.
- Sartori, Giovanni. *La política, lógica y método en las ciencias sociales*, 3ª ed., Ed. FCE, 2002, 336 pp.
- Sartori, Giovanni. Morlino, Leonardo (comp.). *La comparación en las ciencias sociales*, Ed. Alianza Editorial, España, 1999, 177 pp.
- Sartori, Giovanni. *¿Qué es la democracia?*, Taurus, México, 2003.
- Schmitt, Carl. *El concepto de lo político*. Alianza Editorial, España 2006.
- Schumpeter, J. A., *Capitalismo, socialismo y democracia II*, Orbis, Biblioteca de economía, España, 1983.
- Secretaría de Gobernación. 2001. *Primera Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas*, México, Poder Ejecutivo.
- Secretaría de Gobernación 2003. *Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas*, México, Poder Ejecutivo.
- Secretaría de Gobernación. 2005. *Tercera Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas*, México, Poder Ejecutivo.
- Secretaría de Gobernación, 2007. *Cultura política y participación ciudadana en México antes y después de 2006*, México, 311 pp.
- Segovía, Rafael. *La politización del niño mexicano*, El Colegio de México, México, 1994.
- Serrano Gómez, Enrique. *Legitimación y racionalización, Weber y Habermas: la dimensión normativa de un orden secularizado*. Anthropos UAM, México, 1994.
- Tamayo. "Ciudadanía e identidades urbanas", en *Identidades urbanas*, Tamayo y Wildner. UAM, Cultura Universitaria 85, Serie Ensayo, México, 2005.
- Tamayo, Sergio. "Especies de ciudadanía, especies en conflicto", en *Sociológica* Mayo-Agosto 2006, año 21 número 61, UAM- Azcapotzalco, México, 2006.
- Tamayo, Sergio. *Los Veinte Octubres Mexicanos, Ciudadanías e Identidades Colectivas*. UAM- Azcapotzalco, México, 1999.

- Vidal, Godofredo. *Teoría democrática contemporánea*, UAM Azcapotzalco, México, 2007.
- Weber, Max. *Economía y Sociedad*, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 1994.
- Zovatto, Daniel. "Valores, percepciones y actitudes hacia la democracia. Una visión comparada latinoamericana, 1996-2002", en SEGOB *Deconstruyendo la ciudadanía*, pp. 51-77, México, 2002.